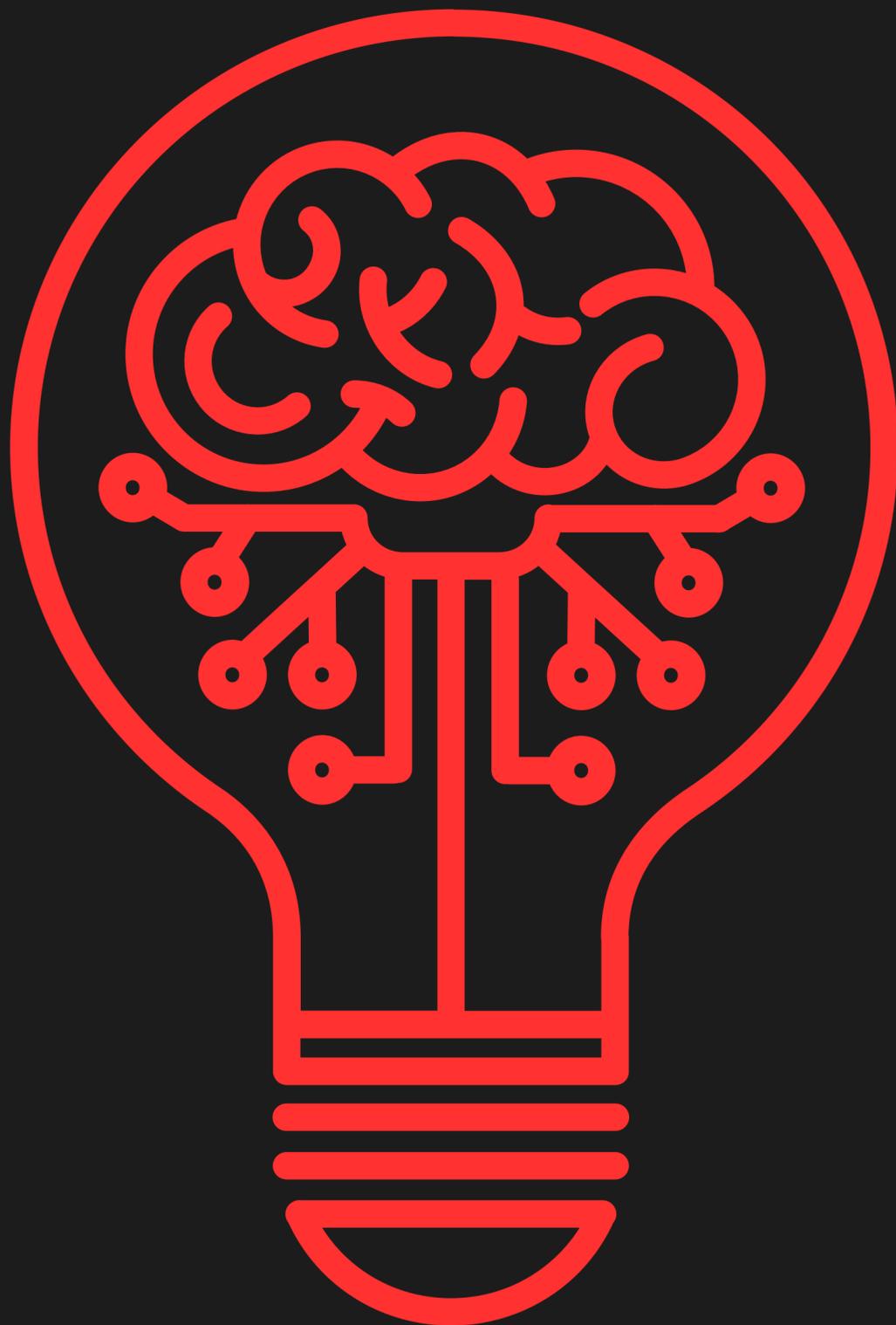


Blog de l'Auditor

RECOPIATORI D'ARTICLES PUBLICATS AL BLOG DE L'AUDITOR



Col·legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

EL CØL·L361

Recopilatori d'articles publicats al Blog de l'Auditor

ISSN 2014-3893

ÍNDEX

Auditoria

- **2022, el año de la nueva normativa internacional de gestión de la calidad (ISQM 1)**
Juan Luis Casanova _____ 2
- **Auditar la empresa familiar**
Jordi Tarragona _____ 5
- **La designación de un auditor de cuentas ejerciente como experto independiente - actuación en el ámbito pericial. Nuestro valor diferencial**
David Muntané _____ 7
- **Adaptación a las normas de control de calidad interno**
Enrique de Fez _____ 10
- **NIA-ES 315 Revisada. Canvia realment la forma d'identificar i valorar els riscos d'incorrecció material?**
Departament Tècnic CCJCC _____ 14
- **Millenials: oportunitat per a les firmes PIME d'auditoria?**
Marc Casares _____ 18
- **Auditors, una espècie en extinció?**
Jordi Anducas _____ 21

RSE

- **L'Estat d'Informació No Financera**
Joaquin Solana i Mireia Leiva _____ 25
- **Com comptabilitzar el valor social de les organitzacions**
Xavier Carbonell i Silvia Ayuso _____ 28
- **Los riesgos empresariales por el cambio climático**
Laura Gómez Soriano _____ 30

Equitat de Gènere

- **Continuar avanzando hacia la diversidad e inclusión**
Maite Poyos _____ 33
- **Equitat, no és només justícia, és una necessitat**
Isabel Perea _____ 36

Concursal

- **El reestructurador: clave para preservar nuestro tejido industrial**
Antoni Gómez _____ 39

ÍNDEX

Fiscalitat

- **El nou valor de referència als efectes de les transaccions immobiliàries**
Josep M. Noguera i Amiel _____ 42
- **Deducibilidad de la retribución de administradores: la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de febrero de 2022 marca un nuevo hito en favor del contribuyente**
Juan Arroyo _____ 47
- **Cesión de vehículos a empleados: cambio de criterio en IVA imputable al trabajador**
Andres Grau _____ 51

Tecnologia

- **Perspectiva de regulación de activos digitales a partir de iniciativas europeas**
Luz Parrondo _____ 54

Comissió de Joves

- **El teletrabajo que vino para quedarse. Reflexiones de la Comissió de Joves del Col·legi**
Comissió de Joves del Col·legi _____ 59

Sector Públic

- **Las auditorías obligatorias de las entidades dependientes del Sector Público Local. Algunas reflexiones en el primer año de su aplicación**
Pere Ruiz Espinós _____ 65

Premsa

- **Pimes, auditoria i competitivitat** _____ 72
- **El reestructurador en España, clave para preservar la industria** _____ 74
- **España se sitúa a la cola entre los países de la UE en auditoría de cuentas de los Ayuntamientos** _____ 76
- **L'EINF en les empreses lleidatanes** _____ 79

Auditoria





27 de
gener
de 2022

2022, el año de la nueva normativa internacional de gestión de la calidad (ISQM 1)



Juan Luis Casanova
Socio de Audria Auditoria Consultoria, S.L.P.
& miembro del Comité Técnico del CCJCC

En diciembre de 2020 el International Auditing and Assurance Standards Board (en español, Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento y, en adelante, IAASB), aprobó tres normas relativas a la gestión de la calidad que suponen un nuevo enfoque en la manera de diseñar y plantear el sistema de control de la calidad por parte de los auditores y las firmas de auditoría:

- La International Standard on Quality Management (en español, Norma Internacional de Gestión de la Calidad y, en adelante, ISQM 1), que es la norma de gestión de calidad de las firmas de auditoría que realizan auditorías o revisiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad o servicios relacionados.
- La ISQM 2, que trata del nombramiento y elegibilidad del revisor de la calidad del encargo y de la realización y documentación de la revisión de la calidad del encargo.
- La NIA-220 revisada, que aborda la responsabilidad de cómo el socio lleva a cabo la gestión de la calidad a nivel del encargo concreto.

La ISQM 1 establece que las firmas de auditoría deberán tener diseñados e implementados sus sistemas de gestión de la calidad conforme a lo previsto en dicha norma el 15 de diciembre de 2022. Por su parte, la ISQM 2 y la ISA 220 revisada prevén su entrada en vigor para las auditorías de estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien el 15 de diciembre de 2022 o con posterioridad a dicha fecha.

A nivel nacional, en la fecha de redacción de este artículo, el trabajo para la adopción de las normas internacionales de gestión de la calidad por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) está muy avanzado, siendo inminente la publicación de la resolución por la que se inicia la fase de consulta pública sobre las normas adaptadas y se establece la fecha de entrada en vigor de las mismas en España que, previsiblemente, no diferirá sustancialmente de la establecida por IAASB.

Adicionalmente, debe considerarse que en España, tanto la Ley de Auditoría de Cuentas como el Reglamento de Auditoría (Real Decreto 2/2021 de 12 de enero y, en adelante RLAC) regulan la organización interna de los auditores y sociedades de auditoría, de la que forma parte el sistema de control de calidad interno. A este respecto, resulta fundamental tener presente que la disposición final segunda del RLAC establece que lo dispuesto en el capítulo IV del título II (Organización interna), el artículo 72.2 (Deber de conservación y custodia) y 87 (Estructura organizativa de los auditores de entidades de interés público) entrará en vigor el 1 de julio de 2022 y, en consecuencia, lo allí previsto será aplicable a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales correspondientes a ejercicios económicos cerrados con posterioridad a dicha fecha.

Asimismo, la Disposición final segunda del RLAC establece que en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del mismo (referida ésta al 1 de julio de 2022 según manifestaciones de representantes del ICAC), se adaptarán las normas de control de calidad interno de los auditores de cuentas a lo establecido en los artículos 28 Organización interna de la LAC y 67 Sistema de control de calidad interno del RLAC, a iniciativa de las corporaciones profesionales de auditores de cuentas, proceso que, como indicábamos más arriba, está a punto de concluir.

Hechas estas matizaciones en cuanto a calendarios de entrada en vigor y normativa a nivel internacional y nacional y centrándonos en la ISQM 1, se ha de destacar que el cambio de denominación "gestión de la calidad" en lugar de "control de la calidad", es indicativo del objetivo que persigue esta nueva norma: La gestión proactiva de la calidad por la propia firma. Así pues, se pasa de un enfoque de cumplimiento de requisitos y principios, según el modelo vigente que propone la International Standard on Quality Control (en español, Norma Internacional de Control de la Calidad y, en adelante, ISQC 1), a un enfoque de identificación y evaluación de los riesgos de calidad para su posterior gestión mediante el diseño, las políticas y procedimientos más adecuados para cada firma, según sus circunstancias, haciendo posible la escalabilidad según el tamaño y actividades que realice cada firma.

La ISQM 1 trata los siguientes ocho componentes:

1. El proceso de identificación y valoración del riesgo de la firma de auditoría

Introduce un enfoque basado en riesgos y requiere que las firmas de auditoría establezcan objetivos de calidad, identifiquen y evalúen riesgos de calidad, y diseñen e implementen respuestas que aborden los riesgos de calidad.

2. Gobierno y liderazgo

En este apartado se incluye el compromiso de la firma con la calidad a través de su cultura, lo que incluye reforzar el rol de la firma en servicio del interés público mediante la realización de encargos de calidad y el reconocimiento de la importancia de la calidad en las acciones y decisiones estratégicas de la firma. Este componente también incluye la responsabilidad de todo el personal con la calidad y la rendición de cuentas de la dirección de la firma sobre la calidad. Se requiere de una estructura organizativa con asignación de funciones, responsabilidades y autoridad adecuada, que disponga de recursos, incluidos los financieros, que permitan la implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad de la firma.

3. Requerimientos de ética aplicables

Establece los objetivos de calidad que tratan el cumplimiento de las responsabilidades de conformidad con los requerimientos de ética aplicables, incluidos los relacionados con la independencia, a los que están sujetos la firma y sus encargos (por ejemplo, el Código de ética del IESBA). También trata otras cuestiones externas a la firma, como las relativas a las firmas de una red o a los proveedores de servicios, así como la necesidad de la firma de abordar los requerimientos de ética relevantes o sus compromisos con impacto en terceros, incluido el principio de confidencialidad.

4. Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y encargos específicos

Requiere establecer objetivos de calidad que aborden los juicios de la firma sobre si se debe aceptar o continuar una relación con un cliente o un encargo específico sobre la base de la información obtenida a cerca de la naturaleza y las circunstancias del encargo y la integridad y valores éticos del cliente (incluida la dirección y, en su caso, los responsables del gobierno de la entidad) y sobre la capacidad de la firma para realizar el encargo de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Esto incluye que las prioridades financieras (por ejemplo,

honorarios o beneficios de la firma) u operativas (por ejemplo, de crecimiento o dirección estratégica) de la firma no conduzcan a juicios inapropiados sobre si se debe aceptar o continuar una relación con un cliente o un encargo específico.

5. Realización del encargo

Los objetivos de calidad que tratan la realización de los encargos abordan las responsabilidades del equipo y el socio del encargo, (incluido el juicio y escepticismo profesional), la planificación, supervisión de los equipos y revisión del trabajo, así como los recursos asignados al encargo, las consultas, las diferencias de opinión; y la compilación y conservación de la documentación del encargo.

6. Recursos

La firma de auditoría debe establecer objetivos de calidad que traten la forma apropiada de obtener, desarrollar, utilizar, conservar, distribuir y asignar recursos de manera oportuna. El personal debe tener formación, competencia, capacidad y experiencia para participar en los encargos realizados por la firma. Con relación a los recursos tecnológicos (aplicaciones de TI, herramientas de auditoría) y los recursos intelectuales (la metodología, guías, plantillas, políticas o procedimientos escritos de la firma) se deben implementar, mantener y utilizar para el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y la realización de los encargos. También aborda las responsabilidades de la firma cuando las personas provienen de fuentes externas (la red, otra firma de la red o un proveedor de servicios).

7. Información y comunicación

Establece los objetivos de calidad que tratan la obtención, generación o utilización de la información con respecto al sistema de gestión de calidad y de su comunicación dentro de la firma y a terceros de manera oportuna. Hace énfasis en el flujo continuo de información relevante y fiable dentro de la firma y con los equipos del encargo, y refuerza la necesidad de comunicación bilateral sólida en toda la firma. Impulsa a las firmas a identificar, evaluar y hacer frente a las amenazas de los requerimientos de ética y obtener, al menos una vez al año, una confirmación documentada del cumplimiento de los requerimientos de independencia, así como establecer políticas y procedimientos para recibir, investigar y resolver las quejas y denuncias acerca de trabajos que no se han realizado de conformidad con las normas profesionales o por incumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de gestión de la calidad.

8. El proceso de seguimiento y corrección

Requiere que la firma de auditoría establezca un proceso de diseño seguimiento y corrección de las actividades de seguimiento, éstas incluirán la inspección de encargos finalizados y determinará los encargos y socios de los encargos a seleccionar, que incluirá al menos un encargo finalizado por cada socio de manera cíclica determinada por la firma de auditoría. La firma de auditoría evaluará los hallazgos para determinar si existen deficiencias graves y generalizadas y dará respuesta a las mismas. Las personas que realizan actividades de seguimiento deben tener la competencia y capacidad, incluido el tiempo suficiente para realizarlas. En ningún caso los miembros del equipo del encargo o el revisor de la calidad de un encargo podrán realizar una inspección de ese encargo. En el caso de una firma de auditoría menos compleja, es posible que no disponga de personal con la competencia, capacidad, tiempo u objetividad para realizar las actividades de seguimiento, en este caso podrá recurrir a los servicios de la red o a un proveedor de servicios.

Por todo lo anterior, la nueva ISQM 1 supone un cambio de paradigma para las firmas de auditoría, que deberán pasar del enfoque de cumplimiento de requisitos y principios de la ISQC 1, a un enfoque proactivo en el que se deben establecer objetivos de calidad, identificar y evaluar los riesgos de calidad y diseñar las respuestas a los riesgos en función del tamaño de la firma y del tipo de trabajos realizados. La adopción de estas nuevas normas supondrá una oportunidad para consolidar el compromiso con la calidad que ya forma parte de la cultura de nuestras firmas.





19
d'abril
de 2022

Auditar la empresa familiar



Jordi Tarragona
Conseller de famílies empresàries

Sabeu aquell que diu que "en la contabilidad las existencias se conocen como inventario, precisamente porque pueden estar inventadas". Y es que la contabilidad es una ciencia exacta que puede cambiar el color de la última línea de la cuenta de pérdidas y ganancias; por eso en la memoria se deben reflejar los cambios de criterio.

Algunas empresas han de auditar sus cuentas por obligación legal, pero la inmensa mayoría no. Muchas de estas ni se plantean la duda shakespeariana de "¿auditar o no auditar?, esa es la cuestión". Y es que ven la auditoría no solo como un engorro, sino además como un gasto; y son acérrimas seguidoras del viejo aforismo de "euro ahorrado, euro ganado".

El 78 % de las empresas españolas son familiares, y de ellas aproximadamente el 70 % están en primera generación. Si estas son de propietario único puede pensar como Juan Palomo, "yo me lo guiso, yo me lo como". Pero "no es lo mismo la empresa del fundador que la de primos". A medida que aumenta el número de socios es conveniente establecer sistemas profesionales en el funcionamiento de la empresa, y entre ellos está la auditoría de cuentas.

Entre las fortalezas de la empresa familiar está la confianza, pero debemos recordar que "solo te puede traicionar aquel en quien confías". Los lazos fraternos pueden ser muy sólidos y efectivos, pero "Caín mato a Abel". En la empresa familiar no vale Mateo 6.3 "que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha"; porque se refiere al acto de dar limosna, no al de gestionar una empresa.

El 78% de las empresas españolas son familiares, y de ellas aproximadamente el 70% están en primera generación

Dejando aparte las cuestiones legales y bíblicas, y a pesar de los inconvenientes, es recomendable hacer auditoría; sobre todo si no todos los accionistas trabajan en la empresa. Hacer auditoría tiene varias ventajas. Ayuda a mejorar la contabilidad y los controles internos, detectando errores y omisiones. Mejora la fiabilidad de las cuentas y el conocimiento del estado patrimonial real de la empresa. Reduce la responsabilidad de los administradores. Da seriedad frente a los proveedores y clientes. Ayuda a obtener financiación. Mejora la confianza de los accionistas. Puede ayudar a ver áreas de mejora. Ayuda a la formación del personal de la empresa que interviene, sobre todo en las primeras ocasiones. Una mejor información ayuda a tomar decisiones más acertadas.

Para las sociedades cotizadas la ley establece que la comisión de auditoría estará formada de forma exclusiva por consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales, al menos, tendrán que ser consejeros independientes, y uno de ellos designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en contabilidad y auditoría. Esto también es recomendable en las sociedades no cotizadas. Yo recomiendo a las empresas familiares que dejen que los socios que no están en el día a día de la empresa escojan a los auditores, y que estos les reporten a ellos. También les recomiendo que pongan los libros de contabilidad a disposición de los socios, sin necesidad de que estos los soliciten, ya que pedirlos levanta suspicacias que pueden derivar en conflictos.

Además de la auditoría contable, en las empresas conviene auditar cuestiones como los riesgos laborales o medioambientales, la responsabilidad penal de los administradores y el funcionamiento de los órganos de dirección y gobierno, entre otras cuestiones. Ante las reticencias de algunos de mis clientes les planteo que harían si tuviesen todo su patrimonio invertido como socios minoritarios alejados del gobierno en una sociedad no familiar.

En las empresas familiares, que son la mayoría, además es recomendable auditar de forma periódica la comunicación en la familia y entre la familia y la empresa, porque la comunicación sincera es la mejor prevención para la gestión de los inevitables conflictos que pueden surgir en toda relación humana, en la que puede haber intereses legítimos dispares. También hay que auditar el funcionamiento de los órganos de gobierno de la familia, ya que la sobremesa familiar tiene una eficacia limitada pasada la primera generación; la implicación de la siguiente generación en la continuidad de la empresa, lo que no quiere decir necesariamente trabajar en ella; los planes de relevo en la propiedad, gobierno y dirección, con sus correspondientes planes de contingencia; y las normas de relación entre la familia y la empresa. Nada de ello garantiza la continuidad de la empresa familiar, pero aumenta sus probabilidades.



Visualitza aquest article al Blog de l'Auditor



7 de
juny
de 2022

La designación de un auditor de cuentas ejerciente como experto independiente – actuación en el ámbito pericial. Nuestro valor diferencial



David Muntané
Munt Audit & Forensic, SLP

La figura del perito financiero o económico ha ido ganando notoriedad e importancia tanto en el ámbito empresarial como en el personal en los últimos tiempos. La participación del perito económico – financiero resulta crítica en la mayoría de los procedimientos judiciales, pues su papel como experto independiente servirá de apoyo para resolver conflictos y controversias de diversa índole- siempre dentro del marco de la economía, las finanzas o la contabilidad- entre varias partes interesadas.

El ordenamiento jurídico español establece que para considerar perito a un profesional debe tener la formación y experiencia suficiente sobre la materia en cuestión sobre la cual se le ha requerido que exprese su opinión y, en definitiva, concluya sobre una serie de extremos requeridos que, en nuestro caso, versarán sobre aspectos contables, económicos y/o financieros.

Este experto independiente en base a su conocimiento de la materia realizará las revisiones y acreditaciones pertinentes que le permitan elaborar y concluir de forma experta e independiente sobre los procedimientos objeto de su intervención.

En el ámbito de la empresa suelen existir delitos o conflictos económicos que requerirán de un experto contable-financiero que analice y concluya sobre aspectos tales como: valoración de empresas, delitos fiscales, administración desleal, competencia desleal, apropiación indebida,

cuantificación del daño patrimonial, lucro cesante y daño emergente, siempre desde la vertiente del conocimiento técnico en materia contable y financiera y alejándonos de cualquier valoración jurídica.

No descubriremos ahora qué es una auditoría de cuentas, pero sí que valdría la pena recordar que un auditor está totalmente habituado a aplicar técnicas y procedimientos propios, tales como preguntas y observaciones ante el personal, confirmaciones de terceros, verificaciones del control interno, evaluación de riesgos, aplicación de pruebas sustantivas y de contraste de la información proporcionada para obtener, siempre antes de su conclusión, una elevada razonabilidad sobre los importes e información contable, económica-financiera que se le proporciona. Para ello, antes de emitir una opinión al respecto se asegura vía evidencia documental de la integridad, existencia y valoración de las cifras que se reflejan.

La aplicación de métodos comparativos, de revisión analítica sobre la razonabilidad de determinadas desviaciones y proyecciones es, entre otros, su día a día.

Otro de los valores diferenciadores y que claramente mejora la solvencia del informe pericial son los procedimientos que, por el conocimiento del auditor, este puede aplicar cuando le proporcionan unos estados financieros sobre los cuales debe realizar determinadas proyecciones (estimaciones), cálculos de márgenes y otros procedimientos análogos pues, para cuantificar un determinado parámetro y, en definitiva, soportar los extremos y conclusiones requeridas, se aplican procedimientos de revisión sobre los estados financieros empleando técnicas propias que se utilizan en auditoría, circunstancia que es prácticamente inviable en otros profesionales por su falta de experiencia y/o de credenciales vía formación regulada.

Los estados financieros en las actuaciones periciales del ámbito económico-financiero son, en la mayoría de los casos, una fuente documental básica. En este sentido, si bien la actuación del perito no consiste de por sí en una auditoría de los mismos, es también cierto que un auditor está habituado a su revisión y detección de posibles riesgos o errores en los mismos, por lo que aportará un plus de fiabilidad a la información sobre la que sustentará sus conclusiones.

En encargos en los que el dictamen pericial versa especialmente sobre importes y epígrafes que forman los estados financieros y estos no están auditados, cobra especial relevancia que el perito sea un auditor ejerciente, pues dispone de las capacidades, experiencia y recursos necesarios para aportar mayor exactitud, integridad y fiabilidad a la información financiera sobre la que basará sus conclusiones.

“La veracidad, integridad y exactitud de la información financiera es clave para alcanzar una conclusión acertada”

Si partimos de la base de que un auditor de cuentas ejerciente, por su actividad profesional, está acostumbrado a actuar con confidencialidad y rigurosidad en el desempeño de su trabajo, con el mayor de los grados de conocimiento técnico contable, donde, de antemano, conoce que el ser imparcial e independiente es un aspecto básico, con independencia de quien le contrate, son valores que se automatizan, asumen y subyacen en su emisión de informes periciales y ratificación posterior, la cual, en ocasiones, es tanto o más importante que el dictamen.

La credibilidad de los auditores ante Organismos Públicos y entidades privadas está fuera de duda. Es difícil encontrar una profesión con una regulación tan específica, con significativas sanciones al auditor de cuentas en caso de incumplimiento normativo, con controles de calidad periódicos, la implantación exigida de sistemas de control de calidad interno, con una elevada exigencia de formación continuada en la materia contable-financiera que es diferencial respecto a otros profesionales que, aun pudiendo cumplir los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, no es directamente comparable pues, entre otros, no están sujetos a una regulación y supervisión tan estricta.

“El conocimiento técnico y la credibilidad son factores cruciales”

En este sentido, no podemos olvidar que un auditor de cuentas tiene la formación y experiencia práctica a su favor por el amplio conocimiento de todas las Normas Técnicas de Auditoría que le son de aplicación.

Por citar una pequeña muestra, en función del encargo profesional, el auditor, para la elaboración del informe pericial, es conocedor de las técnicas que se aplican en auditoría en materia de identificación y valoración de los riesgos de incorrección material (NIA-ES 315 (Revisada)), del programa de trabajo a aplicar para mitigar y/o detectar aspectos vinculados con el fraude (NIA-ES 240), de los procedimientos a aplicar para la formación de la opinión sobre unos estados financieros (NIA-ES 700 (Revisada)), el perito auditor ejerciente sabrá implementar los procedimientos a considerar en su dictamen en caso de estimaciones contables -pensemos en potenciales indemnizaciones en caso de disputa por errores en la contabilidad o valoraciones- (NIA-ES 540 (Revisada)), así como tantas otras que directa o implícitamente puede aportar con su conocimiento al enfoque y metodología en su dictamen pericial.

El valor añadido de todo este expertise, que de por sí el auditor ejerciente ya dispone respecto de otros profesionales, es irrefutable.

Si analizamos su aportación "en sala", defendiendo, aclarando y/o ratificando su informe ante el Juzgado, Tribunal u Organismo pertinente, entendemos que aquí entrarían algunas valoraciones más subjetivas respecto de otros profesionales con conocimiento en temas contables-financieros.

No obstante, no hay que olvidar que el auditor de cuentas está acostumbrado a defender su postura de manera clara y contundente en aquellos casos en los que para otras profesiones sería una situación inverosímil. En muchas ocasiones sucede que, en opinión del auditor de cuentas, los estados financieros proporcionados por su propio cliente no expresan una imagen fiel o, expresándola, realiza las excepciones o advertencias que estima oportunas en su informe, y todo ello con independencia que estos hechos perjudiquen al cliente con el que ha suscrito su encargo profesional. En este escenario, según la circunstancia y situación particular, en ocasiones se generan presiones ante las que el auditor, como no puede ser de otra manera, defiende su postura, prevaleciendo su integridad y objetividad, aspectos que Su Señoría, a buen seguro tendría muy en cuenta en el ámbito de actuaciones periciales. Son también la esencia en esta tipología de encargos profesionales.

Los auditores, a nuestro pesar, estamos acostumbrados a trabajar bajo unos plazos de entrega que normalmente son más cortos de los deseados, prestando atención y analizando hechos posteriores que pueden comportar cambios constantes en las conclusiones y, en definitiva, el auditor de cuentas lidia constantemente con diferentes situaciones que, a buen seguro, le ayudan en su desempeño como experto independiente tanto en la emisión del informe como en su aclaración posterior en sala.

Así las cosas, la actuación del auditor de cuentas en materia de transparencia y fiabilidad de la información contable - económico financiera que se proporciona "de parte", se antoja como imprescindible, necesaria para la confianza de los mercados, accionistas y, en definitiva, la totalidad de partes.

Esperemos que recordando estos valores y credenciales del perito auditor ejerciente, los organismos públicos y direcciones letradas apuesten de manera aún más decidida en nuestro colectivo de auditores para esta tipología de encargos y en definitiva actuaciones en el ámbito forense.

Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor





19
d'octubre
de 2022

Adaptación a las normas de control de calidad interno

Enrique de Fez
Gerente de FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS &
miembro del Comité Técnico del CCJCC



Mediante resolución del pasado día 20 de abril de 2022, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) publicó las normas de control interno "Gestión de la calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías de estados financieros" (en adelante NIGC1-ES), "Revisiones de la Calidad de los Encargos" (en adelante NIGC2-ES), y la Norma Técnica de Auditoría "Gestión de la calidad de una auditoría de estados financieros" NIA-ES 220 (Revisada). Estas normas tienen como objeto trasladar a la normativa nacional lo dispuesto previamente por el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) así como incorporar determinadas notas aclaratorias y criterios de aplicación que permitan dar cumplimiento a los requerimientos en esta materia establecidos en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (en adelante LAC) y en el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (en adelante RLAC).

El marco regulador de la adaptación a las normas de control de calidad interno que regulan la actividad de la auditoría de cuentas ha contemplado una implantación de forma progresiva. La primera fase, hasta el 1 de julio de 2022 venía marcada por las disposiciones de organización interna aplicables a auditores y sociedades de auditoría contempladas en la LAC. A partir de dicha fecha se incorporan los requerimientos al respecto establecidos en el RLAC. Por último, la NIGC1-ES entra en vigor el próximo 1 de enero de 2023, con la excepción de la evaluación del sistema de gestión de la calidad según se establece en los apartados 53 y 54 de la norma, la cual se realizará en el plazo de un año desde esta fecha. Se debe tener en cuenta que, en esta fecha, los sistemas de gestión de la calidad de los auditores y sociedades de auditoría de cuentas deben encontrarse totalmente diseñados e implementados de conformidad con los requerimientos establecidos en las diferentes normas. Tanto la NIGC2-ES como la NIA-ES 220 (Revisada) son de aplicación para los encargos de ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2023, y en todo caso para los trabajos contratados a partir del 1 de enero de 2024.

En consecuencia, las diferentes firmas han tenido que revisar sus procesos y sistemas de control de calidad interno, considerando que debe enmarcarse y estar interconectado con el propio sistema de organización interna. La adaptación ha comportado un proceso de reflexión profunda, que ha abarcado diferentes aspectos como son la identificación y valoración de riesgos, la forma de gobierno y liderazgo, la asignación de recursos, la aceptación y realización de los encargos, la comunicación recíproca entre todos los integrantes de la firma, así como el seguimiento y revisión de los trabajos.

Teniendo en cuenta lo heterogéneo de las firmas auditoras y auditores individuales que prestan sus servicios, este proceso no está siendo igual para todas. Las firmas grandes pueden contar con más recursos, pero a la vez tienen estructuras más complejas. Por el contrario, el resto de las firmas y auditores individuales se encuentran en la situación inversa. En cualquier caso, ha supuesto un cambio de enfoque de los sistemas de control de calidad interno, una revisión de las prácticas seguidas hasta el momento y un esfuerzo de adaptación considerable.

Si bien matizado tanto por la naturaleza de la firma como de sus encargos, se establecen parámetros que pueden ayudar a establecer estándares en cierto punto similares que permitan visualizar el conjunto de la profesión más allá de la firma en la cual cada uno de nosotros trabajamos. Si embargo, una de las principales inquietudes que se nos plantea es la incertidumbre ante las expectativas que pueda tener el regulador de la actividad de auditoría, y hasta qué punto el esfuerzo realizado dará respuesta a estas expectativas.

En este sentido, puede servir de ayuda el comunicado publicado por el ICAC el pasado 1 de abril de 2022 en el cual desarrolla las expectativas supervisoras sobre la entrada en vigor de las disposiciones de organización interna del reglamento de auditoría de cuentas. Según se indica, su objetivo es el de facilitar la actualización de la organización interna y una transición gradual a las nuevas disposiciones constituyendo el entendimiento que tiene el supervisor sobre la adecuada interpretación de las disposiciones de organización interna de los auditores de cuentas. En este comunicado se identifican los siguientes aspectos:

- La formalización por escrito de todos los elementos que forman parte de la organización interna como son la aprobación de la estructura organizativa y de asignación de responsabilidades, de políticas y procedimientos de organización interna, asignación de responsabilidades del sistema de control/gestión de la calidad y comunicación de la organización interna. Se especifica que toda la documentación en base a la cual se estructura el sistema de organización interna debe ser fácilmente accesible para todos los miembros de la firma de tal manera que se le permita conocer y cumplir con los sistemas de calidad diseñados conforme al nivel jerárquico que ocupe en la organización.
- La implementación de procedimientos administrativos y contables y procedimientos de identificación, valoración y respuesta a los riesgos significativos que afecten a la actividad de auditoría de cuentas.
- Disponer de un código de conducta, poniendo de relevancia el cumplimiento de los requerimientos de independencia, así como los principios de ética definidos en el RLAC.
- Los requisitos que debe cumplir el revisor de control de calidad, el cual ha de ser un auditor en situación de ejerciente que no haya participado en la ejecución del encargo.
- La evaluación del rendimiento y remuneraciones, el cual incluye el detalle necesario para evidenciar los criterios utilizados y la correlación entre dicha evaluación y la remuneración.
- Los efectos sobre las actividades externalizadas, las cuales deben estar sometidas e integradas a los sistemas de control y gestión de calidad interno.
- La obligatoriedad de garantizar la continuidad de las actividades mediante la dotación de sistemas, recursos y procedimientos apropiados.

La identificación y valoración del riesgo para establecer los objetivos de calidad y la implementación de las respuestas a los mismos está suponiendo un desafío, al cual hay que añadir el contexto actual de incertidumbre geopolítica y económica, así como, en el ámbito interno, la elevada rotación de los profesionales que se dedican a la auditoría. Si bien se podría decir que, en términos generales, los riesgos podemos tenerlos identificados, su medición y ponderación está resultando ser una tarea más compleja. Detectar aquellos aspectos que pueden afectar de manera puntual en una firma concreta o en un momento determinado supone un esfuerzo de análisis exhaustivo. Identificar situaciones particulares como pueden ser un proceso de relevo de socios dentro de la firma o la concentración de honorarios son aspectos a tener en cuenta. En relación a cómo afrontar la respuesta a los riesgos detectados, se debe considerar que el apartado 34 de la NIGC1-ES establece una serie de respuestas predeterminadas que se espera que las firmas de auditoría diseñen e implementen, si bien éstas no son responden a todos los riesgos de calidad, esperando de las firmas que cuenten con respuestas adicionales que den respuestas a la totalidad de riesgos detectados, considerando si una respuesta es suficiente para dar respuesta a un riesgo, o se requiere una combinación de respuestas. Por otro lado,

también es posible que una respuesta responda de manera eficaz y permita cubrir varios riesgos de calidad. En todo caso, corresponde a las firmas establecer la naturaleza, momento de realización y la extensión de las respuestas, las cuales variaran en función de las circunstancias y naturaleza de la firma.

Otro aspecto a considerar está siendo el diseño de la revisión continua de los objetivos de calidad, de los riesgos de calidad y de las respuestas a los mismos tal y como requiere la norma. Se debe prever la actualización y su revisión considerando que el sistema de control de calidad interno tiene que estar en continuo proceso de modificación y debe asegurar la incorporación puntual de aquellas nuevas circunstancias a medida que se puedan ir produciendo, tanto como consecuencia de los cambios en la naturaleza y las circunstancias de la firma de auditoría o de sus encargos, como por la aplicación de medidas correctoras aplicadas para tratar deficiencias detectadas en el sistema de control de calidad inicialmente diseñado e implementado.

Por otro lado, a nivel interno, uno de los principales retos a los que nos estamos enfrentando es la de concienciar e implicar a todos los miembros de la organización, evitando que se visualice únicamente como una carga administrativa adicional. Conseguir implantar una cultura de calidad, así como la importancia de la ética, los valores y las actitudes profesionales junto con los requerimientos de independencia, es clave para poder cumplir con los objetivos diseñados.

De igual manera, es necesario dotarse de recursos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de calidad. Un componente básico se corresponde con los recursos tecnológicos, y en concreto de sistemas de información. En relación con éstos, otra dificultad que se nos está planteando durante este proceso es el periodo de diseño e implantación, así como la respuesta que estamos recibiendo de los proveedores informáticos a las nuevas necesidades.

La dotación de recursos incluye también los intelectuales, los cuales están destinados a permitir el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y promover la congruencia en la realización de encargos. La actualización de las políticas y procedimientos por escrito, que abarca aspectos tan variados como son el material de orientación, las guías, el acceso a las fuentes de información o la documentación estandarizada pasan a ser elementos clave en los sistemas de calidad. En este sentido, hay que tener en cuenta que, en contextos como el actual de elevada rotación del personal, los procedimientos escritos facilitan la integración de los nuevos miembros en las dinámicas de los equipos de trabajo, permitiendo que los encargos no se vean afectados en la calidad de su ejecución de manera significativa al tener que reemplazar a parte de sus componentes.

Igualmente, garantizar la integración en los sistemas de calidad internos de los servicios contratados a proveedores externos a la firma de auditoría para el desarrollo puntual de un aspecto del encargo está suponiendo otra de las dificultades añadidas, en tanto que son servicios no recurrentes y que la tipología de proveedores necesarios puede ser muy variada.

Con la intención de ayudar a los auditores en el proceso de adaptación a las normas de calidad, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha promovido diversas acciones formativas en los últimos meses y ha publicado material de ayuda. En éstos se encuentra la traducción al español del pasado 20 de julio de 2022 de las guías de implementación de la Norma Internacional de gestión de Calidad 1 y 2 (NIGC1 y NIGC2) de la IAASB de septiembre de 2021.

Como resumen, si bien la adaptación a los nuevos requerimientos comportará mejoras en los sistemas de control calidad interna de las firmas, actualmente está implicando un considerable esfuerzo. Si bien tal y como establece el artículo 68 del RLAC, los requerimientos de organización interna se deben entender desde la perspectiva del principio de proporcionalidad y adecuación a la dimensión y estructura organizativa de los auditores de cuentas y acorde con las características, complejidad y volumen de los trabajos de auditoría, no se exime en ningún caso de dejar constancia de las evaluaciones realizadas y de los resultados obtenidos, ni se contempla la posibilidad de omisión o ausencia de ninguno de los controles o procedimientos de respuesta mínimos contemplados en la normativa. En consecuencia, este esfuerzo impacta en aspectos transversales de las firmas, tanto estructurales y administrativos como de recursos humanos e informáticos, con el consecuente incremento de costes asociados. El siguiente reto que tienen las firmas de auditoría es conseguir visualizar este esfuerzo ante sus clientes en tanto que éstos, al menos a priori, no observan mejoras en los servicios recibidos ni un incremento del valor añadido de los mismos. Hay que recordar que tal

y como establece el reglamento de auditoría, los honorarios deben estar fijados en función del esfuerzo de auditoría estimado para la realización de cada encargo. En consecuencia, poder visualizar este esfuerzo es el siguiente objetivo para poder actualizar los honorarios y poder dar cumplimiento a lo señalado en el reglamento de auditoría.



Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor



3 de
novembre
de 2022

NIA-ES 315 Revisada

Canvia realment la forma d'identificar i valorar els riscos d'incorrecció material?

Departament Tècnic CCJCC

A aquestes alçades tots els auditors haureu llegit, i segurament rellegit, la revisió de la NIA-ES 315, haureu avaluat quines són les principals novetats i com impacten en la vostra metodologia. Conseqüentment, haureu implementat els canvis oportuns perquè esteu en la fase de planificació de les auditories de comptes anuals del 2022 i, com tots sabeu, la revisió d'aquesta norma és aplicable als treballs d'auditoria de comptes corresponents als exercicis econòmics que s'hagin iniciat a partir de l'1 de gener de 2022 i, en tot cas, als treballs d'auditoria que es contractin a partir de l'1 de gener de 2023.

De la primera lectura de la norma ja queda clar que fer una simple comparació d'ambdós textos aprofitant les facilitats del Word no té massa utilitat, entre altres coses perquè hem passat d'una norma, la ja derogada NIA-ES 315, amb 32 apartats, 143 paràgrafs de material d'aplicació i 2 annexos a una NIA-ES 315R amb 38 apartats, 241 paràgrafs de material d'aplicació i 6 annexos, sumat a una diferent forma de redacció. Però una de les raons bàsiques que impedeixen la identificació dels canvis fent un simple comparatiu és perquè hi ha un cert canvi d'enfocament, ja que amb la revisió es persegueix promoure una valoració més efectiva de riscos en un entorn canviant com l'actual (incloent-hi els canvis en els marcs d'informació financera que en molts casos són més complexos, un ús cada vegada major de la tecnologia ,etc.), així com donar resposta a determinades àrees de millora que havien aflorat en l'aplicació de la NIA-ES 315 com són, entre d'altres, la correcta aplicació de l'escepticisme i el judici professional, les dificultats per graduar la norma, el fet que es produïen interpretacions diferents sobre el coneixement requerit del sistema de control intern o el poc desenvolupament que hi havia del coneixement de les tecnologies de la informació de l'entitat dins d'aquell.

Que sigui difícil un simple comparatiu no impedeix avaluar quins són els canvis més rellevants, que són el que explicarem en aquest article. El primer que voldríem destacar és el fet que s'expliciti de forma més clara en la norma el seu caràcter iteratiu i dinàmic i que es reforci la seva graduació o escalabilitat.

Si bé el desenvolupament normatiu és lineal, tots sabem que les expectatives inicials d'identificació i valoració dels riscos d'incorrecció material es poden veure afinades o modificades a mesura que el treball d'auditoria avança, i així queda explicat en la pròpia NIA-ES 315R o, també, en la NIA-ES 330.

Pel que fa a la graduació, tots tenim clar que la complexitat de la naturalesa i de les circumstàncies de l'entitat fan variar la naturalesa i extensió dels procediments de valoració del risc i que per determinar-los cal aplicar el judici professional. En aquest sentit, la NIA-ES 315R, a diferència de la NIA-ES 315, ajuda a determinar-los mitjançant exemples inclosos en els apartats de Guia d'aplicació i altres anotacions explicatives (d'ara en endavant, la guia d'aplicació). Parlem de complexitat, i no de dimensió, perquè tal com indica la pròpia norma, si bé aquesta última pot ser indicativa del grau de complexitat, hi poden haver entitats de petita dimensió complexes i a l'inrevés.

Si continuem amb els aspectes i/o canvis més rellevants, destaquem el major èmfasi en l'escepticisme i judici professionals. L'aplicació d'aquests no ha canviat en absolut però si que, a diferència de l'anterior normativa, en el contingut de la NIA-ES 315R, en especial en la guia d'aplicació, s'inclouen recordatoris de la importància d'aplicar-los durant el procés d'identificació i valoració del risc, així com quins aspectes poden incloure la seva aplicació, com ara qüestionar-se informació contradictòria i la fiabilitat de la documentació, prestar una atenció especial a les circumstàncies que poden ser indicatives de possibles incorreccions degudes a frau o a error, etc. També dins de la guia d'aplicació, en relació amb la documentació, s'indica que, si bé pot no existir una única forma de documentar l'aplicació de l'escepticisme professional, la documentació d'auditoria pot proporcionar evidència que s'ha aplicat, detallant un seguit de requeriments de la norma la documentació dels quals pot proporcionar aquesta evidència.

Si entrem en aspectes més concrets, i sense ànims de ser exhaustius, destacaríem les següents modificacions:

Valoració separada del risc inherent i del de control per als riscos identificats d'incorrecció material en les afirmacions

No hi ha canvis en la definició de risc d'incorrecció material, és a dir, continua sent el risc que els estats financers continguin incorreccions materials abans de la realització de l'auditoria i, en el cas de les afirmacions, comprèn el risc inherent i el risc de control. El que sí exigeix la NIA-ES 315R és que en les afirmacions es valorin aquests dos components de forma separada.

La norma assenyala que per valorar el risc inherent cal considerar la probabilitat que passi o la probabilitat d'ocurrència i la magnitud de la incorrecció, perquè la rellevància d'aquesta combinació determina el grau en què varia el risc inherent o "espectre de risc inherent", del qual parlarem a continuació, proporcionant informació per al disseny de procediments posteriors que donaran resposta a aquest risc, així com ajudant-nos a la identificació dels riscos significatius.

Pel que fa al risc de control, només si l'auditor té previst comprovar l'eficàcia operativa dels controls, el tindrà en compte. En cas contrari la valoració del risc de control haurà de fer que la valoració del risc d'incorrecció material sigui la mateixa que la del risc inherent. Dit en unes altres paraules, el risc de control només pot disminuir el risc d'incorrecció material si es comprova la eficàcia operativa dels controls.

Incorporació del concepte d'espectre de risc inherent i definició dels factors de risc inherent

Com hem indicat, l'espectre de risc inherent no és una altra cosa que el grau en què aquest varia i la seva determinació implica aplicar el judici professional. El judici sobre la valoració de en quin punt del rang es troba el risc inherent pot variar segons la naturalesa, dimensió i complexitat de l'entitat i té en compte tant la valoració de la probabilitat que la incorrecció existeixi com la seva magnitud. És obvi que com més gran sigui la combinació de probabilitat d'existència i magnitud de la incorrecció, major serà la valoració del risc inherent i a la inversa, com més petita, menor serà.

El que determina si un risc inherent està ubicat en un punt alt o baix de l'espectre és el punt d'intersecció entre la probabilitat que existeixi una incorrecció i la seva magnitud, per tant, una valoració alta pot tenir el seu origen en diferents combinacions d'ambdós paràmetres i no només perquè s'hagin valorat la probabilitat i la magnitud d'altres.

- Probabilitat que la incorrecció existeixi

En considerar la probabilitat que la incorrecció existeixi, l'auditor té en compte la possibilitat que existeixi una incorrecció basant-se en els factors de risc inherent.

Aquest és un concepte nou, si bé ens és familiar perquè ja es va incorporar en la NIA-ES 540R d'estimacions, i es defineix com les "característiques, fets o condicions que afecten la susceptibilitat d'incorrecció, deguda a frau o error, d'una afirmació sobre un tipus de transacció saldo comptable o una altra revelació, abans de considerar els controls". S'indica que poden ser qualitius o quantitatius i inclouen: complexitat, subjectivitat, canvi, incertesa o susceptibilitat d'incorrecció deguda a biaix o altres factors de risc de frau en la mesura que afectin al risc inherent. També s'indica en la guia d'aplicació que altres factors de risc inherent poden incloure la rellevància quantitativa o qualitativa del tipus de transacció, saldo o informació a revelar o el volum o la falta d'uniformitat en la composició dels elements que ho conformen.

La norma inclou un annex amb explicacions més detallades dels factors de risc inherent, incloent-hi qüestions que l'auditor pot considerar per al coneixement i aplicació d'aquests en la identificació i valoració de riscos d'incorrecció material en les afirmacions.

- **Magnitud de la incorrecció**

Al considerar la magnitud, l'auditor té en compte els aspectes qualitius i quantitatius de la possible incorrecció, es a dir sobre la base de la seva dimensió, naturalesa o circumstàncies.

Què cal entendre per risc significatiu

La NIA-ES 315R incorpora pròpiament la definició del concepte de risc significatiu, i diem pròpiament perquè en la NIA-ES 315 eren més rellevants els indicadors per identificar els riscos significatius, inclosos dins dels requeriments d'identificació i valoració del riscos d'incorrecció material, que la definició formal que, si recordeu, feia la norma ("risc identificat i valorat d'incorrecció material que, segons el parer de l'auditor, requereix una consideració especial en l'auditoria").

Per lògica, el concepte de risc significatiu que incorpora la NIA-ES 315R va lligat amb allò que hem explicat en l'apartat anterior i queda definit com aquell risc d'incorrecció material "per al qual la valoració del risc inherent es troba pròxima al límit superior de l'espectre de risc inherent a causa del grau en el qual els factors de risc inherent afecten la combinació de la probabilitat que existeixi una incorrecció i a la magnitud de la incorrecció potencial si existeix", però afegint-hi, a més a més, aquells que hagin de ser tractats com a tal, de conformitat amb els requeriments d'altres NIA, com ara els riscos d'incorrecció material deguts a frau, tal com estableix l'apartat 27 de la NIA-ES 240, i els riscos originats per les transaccions significatives que s'hagin realitzat amb parts vinculades i que siguin alienes al curs normal dels negocis, tal com estableix l'apartat 18 de la NIA-ES 550.

Afirmacions rellevants i tipus de transaccions, saldos i informació a revelar significatives

Si bé el concepte d'afirmació es manté idèntic, s'incorpora el nou concepte d'afirmacions rellevants que són aquelles afirmacions "sobre un tipus de transacció, saldo comptable o una altra revelació d'informació que tenen un risc identificat d'incorrecció material". Assenyala la norma que per determinar si una afirmació és rellevant cal fer-ho abans de considerar els possibles controls, és a dir únicament des de la perspectiva del risc inherent.

Enllaçat amb les afirmacions rellevants, s'incorpora també la definició de tipus de transaccions, saldos i informació a revelar significatives que són aquelles per als quals existeix una o varies afirmacions significatives. També es puntualitza que els tipus de transaccions, saldos comptables i informació a revelar són materials si ometent, revelant amb incorreccions o ocultant informació sobre ells, es podria esperar raonablement que això influís en les decisions econòmiques que prenen els usuaris basant-se en els estats financers en el seu conjunt. D'altra banda, la norma obliga que si hi han transaccions, saldos i informació a revelar materials que no s'hagin considerat significatius, l'auditor avalui si aquesta determinació continua sent adequada.

Coneixement de l'entitat i el seu entorn, del marc d'informació financera aplicable i del sistema de control intern de l'entitat

En l'apartat de coneixement de l'entitat i el seu entorn volem assenyalar com a novetat que la norma destaca separadament el coneixement del marc d'informació financera, abans englobat dins del coneixement dels factors normatius rellevants de l'entitat, i la inclusió d'un paràgraf referent al coneixement de com i en quin grau els riscos inherents afecten a la susceptibilitat de les afirmacions a incorrecció.

Pel que fa a la separació del marc d'informació financera aplicable en un aparat específic, ho entenem com una forma de reforçar aquest aspecte, atès que en funció de com aquest s'apliqui per part de les entitats en poden aflorar riscos.

D'altra banda, la incorporació d'un paràgraf relatiu a l'obtenció de coneixement sobre com i en quin grau els riscos inherents afecten a la susceptibilitat de les afirmacions a una incorrecció, ajuda a l'auditor al fet que quan analitzi el coneixement de l'entitat, el seu entorn i el marc d'informació financera aplicable, es focalitzi en els fets o condicions que pugui ocasionar riscos d'incorrecció material, és a dir, facilita una identificació de riscos més centrada i sòlida.

En relació amb el coneixement del sistema control intern de l'entitat, assenyalar, en primer lloc, que tot i que es mantenen els cinc components amb una certa simplificació dels títols, el component procés de l'entitat per al seguiment del sistema de control intern s'ubica abans del sistema d'informació i comunicació i de les activitats de control, i no al final, com estava en la NIA-ES 315.

Destacar també que la NIA-ES 315R s'esforça en ajudar als auditors a clarificar què cal fer per obtenir el coneixement del sistema control intern. Sense entrar a analitzar en detall com s'instrumenta aquest esforç, si volem explicar que ara els requeriments es presenten en un format de tabulat en el qual, per a cada component, l'auditor aconsegueix els objectius que s'assenyalen executant els procediments descrits en les dues columnes, la dreta relativa a quins aspectes cal conèixer i l'esquerra a quina avaluació se'n fa.

També es fa un major èmfasi, en els components sistema d'informació i comunicació i activitats de control, dels aspectes a conèixer en relació a les tecnologies de la informació de l'entitat. En aquest sentit, a part d'un redactat més concret i dels aclariments que es fan en la guia d'aplicació, assenyalar que la norma inclou 2 annexos relacionats amb el coneixement de les tecnologies de la informació de l'entitat i dels controls generals d'aquestes.

No descartem que alguns de vosaltres penseu, encertadament, que ens hem deixat algun aspecte rellevant perquè la revisió de la NIA-ES 315 és una revisió plena de matisos però confiem que l'article us hagi servit per confirmar-ne alguns. D'altra banda, de ben segur que el rodatge en la seva aplicació ens donarà una perspectiva més acurada.



Visualitza aquest article al Blog de l'Auditor



10 de
novembre
de 2022

Millenials: oportunitat per a les firmes PIME d'auditoria?



Marc Casares
Soci de Comptes i Control Auditors, S.L.

La rotació del personal és un dels principals problemes que preocupa als que gestionem firmes d'auditoria. No obstant això, des de fa uns anys, també s'hi ha sumat la dificultat cada cop més elevada en la captació de talent. Els que formem part dels processos de selecció dels nostres despatxos veiem com, any rere any, el nombre de candidats joves que apliquin la seva candidatura per començar la seva carrera professional en el sector de l'auditoria va disminuint. Per tant, ja no només preocupa a les firmes la retenció del talent, sinó també l'atracció d'aquest cap al sector de l'auditoria.

Les jornades maratonianes, l'exigència desmesurada o la rigidesa de les firmes d'auditoria són algunes de les idees (certes o no) que arriben als joves estudiants i que fan que la professió perdi atractiu envers aquests. Això implica que desestimïn l'auditoria com un sector en el qual començar a formar-se com a professionals. L'aprenentatge constant ja no només en comptabilitat sinó també en aspectes més financers, econòmics o fins i tot fiscals, o també en habilitats directives i de gestió d'equips, així com la possibilitat de tenir una carrera professional definida basada en la meritocràcia, són uns arguments que han perdut pes per a aquests joves Millenials que s'estan iniciant en el món laboral.

La selecció del personal, que sovint implica la realització de diverses entrevistes, el desenvolupament de casos pràctics, de dinàmiques de grup; la formació tècnica que hem de facilitar a les noves incorporacions per poder desenvolupar les seves primeres tasques com a auditors júnior i la formació continuada per als treballadors amb més experiència per realitzar les seves funcions amb els estàndards de qualitat que demanda la professió tenen un cost altíssim per a les firmes d'auditoria. Malgrat tot això, per què estem disposats a fer-ho? La resposta a aquesta pregunta sol ser unànime: és una inversió.

Els despatxos d'auditoria (i per extensió tots els de serveis professionals) no requereixen elevades inversions en maquinària per a produir un producte que després vendran als seus clients, sinó que el seu principal actiu són les persones que formen part de l'organització i que componen els equips de treball que de forma coordinada seran els responsables de l'execució del treball que permet emetre l'informe d'auditoria.

Arribats a aquest punt, la pregunta que ens hauríem de fer com a auditors és la següent: aquesta inversió tant costosa en recursos, és rendible? Estic segur que molts col·legues de professió no s'han parat a analitzar-ho en detall o, si més no, no deuen tenir la certesa per poder afirmar-ho o desmentir-ho. Probablement, si els formulo aquesta pregunta em respondrien de la següent manera: el que és segur, és que és necessària.

Diferents estudis assenyalen que la rotació mitjana del sector oscil·la entre els 3 i 4 anys (depenent de si es focalitza en despatxos grans/mitjans o petits, la rotació s'accentua més en el cas dels primers). És important fer aquesta diferència entre empreses grans o mitjanes d'auditoria i despatxos més petits. En les primeres, perdre la majoria dels seus actius a partir del tercer any d'experiència no els suposa un gran dilema perquè la pròpia estructura jeràrquica i el pla de carrera que cada treballador té definit any rere any ja contempla aquest factor. En cas contrari, arribaria un punt que no hi hauria espai per a la promoció d'aquests treballadors a les categories superiors de l'organigrama. No obstant això, no deixa de ser un maldecap tenir desenes de baixes a mitjans de temporada sense temps material per poder reorganitzar els equips. Aquest factor implica sempre donar un pitjor servei al client perquè haurem d'enviar un equip amb menys coneixement sobre el propi client, que haurà de destinar temps en repetir les mateixes explicacions bàsiques al nou equip i que pot generar malestar envers la tasca dels auditors.

Aquest aspecte és encara més punyent en els despatxos petits d'auditoria que no disposen d'una plantilla tant àmplia i, per tant, cada baixa és més valuosa pel simple fet aritmètic de representar un percentatge més elevat sobre el total de la plantilla.

Malgrat tots tenim clar que això suposa un problema, crec que ni els despatxos que abanderen la professió han sigut capaços de trobar-ne una solució. Algunes firmes han canviat el pla de formació per tal que a partir del tercer any els empleats puguin fer un màster costejat per l'empresa a les universitats pioneres del país, en d'altres s'ha fixat una política retributiva que implica el cobrament d'una prima pel sol fet de romandre a l'empresa fins a final de temporada, però totes aquestes mesures no han aconseguit reduir la rotació a uns nivells que permetin la gestió del personal sense dificultats.

A més, la majoria del personal que marxa de les firmes d'auditoria ho fa per anar a treballar en departaments d'administració i finances. Per tant, un elevat percentatge de les baixes que patim en els nostres despatxos és talent que perdem en el sector i que ja no podrem recuperar.

En aquest món globalitzat i de constant canvi, últimament s'escriu sovint sobre la satisfacció dels joves en el seu lloc de treball i les preferències que tenen. Directius de grans consultores de selecció de personal i recursos humans redacten articles sobre quins són els aspectes que més valor tenen per als Millenials. En la majoria dels casos, el salari tradicional (el monetari) ha deixat de ser clarament la principal prioritat.

Cada vegada es parla més sobre el salari emocional o la capacitat d'impactar en la societat, entre altres aspectes, que aquests joves valoren per a triar el seu lloc de feina, però n'hi ha un que preval per sobre de tots: l'oportunitat de conciliar la seva vida professional amb la personal.

En aquest context, els despatxos petits d'auditoria que vulguin captar i retenir el talent tenen una oportunitat d'or. Els despatxos grans, per norma general, auditen empreses multinacionals i cotitzades. Aquest factor provoca que l'auditor hagi de complir uns requisits, sobretot pel que fa al compliment de terminis, molt estrictes que desencadenen en jornades llargues i pressió elevada per als treballadors, que dificulten la conciliació professional i personal. En canvi, els despatxos més petits solen tenir clients d'unes dimensions més reduïdes i amb un capital familiar, aspecte que fa que aquestes exigències en els terminis puguin ser més laxes i, per tant, es puguin dimensionar millor els encàrrecs. Això implica una millor conciliació per als treballadors.

Aquesta tipologia d'empreses representen un percentatge molt rellevant del teixit empresarial del nostre territori. Això permet als qui treballin en despatxos més petits d'auditoria, tenir l'oportunitat de veure la realitat de les companyies que ens representen com a país i poder aportar un valor afegit més elevat com a auditors que el que en general es pot aportar en empreses multinacionals, on ja tenen departaments d'auditoria interna, consolidació, fiscal i fins i tot de fusions i adquisicions. A més, aquests joves Millenials que comencin a treballar en aquest tipus de despatxos, seran una peça clau per a l'organització, que malgrat pot ser que no tinguin una carrera professional tant estructurada com en els despatxos grans, en el mig termini podran estar més a prop de la presa de decisions de la firma.

Per tant, saber explicar l'atractiu d'auditar aquestes companyies és una oportunitat magnífica que es brinda als petits despatxos per a la captació de talent jove que permeti garantir en el mig i llarg termini que l'auditoria segueix sent un servei de qualitat i amb un valor afegit incalculable per als nostres clients.



Visualitza aquest article al Blog de l'Auditor



Auditor

31 de
gener
de 2023

Auditors, una espècie en extinció?

Jordi Anducas

Director del Departament Tècnic d'RSM Spain
Membre del Comitè Tècnic del CCJCC



Nombrosos estudis i articles afirmen que a conseqüència dels efectes del canvi climàtic hi ha moltes espècies que estan amenaçades a l'extinció. De fet, l'alta taxa de pèrdua d'espècies actual ha derivat en el fet que alguns científics afirmen que estem vivint la "sisena gran extinció". En aquest sentit, els experts anuncien que no hauríem d'esperar a tenir més dades per actuar contra el canvi climàtic, si és possible reduint l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Enmig d'aquest moment de canvi i transformació important a escala planetària, en el camp de les professions també hi ha qui afirma que estem immersos en una nova revolució tecnològica, la quarta revolució industrial, on més enllà d'internet i l'ús generalitzat de les tecnologies de la informació, els avanços en noves tecnologies modificaran activitats, processos i, també, professions. La implementació generalitzada de la intel·ligència artificial, la impressió en tres dimensions, la robòtica, la biotecnologia i l'automatització industrial generaran canvis molt rellevants en els paradigmes de producció i consum, fet que inevitablement tindrà efectes en els mercats de treball.

En aquest àmbit crec que és instructiu fer una visita a la pàgina web www.willrobotstakemyjob.com on es fa, per a moltes professions, una anàlisi de les previsions futures en termes de risc d'extinció per la potencial amenaça d'automatització, creixement previst i evolució salarial recent. Mirant les conclusions d'aquesta informació per a la nostra professió, "Accountants and auditors", podem veure que, d'una banda, el risc d'automatització és força elevat, està quantificat en el 71% cosa que ens podria alertar, però a la vegada, les previsions de creixement de llocs de treball són positives i l'evolució salarial en els darrers anys és també positiva. Per tant, tenint en compte aquestes dades podríem fins i tot dir que, per ara, es pot descartar una "Robocalipsi" en la professió dels auditors els anys vinents. De fet, la robotització i la intel·ligència artificial ja s'està introduint en els nostres despatxos d'auditoria, permetent-nos guanyar eficiències en molts processos i procediments de la nostra feina, però sense tenir cap impacte rellevant en una potencial reducció de plantilla.

De forma paradoxal, la situació actual amb relació als llocs de treball de la professió és completament la contrària. Els despatxos d'auditoria estan en una situació de manca de recursos humans alarmant, sobretot en les categories d'auditors amb una certa experiència. De fet, els responsables de recursos humans de les firmes d'auditoria estan buscant professionals per tot arreu.

A banda de les recurrents campanyes de reclutament en les diferents universitats buscant noves fornades d'auditors entre llicenciats i màsters, la manca de professionals amb certa experiència està duent a terme, de forma generalitzada, a fórmules com la contractació de professionals d'una altra firma o el reclutament de professionals amb experiència provinents d'altres països. O sigui, el mercat laboral dels professionals d'auditoria està força mogut i les oportunitats d'aconseguir una nova feina són molt elevades.

On està el problema doncs? Per què hi ha manca de professionals en l'auditoria tot i les amenaces de la invasió dels robots i la intel·ligència artificial? En diferents articles i estudis sempre s'ha comentat la preocupació a la professió per la retenció de talent amb l'objectiu de combatre l'elevada rotació de professionals típica en el món de l'auditoria. A més, ara cal afegir-hi les dificultats per atraure el talent. Any rere any el volum de les persones interessades en incorporar-se a les firmes d'auditoria està minvant. Es diu que el que ofereix la professió a les noves generacions no és atractiu i, per tant, estan creixent les dificultats en la captació de talent.

O sigui, per a poder aconseguir un bon equilibri en el nombre de professionals disponibles per a poder donar resposta als treballs encarregats dels clients cal dedicar esforços i cura en aconseguir un bon equilibri entre retenció de talent i rotació, i en fer més atractiva la proposta de valor que els auditors oferim als professionals joves que accedeixen per primer cop al mercat laboral.

Però a banda de totes aquestes problemàtiques que estarien relacionades amb l'oferta, i que no s'han de menystenir, des del meu punt de vista, la principal problemàtica que té la professió en l'actualitat ve de la banda de la demanda. Com diria aquell, el risc d'extinció de l'auditor el tenim en la possibilitat de morir d'èxit.

En els darrers anys, tot i la pandèmia i la crisi econòmica, les xifres de facturació de totes les firmes d'auditoria, des de les més grans a les mitjanes i petites, s'han incrementat de forma notable. El volum de serveis que la professió ofereix al mercat està creixent i les previsions apunten que aquest creixement podria ser exponencial.

Adicionalment, tant els problemes del canvi climàtic com la implementació de la quarta revolució industrial, anomenats anteriorment com a alarmants per a potencials extincions d'espècies o professions, també tenen impactes notables en la part de la demanda de la professió d'auditoria sobretot pel que fa a les noves necessitats i expectatives que els mercats econòmics i financers demanden i demandaran als auditors.

Per exemple, amb relació a les noves exigències relacionades amb el canvi climàtic i la sostenibilitat, ja estem donant a Espanya confiança i seguretat limitada sobre els actuals informes d'informació no financera que emeten moltes empreses i entitats. A més, en aquest àmbit, la demanda creix més que exponencialment després de les noves exigències imposades per la Unió Europea amb relació als propers informes de sostenibilitat ESG que s'hauran d'emetre en els propers anys, més desenvolupats i exigents, i les noves exigències futures amb relació al paper que haurà de dur a terme l'auditor d'aquests informes en el sentit de donar seguretat raonable.

D'altra banda, en el marc de la quarta revolució industrial han nascut noves formes de fer negocis que ja tenim al nostre voltant, com per exemple, les relacionades amb la tecnologia blockchain, les operacions i mercats de criptomonedes o les noves relacions econòmiques que es puguin dur a terme en el món de la realitat virtual i el metavers. Totes aquestes noves realitats necessiten auditors per a donar confiança i seguretat als diferents actors i usuaris d'aquests nous mercats. Uns inicis complexos i amb casos de frau rellevants en determinades entitats relacionades amb aquesta nova economia fan que els mercats, els reguladors i els legisladors busquin en la professió d'auditoria un element per a donar confiança i seguretat.

Tanmateix, sense anar tant al futur, en el context actual de crisi econòmica derivada de les seqüeles de la pandèmia i de l'actual situació de crisi bèl·lica a Ucraïna, com a auditors no parem de rebre nous encàrrecs relacionats amb la concessió i justificació de subvencions públiques. De nou, el legislador incorpora el paper de l'auditor com a garant en nous requisits per a les empreses, com per exemple, el recent requisit per assegurar que les empreses compleixin els terminis del període mitjà de pagament als seus proveïdors. O també els nous requisits imposats des de la Unió Europea com la propera declaració que l'auditor haurà d'emetre sobre l'informe relacionat amb la divulgació d'informació relativa a l'impost de societats per part de determinades empreses i sucursals.

O sigui, com a professió, els anys vinents estan plens de novetats i reptes on caldrà adaptar-se i, aparentment lluny de l'extinció, sí que es necessitarà, segurament, una forta transformació en els recursos i capacitats que calen per aconseguir les expectatives que els mercats estan confiant als auditors.

Ens haurem d'acostumar al fet que dins de la nostra professió, a més de conviure, com ara, amb professionals especialitzats en comptabilitat, auditoria, auditoria d'entorns informatitzats, advocats i fiscalistes, haurem de conviure amb nous perfils professionals com informàtics, enginyers, químics, físics, especialistes en medi ambient, psicòlegs, sociòlegs...

Aquesta transformació que esdevindrà en els anys vinents pot ser una gran oportunitat per a combatre les problemàtiques de la professió en el camp dels recursos humans. Per exemple, la captació d'aquests nous perfils professionals, on fins ara les firmes d'auditoria no és un destí comú, pot ser una oportunitat que tenim com a professió per a fer-nos més atractius en els mercats laborals.

Per això és important posicionar a la professió com a part essencial de l'engranatge que s'està implementant a Europa per tal d'assegurar que els diferents actors econòmics es mouen cap a aconseguir un món més sostenible. De fet, en un futur, és previsible que l'auditor haurà de donar seguretat raonable al voltant del que s'informi sobre sostenibilitat. Aquest fet hauria de ser un motiu de crida rellevant cap a les noves generacions molt motivades i sensibilitzades per a combatre els efectes negatius del canvi climàtic i la sostenibilitat. En aquest sentit, seria molt positiu que fem esforços perquè el missatge del nostre paper en l'aconseguit d'una nova economia més sostenible és clau. Caldria fer veure a les noves generacions que poden formar part de la creació d'aquesta nova economia més sostenible.

Finalment, aquesta transformació en la professió d'auditoria lligada amb les noves exigències que els mercats ens demanden haurien de ser una oportunitat més, que aquest cop estaria bé no perdre, per valorar la nostra professió en relació amb els honoraris que rebem pels encàrrecs que duem a terme. En moments de canvi, com l'actual i el que s'espera en els anys vinents, on rebrem nous encàrrecs relacionats amb les noves necessitats i requisits que tenen i tindran els nostres clients, és quan hauríem d'aprofitar per posar en valor la nostra professió i fer un salt en els honoraris que proposem als nostres clients.

En aquest sentit, si tens l'oportunitat de revisar el recent estudi fet per l'IFAC, "Audit Fees Survey 2022", podràs veure un comparatiu dels honoraris d'auditoria en relació amb les vendes de la societat auditada en diferents economies occidentals. És desolador veure com els honoraris d'auditoria a Espanya, on la mitjana d'honoraris entre el 2013 i el 2020 en societats cotitzades se situa en el 0,10% sobre el volum de vendes dels clients auditats, està per sota de la mitjana a nivell europeu del 0,13% i molt per sota de les mitjanes de les economies dels Estats Units amb un 0,38% i Canadà 0,29%. O sigui, els honoraris d'auditoria als Estats Units i a Canadà són 4 i 3 vegades, respectivament, més elevats que els espanyols. A nivell Europeu les diferències no són tan abismals destacant com a països amb honoraris més elevats que els espanyols a França (0,20%), Luxemburg (0,17%), Holanda (0,15%), Hongria (0,14%) i el Regne Unit (0,14%).

Per tant, el veritable risc d'extinció de la professió radica en el fet que siguem capaços de valorar els nostres treballs, que cada cop són més complexos, amb més regulació, més exigències, més expectatives i més determinants. Si no aconseguim posar en valor la nostra professió, i per tant pujar els honoraris d'auditoria, difícilment es podrà, a llarg termini, gestionar la retenció i atracció del talent, i sobretot complir les expectatives que els mercats estan confiant a la nostra professió.

En aquest sentit, i concloent, el risc d'extinció de la professió d'auditoria no està relacionada ni amb els efectes del canvi climàtic ni amb el risc de la robotització de determinades professions, al contrari, aquests elements o ens donen més feina o ens ajuden a fer-la de forma més eficient. El risc d'extinció es concentra en el fet que siguem capaços de posar en valor la feina que fem. Nosaltres, com a auditors, coneixem la complexitat que té el nostre treball, els requisits i exigències que se'ns imposa com a auditors, el paper de pressió que juga el nostre regulador, les dificultats en retenir i captar talent i les responsabilitats que assumim com a auditors, per tant, només nosaltres som els que podem posar tots aquests elements en valor i, amb l'objectiu d'aconseguir les expectatives dels nostres clients i dels mercats, començar una nova dinàmica de pujada generalitzada de tarifes.

Pensem que un professional com nosaltres als Estats Units o al Canadà ofereix pràcticament la mateixa feina que nosaltres a Espanya per quatre i tres vegades, respectivament, en termes d'honoraris. Està clar que els nostres clients no estaran d'acord a la primera, però cal iniciar la dinàmica per a evitar la nostra extinció. Per tant, us animo a aixecar, entre tots, encara més aquesta professió que, lluny de l'extinció, està cridada a ser determinant en el nou món que s'està dibuixant per als anys vinents.



RSE





2 de
maig
de 2022

L'Estat d'Informació No Financera



Joaquin Solana
Professor de la Universitat Abat Oliba CEU



Mireia Leiva
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
Uniaudit Oliver Camps, SL

En els últims anys s'ha posat de manifest una clara tendència de les companyies a publicar més informació en matèria de sostenibilitat, motivada principalment per la demanda d'informació transparent, comparable i precisa per part dels inversors i de la societat en general.

Tot això impulsat per les decisions dutes a terme pels governs de tot el món per aconseguir objectius en matèria de desenvolupament sostenible ha influït al nostre país a través de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, en matèria d'informació no financera i diversitat, que obliga a certes societats a incorporar un Estat d'Informació No Financera juntament amb els comptes anuals.

Aquest article fa un recull dels antecedents i origen de la informació no financera, així com una breu explicació del contingut a incloure, les directrius de presentació, i la definició d'uns estàndards globals per a la seva elaboració.

En primer lloc cal saber que és un Estat d'Informació No Financera, en endavant EINF. És tracta d'un document que neix de la necessitat per part de les empreses de reportar no només indicadors financers, sinó altres factors que informin sobre determinats aspectes del negoci i que no estan reflectits en els estats financers bàsics com són: aspectes mediambientals, qüestions socials i relatives al personal, informació sobre el respecte dels drets humans, informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn i altre informació de la societat.

L'origen de la demanda d'aquesta informació es deu a que vivim en un context de continua transformació i grans canvis que tenen un gran impacte en la societat. Les empreses, juntament amb altres organismes, tenen un paper fonamental en la solució dels problemes de sostenibilitat.

Ara bé, que s'entén per sostenibilitat? L'actual concepte de sostenibilitat va aparèixer per primera vegada en l'Informe Brundtland, publicat al 1987, elaborat per les Nacions Unides el qual alertava de les conseqüències mediambientals negatives del desenvolupament econòmic i la globalització i tractava de buscar possibles solucions als problemes derivats de la industrialització i del creixement de la població. Dècades després, la sostenibilitat tracta de garantir les necessitats actuals sense

comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves, garantint l'equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social.

La conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible (UNCSD), també coneguda com a Rio+20, celebrada en el 2012, va reunir 193 estats membres de la ONU i van aprovar una agenda que porta per títol "Transformar el nostre món: la Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible". Es tracta de 17 objectius de desenvolupament sostenible amb 169 metes, plantejant la finalització en l'any 2030, orientats a l'acció, concisos, fàcils de comunicar, limitats en número i universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament:



Tot això portat al món empresarial es coneix com a Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i s'entén com una forma de dirigir les empreses basada en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre els clients, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general. Consisteix en el compromís de l'empresa a dirigir les seves accions a la contribució de la millora social, econòmica i ambiental per tal de minorar l'impacte negatiu.

La RSC s'ha vist en constant creixement els últims anys degut a la consciència de la societat sobre la necessitat de que les empreses parin especial atenció a les qüestions socials i mediambientals. En aquest sentit, la Memòria de Sostenibilitat s'ha convertit en una de les eines més efectives per a comunicar el compromís per al desenvolupament responsable i sostenible d'una organització.

No obstant, a arrel de la Directiva 2014/95 UE la perspectiva de caràcter voluntari que tenia la RSC comença a canviar, passant a ser obligatori que determinades organitzacions presentin un Estat d'Informació No financera. Tot això traslladat al nostre país es consolida amb la Llei 11/2018, de 28 de desembre, sobre Informació no financera i diversitat per la que es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, que amplia el contingut de la informació requerida, incloent la divulgació de la informació no financera, incrementant així els nivells d'exigència en lo relatiu a la transparència i fiabilitat del reporting de dades de la informació no financera.

Ara bé, resumidament, que diu aquesta nova Llei? Comencem per quines són les empreses obligades a elaborar l'EINF. Per als exercicis iniciats a partir de l'1 de gener de 2021, l'àmbit d'aplicació dels requisits sobre divulgació d'informació no financera s'estén a les societats anònimes, de responsabilitat limitada i les comanditàries per accions, així com les societats que formules comptes anuals consolidats amb més de 250 treballadors que o bé es considerin entitats d'interès públic de conformitat amb la legislació d'auditoria de comptes, exceptuant les entitats que tenen la qualificació d'empreses petites i mitjanes d'acord amb la Directiva 2013/34/UE, o bé, durant dos exercicis consecutius compleixin, a la data de tancament de cadascun d'ells, al menys una de les circumstàncies següents:

- Que el total de les partides de l'actiu sigui superior a 20.000.000 d'euros.
- Que l'import net de la xifra anual de negocis superi els 40.000.000 d'euros

Continuem pel contingut de l'EINF. Segons la Llei 11/2018 el contingut mínim a incloure en l'EINF relatiu a qüestions mediambientals, socials i relatives al personal, sobre el respecte dels drets humans, sobre a societat i qüestions relatives a la lluita contra la corrupció, és:

- a) Una breu descripció del model de negoci del grup
- b) Els principals riscos relacionats amb aquestes qüestions vinculats a les activitats del grup
- c) Una descripció de les polítiques que aplica el grup respecte a les mencionades qüestions
- d) Indicadors clau de resultats no financers per avaluar i realitzar un seguiment dels progressos
- e) Els resultats d'implementar aquestes polítiques

No totes les societats han de reportar els mateixos aspectes ni de la mateixa forma o amb la mateixa profunditat. Dependrà del tipus d'activitat i sector, que l'empresa es centri més en una aspecte o altre. Per tant, l'EINF inclourà informació d'aquells aspectes sobre els que existeix més probabilitat de que es materialitzin els principals riscos o aquells que ja s'han materialitzat, així com els riscos d'efectes adversos que poden derivar-se d'activitats pròpies de l'empresa o puguin estar vinculats a les seves activitats.

Per tant, abans de començar a elaborar l'EINF és important determinar el seu abast, i per a poder fer-ho la societat ha d'elaborar una matriu de materialitat que inclogui els aspectes més rellevants, tant positius com negatius per a la societat en l'actualitat o en un futur pròxim, tenint en compte les expectatives i els interessos dels grups d'interès.

Cada societat pot decidir com avaluar la determinació dels temes materials, no obstant, en aquest article es mostra un exemple orientatiu de matriu de materialitat, que consta de dos dimensions, en l'eix horitzontal s'inclou la importància dels temes materials per l'empresa, i en l'eix vertical la influència dels temes materials pels grups d'interès, ambdues de menys a més, sent els temes de més importància els que es troben més allunyats de l'encreuament.

De tots els temes analitzats sortiran les qüestions claus a incloure en l'EINF, normalment entre cinc i deu, les quals no només caldrà analitzar amb major profunditat a l'EINF sinó que s'hauran de tenir en compte i aplicar polítiques i procediments per mesurar el seu impacte en la societat.

Finalment, amb l'objectiu de facilitar la comparació de la informació, tant en temps, com entre entitats, la Llei ens diu que s'han d'utilitzar estàndards d'indicadors clau no financers que es puguin aplicar de manera generalitzada i compleixin amb les directrius de la Comissió Europea en aquesta matèria. En aquest article ens centrarem en el Global Reporting Initiative (GRI).

Global Reporting Initiative és una institució fundada a Boston en l'any 1997 amb l'objectiu de crear un mecanisme de rendició de comptes que garantís que les empreses s'adherissin als principis de conducta ambiental responsable, i que posteriorment es va ampliar per incloure qüestions socials, econòmiques i de governança.

El GRI crea un llenguatge comú per a les organitzacions i els grups d'interès dissenyats per fomentar la comparabilitat global i la qualitat de la informació sobre els impactes, i així, possibilitar major transparència i rendició de comptes per part de les organitzacions.

Aquests estàndards estan organitzats en tres blocs:

- Primer bloc sobre els fonaments del GRI, sèrie 101, s'inclouen els principis de reporting, els requisits bàsics per utilitzar les normes per la redacció dels informes de sostenibilitat i els detalls de com utilitzar i fer referència a les normes.
- Segon bloc que inclou els estàndards universals, son les series 102 per aportar informació contextual sobre una organització i la sèrie 103 per informar de l'enfocament de gestió de cada tema material.
- Tercer bloc centrat en els estàndards temàtics, agrupats per series. La sèrie 200 esta composta pels estàndards que informen dels impactes relacionats amb temes econòmics, la sèrie 300 dels temes ambientals i la sèrie 400 dels temes socials.





10 de
novembre
de 2022

Com comptabilitzar el valor social de les organitzacions?



Xavier Carbonell
Membre de la Comissió d'RSE del CCJCC
Director de la Càtedra Mango d'RSC i
coordinador acadèmic a ESCI-UPF



Silvia Ayuso
Directora acadèmica de la Càtedra Mango
d'RSC a ESCI-UPF

La generació del màxim valor possible sol ser un dels objectius principals de qualsevol organització, però des de fa alguns anys s'estan produint canvis importants en allò que s'entén per valor. D'acord amb el concepte del capitalisme dels grups d'interès o stakeholders (stakeholder capitalism)[1], s'espera de les empreses que no generin només valor per als accionistes, sinó per al conjunt dels grups d'interès amb què es relacionen. Més enllà del valor econòmic (la riquesa generada), aquest valor té, per tant, una dimensió social (els impactes generats sobre els empleats, clients, proveïdors, comunitats locals, etc.) i mediambiental (els impactes generats sobre l'entorn natural).

Actualment hi ha diferents models i eines per mesurar l'efecte que l'activitat d'una organització genera sobre la societat, i no s'ha assolit encara un consens sobre una metodologia estàndard. Entre les metodologies existents destaca l'anàlisi del Valor Social Integrat (VSI) com un plantejament aplicable a qualsevol tipologia d'organització[2]. A més, el mètode considera el valor percebut des de la perspectiva dels grups d'interès de l'organització i el quantifica mitjançant indicadors objectius i aproximacions financeres.

Recentment, l'anàlisi del VSI s'ha aplicat, amb el suport de la Càtedra MANGO d'RSC de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF), als museus d'art i cultura més importants de la ciutat de Barcelona, els museus adherits a l'Articket Bcn: Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Fundació Joan Miró, Museu Picasso de Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i Fundació Antoni Tàpies[3].

A l'inici del projecte es van identificar els stakeholders, als quals els museus de l'Articket Bcn generen valor, i es van agrupar en sis grans categories: administracions públiques (com a receptor de valor en forma d'impostos recaptats), persones empleades (equip humà), institucions i empreses (que inclou proveïdors financers i de béns i serveis, clients de lloguer d'espais, altres museus i institucions culturals, i sector econòmic), públics específics (que inclou les comunitats artística i cultural, científica, educativa i social), visitants (que inclou visitants presencials i virtuals, i "amics" de la institució) i ciutadania (que inclou la perspectiva de valor públic).

Amb l'objectiu d'identificar de manera qualitativa el valor percebut pels diferents grups d'interès, es van seleccionar representants d'aquests grups per fer-los una consulta mitjançant diferents canals. Es van fer entrevistes grupals amb els empleats dels museus, diverses entrevistes individuals amb membres del Patronat de diversos museus, i una enquesta online que es va enviar a interlocutors habituals dels diferents grups d'interès.

L'anàlisi de la informació que es va recollir en la consulta als grups d'interès va permetre identificar un llistat dels diferents aspectes que representen una aportació de valor per als stakeholders. Amb l'objectiu de quantificar aquestes variables de valor identificades, es van definir un o més indicadors relacionats amb cadascuna d'aquestes variables, capaços de mesurar de manera quantitativa l'activitat generadora de valor dels museus. Així, per exemple, la variable de valor "augment del coneixement de l'art i la cultura" s'ha mesurat, entre d'altres, amb les hores de visites guiades realitzades a visitants i el nombre de catàlegs de col·leccions i exposicions que s'han venut. Amb la finalitat d'expressar les variables de valor en termes monetaris, es van buscar valors monetaris de referència per als indicadors seleccionats. Així, per exemple, les hores de visites guiades realitzades a visitants es van valorar amb el preu mitjà de les visites guiades dels museus espanyols - independentment de si aquestes visites eren de pagament o gratuïtes.

El valor calculat per al conjunt de les variables identificades pels grups d'interès posa de manifest el valor associat a les múltiples funcions dels museus (artístiques, culturals, patrimonials, educatives, científiques, d'inclusió, etc.). Aquest valor social específic de la missió dels museus de l'Articket Bcn, 156.967.427 € l'any 2019, va superar àmpliament el valor social generat per la seva activitat econòmica (salaris pagats, impostos pagats, resultats obtinguts, etc.), calculada en 46.113.225 € l'any 2019. El Valor Social Integrat (VSI) representa la suma del valor social específic i del valor social generat per l'activitat econòmica, i va pujar a 203.080.652 € l'any 2019. Si expressem aquest valor generat com a taxa de retorn sobre el pressupost total gestionat pels museus en aquell any, el retorn a la societat va ser de 3,61 €, és a dir, el pressupost dels museus es va transformar en més de tres vegades de valor social creat.

En definitiva, el càlcul del Valor Social Integrat (VSI) dels museus de l'Articket Bcn ha permès estimar el valor tangible i intangible creat per a tots els grups d'interès afectats per les seves activitats. D'una banda, s'han identificat d'una manera sistemàtica les dimensions o variables de valor percebut com a rellevants per aquests grups d'interès, i d'altra banda s'han traduït en unitats monetàries per facilitar la comprensió de l'aportació que fan els museus a la societat.

Cada vegada hi ha més organitzacions que apliquen el VSI com una eina per comptabilitzar el valor social que aporten a la societat. La Càtedra MANGO d'RSC d'ESCI-UPF ha col·laborat amb universitats, entitats de l'economia social, empreses i administracions públiques a l'hora de desenvolupar la seva comptabilitat social i calcular la magnitud de la seva funció social. En el futur serà cada cop més habitual que les organitzacions expressin el valor social generat en euros, amb uns principis similars als de la comptabilitat economicofinancera.

[1] Klaus Schwab "Manifiesto de Davos 2020: El propósito universal de las empresas en la Cuarta Revolución Industrial": <https://es.weforum.org/agenda/2019/12/manifiesto-de-davos-2020-el-proposito-universal-de-las-empresas-en-la-cuarta-revolucion-industrial/>

[2] Més informació a <http://www.geaccounting.org>

[3] Càlcul del valor social generat pels museus de l'Articket Bcn, Informe realitzat per la Càtedra MANGO d'RSC d'ESCI-UPF, Desembre 2021: <http://mango.esci.upf.edu/DOCS/Altres/Informe-VSI-Articket.pdf>



Visualitza aquest article al Blog de l'Auditor



7 de
febrer
de 2023

Los riesgos empresariales por el cambio climático



Laura Gómez Soriano
Gerente de Risk Advisory de Deloitte

La preocupación por el cambio climático y sus efectos se ha convertido en un aspecto principal para la sociedad en general y para accionistas, reguladores y empresas en particular. Pero ¿por qué?

Qué entendemos por cambio climático

El cambio climático hace referencia a las variaciones a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios, que de forma natural se producirían a lo largo de miles de años, se han acelerado estrepitosamente debido a la acción humana. Y, aunque todavía hay personas que piensan que esto es un ciclo natural, el consenso entre la comunidad científica es unánime: el 98% cree que el aumento de aproximadamente 0,2°C por década desde la era industrial, es debido principalmente a la quema de combustibles fósiles y a la deforestación.

Este pequeño aumento de temperaturas tiene consecuencias en cada rincón del planeta: aumento del nivel del mar, desertificación, pérdida de biodiversidad, aumento de los eventos extremos como lluvias torrenciales o huracanes, etc. Todos estos riesgos físicos ya están impactando en la sociedad comprometiendo ciudades e infraestructuras, debilitando el sistema alimentario y de salud y provocando la disrupción de los sistemas comerciales establecidos.

Respuesta del entorno ante los riesgos climáticos

Ante esta situación, para frenar las consecuencias del cambio climático, se han definido objetivos globales de limitación de aumento de temperatura. Se requiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en aproximadamente un 50% para el año 2030 (desde los niveles de 2010) y alcanzar emisiones "netas cero" (no liberar más carbono a la atmósfera del que se elimina) para 2050. Afrontar este reto implica una transformación radical del sistema económico global, especialmente de nuestras prácticas de energía, transporte y agricultura

Cada vez son más las organizaciones que están sintiendo las consecuencias del cambio climático y actuando al respecto, tal y como recoge el "CxO Sustainability Report" elaborado por Deloitte, en el que se recoge la opinión de más de 2.000 líderes empresariales de 24 países –entre ellos, España– en torno a las preocupaciones y acciones que las organizaciones están llevando a cabo en materia de cambio climático y sostenibilidad.

Según el informe, los CxO encuestados consideran el cambio climático como uno de los tres temas principales a abordar en los próximos años, el 62% está preocupado todo o la mayor parte del tiempo, y casi todos indican haber sido impactados negativamente por las consecuencias del cambio climático.

Las empresas están sintiendo una amplia presión de distintos grupos de interés para integrar la gestión climática en sus estrategias y operaciones, así como para aumentar la transparencia respecto a estos aspectos. En el mismo informe de Deloitte, más de la mitad de los CxO aseguran que el activismo de sus empleados en materia climática ha llevado a sus organizaciones a aumentar las acciones de sostenibilidad en el último año, y el 65% se ha visto obligado a aumentar la acción climática debido al entorno regulatorio.

Además, desde 2020, más de 500 inversores en todo el mundo, que gestionan colectivamente más de 47 billones de dólares estadounidenses en activos, firman la iniciativa Climate Action 100+ que tiene como objetivo garantizar que los grandes emisores de GEI corporativos tomen medidas sobre el clima.

Paralelamente, los gobiernos de todo el mundo han aumentado drásticamente las políticas y las acciones regulatorias relacionadas con el clima. Durante las últimas tres décadas, casi se ha multiplicado por diez el número de leyes y políticas aprobadas a nivel mundial.

Las empresas, ¿cómo abordar este ámbito?

Toda esta realidad dibuja dos tipos de riesgos relacionados con el cambio climático para las organizaciones. Por un lado, tenemos los ya mencionados riesgos físicos (derivados de los eventos extremos y cambiantes del clima) y, por el otro, los de transición, debidos a la adaptación y al aumento regulatorio hacia un modelo económico descarbonizado. Así, no solo es mayor la presión sobre las compañías para que actúen contra el cambio climático, sino que, también, se suma una creciente petición de información y de transparencia sobre la gestión climática de las empresas.

Por ejemplo, en materia de reporte climático, en 2017 el Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Task Force o TCFD, por sus siglas en inglés) proporcionó un marco global para que las empresas y otras organizaciones desarrollaran un reporte efectivo de las implicaciones financieras relacionadas con el clima. Desde entonces, su uso ha crecido exponencialmente (más de 3.800 seguidores en octubre de 2022) y son varios los países que han adoptado leyes de divulgación climática: Francia, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón.

En España, el 21 de mayo de 2021, se publicó en el BOE la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Esta Ley pretende asegurar la consecución del objetivo de neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en España antes del año 2050 y un sistema energético eficiente y renovable, facilitando una transición justa y garantizando la coherencia con los objetivos en los ámbitos de actuación pública y privada.

Además, y entre otras cosas, en su artículo 32 de integración del riesgo climático, esta ley define la obligatoriedad de publicar con carácter anual un informe en el que se haga una evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a este de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos.

Esta obligación no será efectiva hasta el 2023 cuando se determinen por real decreto los contenidos de este informe. Habrá que ver entonces de qué forma esta información se integra en las Cuentas Anuales y en los Estados de Información no Financiera y se alinea con las recomendaciones del TCFD.

Así, no hay duda de que el cambio climático genera riesgos muy relevantes que impactan directa e indirectamente en la sociedad y en las compañías. Para afrontarlos es fundamental adoptar una visión a largo plazo que integre los aspectos financieros y no financieros, lo que permitirá crear sistemas económicos sostenibles y resilientes adaptados al entorno actual y futuro.



Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor

Equitat de gènere





8 de
març
de 2022

Continuar avanzando hacia la diversidad e inclusión



Maite Poyos
Audit & Assurance Talent Leader, Deloitte.

Hoy, #8M, Día Internacional de la Mujer, es un buen día para hablar de diversidad e inclusión, pero, sin olvidar, que estas dos palancas fundamentales de desarrollo en cualquier organización no son cuestión de un día, ni se construyen en 24 horas. Son dos aspectos que requieren tiempo, atención, trabajo e inversión de recursos.

Entendemos por diversidad la incorporación en las organizaciones de perfiles distintos en cuanto a género, raza, creencias religiosas, opiniones políticas, etc. La diversidad de talento en las organizaciones es clave para favorecer una cultura basada en la riqueza de opiniones y experiencias donde cada individuo pueda aportar a la organización todo su valor.

Entendemos por inclusión la capacidad de las organizaciones para generar las condiciones y poner a disposición del talento las herramientas y el contexto necesarios para el desarrollo de los profesionales que integran la organización, haciendo que se sientan bien por ser como son, aprovechando, así, toda su riqueza. Organizaciones diversas e inclusivas proporcionan entornos de trabajo de respeto y equidad.

La igualdad no es un problema que resolver, sino una solución para transformar el entorno cultural y social, creando un ambiente que equipare y ofrezca las mismas oportunidades a todo el mundo.

Si nos centramos en la igualdad de género, dada la fecha que es, numerosas organizaciones están llevando a cabo distintas acciones para favorecer la incorporación y la inclusión del talento en general, y del femenino, en particular. Veamos algunas.

Sensibilización de la organización en términos de diversidad e inclusión

El compromiso de los líderes de la organización es una de las claves para favorecer una cultura basada en la diversidad e inclusión. La sensibilización a todos los niveles de la organización, empezando por la alta dirección, ayudará a la creación de una cultura en la que todo el mundo se sienta cómodo

actuando tal y como es y puedan aportar todo su potencial a la organización, desarrollándola y desarrollándose.

El compromiso de los líderes de la organización es una de las claves para favorecer una cultura basada en la diversidad e inclusión.

Algunas iniciativas para abordar la sensibilización cultural de la organización para generar el entorno cultural adecuado son:

- Impartir formaciones a los profesionales de la organización que permitan identificar y eliminar los sesgos inconscientes que se forman a través de las experiencias de vida.
- Lanzar campañas de sensibilización que fomenten la diversidad y la pongan en valor en la organización. Para ello, se puede establecer una comunidad de embajadores que participen en estas campañas.
- Establecer equipos de trabajo diversos en los que los distintos miembros del equipo desarrollen todo su potencial y crear dinámicas de reflexión sobre la riqueza que se ha generado en estos entornos.

Favorecer la objetividad de los procesos

Revisar los procesos de gestión del talento de una organización asegurándose que todos ellos favorecen la objetividad en la toma de decisiones en aspectos como la selección, la promoción o la participación en los distintos proyectos. Y para ello es clave:

- Definir procesos de selección que permitan dar las mismas oportunidades a personas diversas y que aseguren que la conclusión será realizada en base a parámetros objetivos y conocidos por la organización.
- Establecer criterios de meritocracia objetiva, cuantificables, para las oportunidades de promoción internas que se generen. Ser transparentes en la comunicación de estos criterios para que todo el mundo de la organización pueda acceder a ellos.
- Diseñar procesos de asignación a proyectos basados en competencias objetivas de los profesionales, definidos, cuantificados y transmitidos a la organización.

Apoyar al talento femenino en su carrera profesional

Para ello, es importante que el talento femenino entienda su importancia en la organización y darle el acompañamiento y las herramientas que necesite para su desarrollo.

Para conseguir este objetivo, algunas acciones que se están llevando a cabo son:

- Definir programas de acompañamiento al talento femenino a lo largo de su carrera profesional,
- Acompañar al talento femenino en las organizaciones mediante personas referentes que ayuden a ver la amplitud de oportunidades que la organización puede proporcionar.
- Establecer redes de mujeres que compartan sus experiencias y opiniones sobre las distintas situaciones que se han ido encontrando a lo largo de su carrera profesional.
- Desarrollar medidas concretas que respondan a las necesidades particulares del talento femenino.
- Establecer planes de captación específicos de talento femenino y dar visibilidad a referentes femeninos en los sectores en los que éste sea más escaso

Trabajar el liderazgo en la organización y fomentar la inclusión

La diversidad de una organización implica personas distintas y que, por tanto, requieren procesos de liderazgo diferentes. Trabajar con los líderes de la organización para que fomenten los comportamientos inclusivos en su día a día y que adapten su forma de liderazgo y que ésta permita que cualquier integrante de la organización se sienta cómodo tal y como es y, por lo tanto, aporte su riqueza de pensamiento, es fundamental en este proceso.

Es importante que el talento femenino entienda su importancia en la organización y darle el acompañamiento y las herramientas que necesite para su desarrollo

Medir los avances

No hay duda de que definir medidas y acciones que favorezcan la diversidad e inclusión es clave. Pero también, hay que tener en cuenta en su implantación la gran importancia que tiene ir midiendo y

compartiendo los resultados y los avances para ir adaptando la hoja de ruta de cada organización en base a los progresos de las acciones establecidas.

Porque si avanzamos, al final ganamos todos.

Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor





10 de
març
de 2022

Equitat, no és només justícia, és una necessitat

Isabel Perea

Socia de Grant Thornton.

Directora de Auditoría de Grant Thornton en Cataluña.

Presidenta del Grupo de Trabajo de Equidad de Género del ICJCE.

Miembro de la comisión de Equidad de Género del CCJCC.



El Ple de l'Institut de Censores Jurados de Cuentas de Espanya (ICJCE) va aprovar a finals de desembre la creació del Grupo de trabajo de Equidad de Género. Una iniciativa que suposa una resposta que es vol donar a la situació de la professió d'auditoria des de la institució en termes d'equitat de gènere. Les dades de l'estudi "L'auditoria és una professió de futur per a les dones?", resultat del treball conjunt de la Comissió d'Equitat de Gènere del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) i l'equip de recerca de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa -ESCI-UPF School of International Studies-, i publicat el mes d'octubre de 2020, són demolidores i il·lustratives. Si bé la presència de la dona s'equipara a la de l'home a les primeres categories de la carrera professional d'auditoria, les dades baixen en capes superiors. La presència de dones col·legiades al CCJCC és del 18% i la ràtio de dones a les firmes d'auditoria amb càrrecs directius és molt reduïda pel fet que moltes acostumen a abandonar la carrera professional abans d'arribar a la categoria de Sòcia.

De l'estudi se'n desprèn que la satisfacció pel contingut del treball és alta a causa de l'autonomia, les oportunitats per a l'aprenentatge i el repte intel·lectual que suposa. Les firmes auditores i de serveis professionals, en general, sempre s'han caracteritzat per seguir un procés de promoció intern basat en la meritocràcia, fruit dels processos d'avaluació als professionals, dels quals en resulten les promocions consegüents.

Però tot i així, hi ha raons que tenen un pes més gran a l'hora de decidir continuar amb la carrera professional dins de la professió d'auditoria; entre elles, el nivell d'estrès, la durada de la jornada laboral i les dificultats per assolir la conciliació entre la vida professional i la vida personal/familiar. Una problemàtica particularment preocupant en el cas de dones amb fills menors, encara que també podem llistar la càrrega física i mental del treball i el nivell general de remuneració, que fan en conjunt que les dones abandonin aquesta professió.

Les firmes auditores i de serveis professionals, en general, sempre s'han caracteritzat per seguir un procés de promoció intern basat en la meritocràcia

El Grup de treball d'equitat de gènere neix amb l'objectiu de desenvolupar i promoure accions des de la institució que aconseguixin revertir aquesta situació. Aquest objectiu, a més de ser just, és necessari. Equitat i talent van de la mà. Oblidar un gènere és oblidar el 50% de la professió.

Fa uns mesos, reflexionava en un article de VIA Empresa, sobre els possibles impactes i conseqüències que els avenços tecnològics, la robòtica i la intel·ligència artificial poden tenir a la feina de l'auditor. Aquests avenços tenen ja efecte en la necessitat d'adaptació dels professionals a aquest nou entorn, seguit de l'increment de l'eficiència que permetrà que els auditors se centrin en el disseny de l'estratègia de l'auditoria, en l'anàlisi de les conclusions obtingudes mitjançant aquestes eines i en aquells aspectes i tasques relacionats amb el judici de l'auditor.

Aquest nou escenari ja ha comportat canvis en les composicions dels equips de treball d'auditoria. Els auditors de professió convivim i col·laborem amb especialistes en IT, i aquest és només l'inici d'un procés transformador que, des del meu punt de vista, ens farà replantejar-nos les nostres estructures de firma, que van ésser ideades i creades en un altre moment de la història i que, molt possiblement, quedaran obsoletes en aquest nou ecosistema.

En aquest procés de canvi veig grans oportunitats de millora de la nostra comesa com a auditors i també la capacitat d'atreure el talent més jove i divers, els millennials que han empès les empreses a canviar en àrees clau, a la generació Z, els centennials, dels que en diuen que ho canviaran tot i a les que estan encara per venir. Veig com la tecnologia pot ser un element que provoqui un canvi en la manera de treballar i permeti la tan anhelada conciliació laboral i personal, que aconseguixi facilitar el desenvolupament de les carreres professionals de les auditores.

D'altra banda, fa anys que parlem de les mesures a adoptar per fomentar una major presència de dones en llocs d'alta direcció; entre elles, més grans mesures de conciliació i flexibilitat que, tanmateix, no acabaven d'encabir a les nostres organitzacions. Durant el confinament i posteriorment fins avui, el teletreball ha demostrat que, en un equip compromès i guiat per una confiança mútua, la conciliació i la flexibilitat són possibles i no van en detriment del rendiment.

A la carrera per atraure i mantenir el talent a les nostres firmes, aquests factors formaran part de la nova cultura empresarial que ha de venir i s'està forjant, on molts dels canvis seran promoguts pels nostres propis equips, als quals haurem d'empoderar.

Comencem el nostre repte convençuts que, malgrat les dificultats, l'entorn sectorial i empresarial exigeix i afavoreix un canvi en la composició de les estructures i les direccions de les firmes i en òrgans de govern de les institucions de la nostra professió. Hem de ser capaços de fer realitat l'equitat a tots nivells. Perquè no només és justícia, és una necessitat.



Visualitza aquest article al Blog de l'Auditor

Concursal





8 de
febrer
de 2022

El reestructurador: clave para preservar nuestro tejido industrial

Antoni Gómez

President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.



El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados publicó el pasado 14 de enero el proyecto de ley concursal. En las próximas semanas deberá ser discutido y aprobado en las Cortes Generales. Este proyecto de Ley da respuesta a la necesaria transposición a la normativa española de la Directiva Comunitaria sobre la materia.

Se trata de una regulación muy importante por sus efectos para nuestra estructura económica. En el año 2021, los concursos de acreedores aumentaron un 34% respecto del ejercicio 2020, y un 30% por encima de los niveles prepandemia, alcanzando las 5.862 compañías. Se espera que, como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia, un número muy significativo de empresas acudirán a los juzgados impulsadas por sus dificultades financieras.

El 95% de los procesos concursales presentados bajo la legislación vigente acaban con la liquidación de las empresas, y casi siempre con la dispersión y pérdida de sus activos productivos y la desaparición del empleo relacionado con la actividad económica que realizaban.

Esta situación es especialmente grave en relación con el sector industrial. El desarrollo de una empresa industrial requiere -además de un importe habitualmente significativo de inversiones- la articulación de equipos humanos formados en la fabricación, distribución y mantenimiento de los productos. En definitiva, una organización compleja formada por elementos materiales y humanos. La desaparición de una industria supone casi siempre una pérdida irreparable.

La industria es un sector de una importancia capital para nuestra economía. Tiene un factor multiplicador muy significativo sobre una parte destacada del sector servicios y mantiene un empleo de una cualificación mayor y mejor retribuido que muchos otros sectores económicos.

Salvar el tejido empresarial es un objetivo muy importante de la reforma concursal. Así lo entiende la propia Directiva europea sobre Reestructuración e Insolvencia que, de acuerdo con su Considerando 1,

pretende garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad.

El proyecto de ley concursal incorpora un libro II, denominado derecho preconcursal, que desarrolla un concepto nuevo como es el de la reestructuración. Se trata de abrir negociaciones o de la homologación de un plan de reestructuración cuando el deudor se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual.

Es clave que en la reestructuración se informe sobre la viabilidad de la empresa y, en definitiva, si el valor de la empresa en continuidad es superior al de la empresa en liquidación. Para ello se debe poder informar a los acreedores sobre si el plan del deudor permite una obtención de flujos de caja suficientes para pagar la deuda total o un porcentaje mayor que el que se obtendría en un proceso de liquidación.

Salvar el tejido empresarial es un objetivo muy importante de la reforma concursal. Así lo entiende la propia Directiva europea sobre Reestructuración e Insolvencia

El papel de un experto en reestructuraciones es clave en una serie de supuestos especialmente contemplados por la ley. Del adecuado desarrollo e implantación de este dependerá en buena medida que la presente reforma consiga finalmente los objetivos que han pretendido todas las regulaciones anteriores: facilitar la continuidad de las empresas viables.

El proyecto de Ley Concursal se ocupa de esa figura nueva en el derecho español: el experto en la reestructuración. El capítulo II del anteriormente citado libro, se ocupa de su estatuto, sus funciones, deberes y régimen de responsabilidad. El diseño que ha hecho la Ley de esta figura, dentro de los diferentes modelos que permite la Directiva, es próximo a la figura de un mediador que facilite la negociación entre las partes.

Entre otras cosas tiene la responsabilidad de elaborar un informe sobre el valor de funcionamiento de la empresa. A diferencia de la conocida figura del administrador concursal, el papel del reestructurador es clave para la confianza en el proceso de reestructuración y no es la intervención ni supervisión de los poderes de administración y disposición patrimonial del deudor.

Creemos que los auditores de cuentas tenemos un papel clave en este nuevo entorno. Somos profesionales independientes, sujetos a un código de ética, y con la formación y experiencia para considerar adecuadamente los aspectos que intervienen en un plan de reestructuración. Tenemos todos los requisitos que establece el proyecto de ley. Entendemos que nuestras características nos hacen especialmente adecuados para los propósitos de la reestructuración, actuando como expertos mediadores, capaces de inspirar confianza a las distintas partes implicadas. Muchas empresas recurren a auditores en multitud de ocasiones por nuestro reconocimiento social y nuestro prestigio, y gran número de normas legales ya nos están otorgando atribuciones fundamentadas en nuestra independencia, ética profesional y alta cualificación profesional.

Son muchas las situaciones en las que en el ejercicio de nuestra función de revisión de las cuentas de las compañías hemos de valorar la razonabilidad de los planes de viabilidad. Así por ejemplo, cuando consideramos la gestión continuada de las compañías o para potenciales depreciaciones de inversiones. También cuando actuamos como expertos, en tanto que peritos judiciales o en procesos de due dilligence.

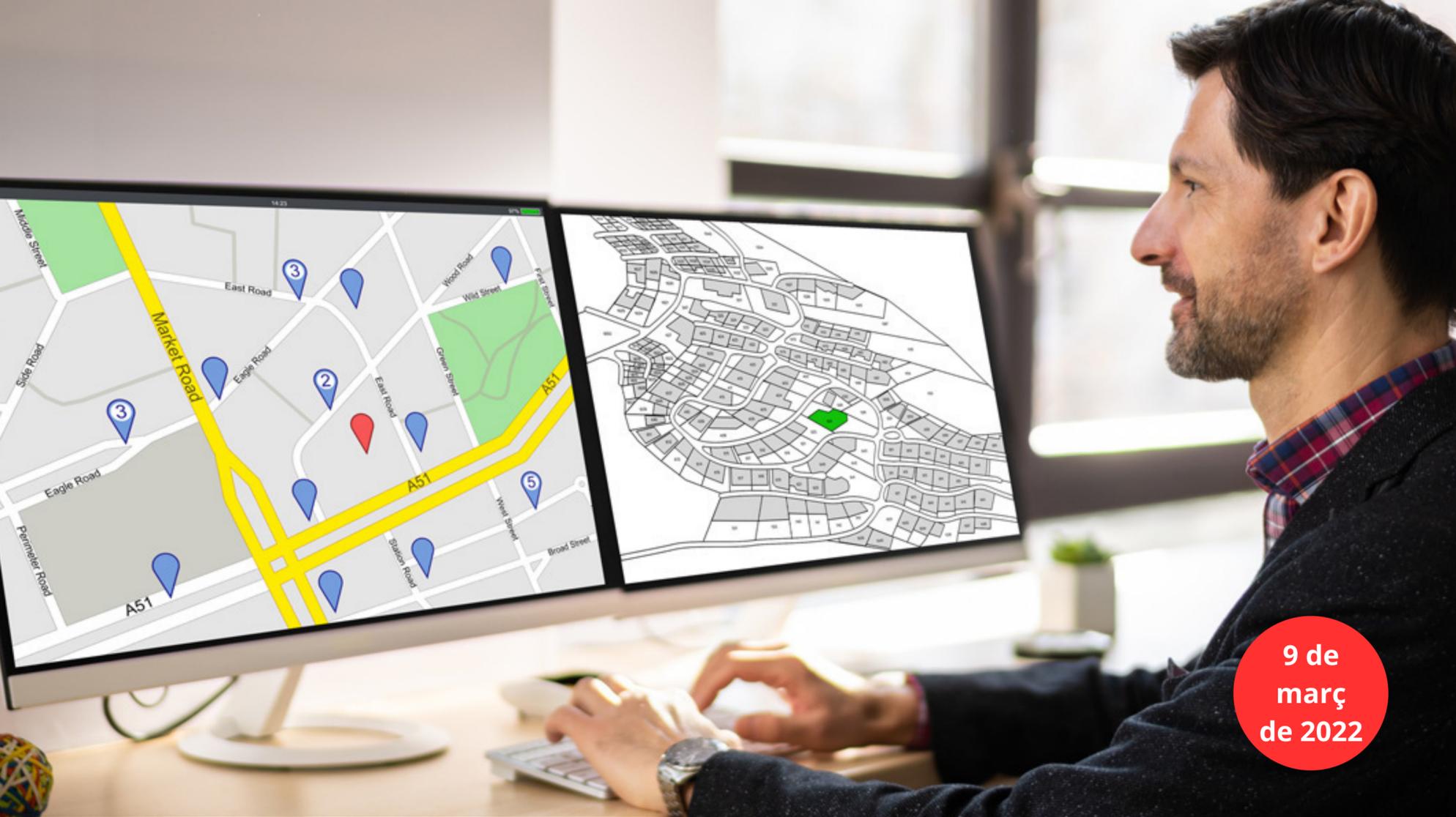
Los auditores actuamos en pro del interés público, aportando confianza y transparencia a las relaciones mercantiles de las empresas. La reforma concursal es una oportunidad magnífica para afrontar nuestro problema endémico que deriva en la desaparición de muchas empresas potencialmente viables, cuando se ven sometidas a dificultades para afrontar sus compromisos de pago. La figura del reestructurador será clave para cambiar esta situación. De su adecuada regulación dependerá que se preserve buena parte de nuestro tejido industrial.



Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor

Fiscalitat





9 de
març
de 2022

El nou valor de referència als efectes de les transaccions immobiliàries



Josep M. Noguera i Amiel
Soci Director JMNoguera Serveis de Consultoria Empresarial, S.L.
Soci de Fuster Lawyers, S.L.

Efectes impositius en l'impost sobre transmissions patrimonials i l'impost sobre successions i donacions.

Amb l'entrada en vigor de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (Llei 11/2021, de 9 de juliol), es modifica que a partir de l'1 de gener de 2022, la valoració als efectes tributaris dels immobles per els conceptes impositius sobre transmissions patrimonials (ITP i AJD), impost sobre successions i donacions (ISD) i l'impost sobre el patrimoni (IP), ja no serà el valor real dels immobles, tal com estava redactada les normes dels conceptes impositius esmentats, sinó el seu valor de mercat.

Així doncs, la normativa estableix que aquest "valor de mercat" serà el valor de referència aprovat per la Direcció General de Cadastre.

En matèria de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i així mateix a l'efecte de l'impost sobre successions i donacions, la determinació del valor real del bé, donada la variabilitat de criteris, i certament associada a un "valor de mercat raonable", ha estat font de molts litigis en els impostos esmentats davant de l'Administració tributària i als corresponents tribunals.

Hi ha hagut nombroses sentències respecte si els criteris aplicats quant a aquest anomenat "valor real" es corresponien al que s'havia de considerar com a base imposable de l'impost en consideració. En relació amb aquesta qüestió cabdal el Tribunal Suprem ha manifestat que no existeix un valor real, entès aquest com un caràcter propi o predeterminat amb unes propietats intrínseques de les coses i va establir com a jurisprudència que, quan existeix un mercat dels béns del que es tracti, el valor real coincideix amb el valor de mercat.

En d'altres pronunciaments, entre elles la sentència 843/2018 (Sala tercera del Contenciós Administratiu TS), de 23 de maig 2018, ha determinat que el mètode de comprovació de valors

consistent en una estimació per referència a valors multiplicats per índexs o coeficients que recull la Llei general tributària, no és del tot idoni per la seva "generalitat", i falta de relació intrínseca amb el bé concret a l'hora de determinar la seva estimació, a no ser que aquest mètode es complementés amb la realització comprovadora directament relacionada amb l'immoble concret. I per la qual cosa, diu la sentència, ha dificultat en gran mesura la facultat comprovadora i l'objectivitat a l'hora de determinar per part de l'Administració tributària tal magnitud.

Donades les circumstàncies respecte els criteris aplicats, els desajustos del valor real al valor de mercat, i també segons els pronunciaments dels tribunals, el legislador s'ha carregat de raons, tal vegada fonamentades, per arbitrar una major seguretat jurídica i un més gran rigor a l'hora de tendir a objectivar els valors de mercat dels immobles, i d'aquí la modificació en la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de 9 de juliol de 2021, tant de la Llei de l'impost sobre successions i donacions, així com la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i AJD.

El valor a tenir en compte en transmissions efectuades des d'1 de gener de 2022, és el valor de referència fixat per la Direcció General del Cadastre

Aquesta modificació ha anat en la línia de substituir en la configuració de la base imposable les referències al "valor real" per "valor", equiparant-se al valor de mercat, el qual es defineix, a la vegada, com el "preu més raonable pel qual es podria efectuar la transmissió, entre parts independents, un bé lliure de càrregues".

S'adapta doncs aquesta regulació del valor de referència de la Direcció General del Cadastre, per dotar-lo de major rigor, precisió i seguretat jurídica en la seva determinació, segons paradigma del que s'esmenta en els fonaments i els motius d'aquesta modificació rellevant.

Per la qual cosa, i concretant als béns immobles, el valor a tenir en compte en transmissions efectuades des d'1 de gener de 2022, és el valor de referència fixat per la Direcció General del Cadastre a la data de meritació de l'impost conforme a la normativa reguladora del cadastre immobiliari.

Tanmateix, si el valor de l'immoble declarat pels interessats o el preu o contraprestació pactada és superior al seu valor de referència, s'agafaran aquells valors com a base imposable als efectes de la liquidació de l'ITP i AJD o l'impost sobre successions i donacions.

Es pot donar la circumstància que no s'hagi determinat el valor de referència, o que no pogués ser certificat per la Direcció General del Cadastre. En aquest cas la base imposable, sense perjudici de la comprovació administrativa, seria la major de les següents magnituds:

- El valor declarat pels interessats
- El preu o contraprestació pactada
- O el valor de mercat de l'immoble

Es pot dir doncs, que el valor de referència fixat per la Direcció General del Cadastre, operarà com un "valor mínim" per a la fixació de la base imposable en les transaccions immobiliàries subjectes a aquests dos impostos (ITP i AJD i impost sobre successions i donacions), sens perjudici que quan el valor declarat o el preu o contraprestació acordada sigui superior al valor de referència, prevaldrà sobre el valor mínim de referència.

PROCEDIMENT PER A LA DETERMINACIÓ DEL VALOR DE REFERÈNCIA

La Direcció General de Cadastre ha significat aquests valors de referència, sobre la base de l'anàlisi dels preus de totes les compravendes immobiliàries que es realitzen davant de fedatari públic. Així doncs, el valor de referència dels immobles es determinarà, anualment, per aplicació de mòduls de valor mig, basats en els preus de totes les compravendes immobiliàries efectivament realitzades davant fedatari i obtingudes en el marc d'informes anuals del mercat immobiliari, i en funció de les característiques cadastrals de cada immoble.

El valor de referència es determinarà anualment per a cada exercici amb el límit del valor de mercat sense que es pugui superar, i amb aquest objectiu es fixarà mitjançant Ordre Ministerial d'Hisenda factors de minoració pels béns d'una mateixa classe. Per aquest any 2022 s'ha fixat a aquest efecte, un factor de minoració de 0,90 tant per immobles rústics com per immobles urbans (Ordre Ministerial 1104/2021 de 7 d'octubre).

Tanmateix en els primers 20 dies del mes de desembre de l'any anterior a la seva aplicació, la Direcció General de Cadastre publicarà en el BOE l'anunci informatiu pel coneixement dels valors de referència de cada immoble, i que podran ser consultats de forma permanent a través de la seu electrònica del Cadastre.

VALOR D'APLICACIÓ A L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

La Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, també ha modificat la Llei de l'impost sobre el patrimoni en allò que correspon a la valoració dels béns immobles que passen a haver-se de declarar pel major dels tres següents:

- El d'adquisició
- El determinat o comprovat per l'Administració als efectes d'altres tributs o el preu o contraprestació
- El valor cadastral

S'inclou doncs el valor de referència en la base imposable dels béns immobles en l'impost sobre el patrimoni (art.10.1 Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni), en aquest afegit de redactat d'acord al valor determinat.

Vol dir que a l'hora de realitzar la valoració dels béns immobles: s'haurà de tenir en compte el nou valor de referència?, i això vol dir que hauríem passat a haver d'aplicar nous valors del patrimoni preexistent en relació amb els valors de referència?, i en conseqüència, que la quota de l'impost sobre el patrimoni es veurà augmentada?

Doncs bé, sembla que la interpretació de la Direcció General del Cadastre i per assimilació la de Tributs, és que quan el valor de referència hagi estat la base imposable en el tribut que gravi l'adquisició d'un immoble, aquest valor es tindrà en compte per aplicar la regla de determinació de la base imposable en la valoració dels immobles en l'impost sobre el patrimoni, en el cas que l'immoble estigui subjecte.

Per tant, el valor de referència només podrà afectar a l'impost sobre el patrimoni en allò referent a immobles adquirits a partir de l'1 de gener de 2022 i el valor de referència a considerar per aquest impost seria només el que correspongués a l'any d'adquisició, i no respecte del patrimoni preexistent a 1 de gener de 2022.

I òbviament en els casos d'aplicar el valor de referència per les adquisicions que s'hagin produït, el valor a consignar no hauria de ser actualitzat en funció dels valors de referència que es fixin per aquest immoble en els anys successius. Tanmateix hem d'esperar que aquest criteri que emana de la pròpia Direcció General del Cadastre, no sigui contraposat amb canvis de criteri per la pròpia Direcció General de Tributs.

PROCEDIMENT EN CAS DE DISCONFORMITAT AMB EL VALOR DE REFERÈNCIA I CRITERI DISTINT RESPECTE EL VALOR CADASTRAL EN IMPOSTOS LOCALS

En cas que el contribuent no estès conforme amb el valor de referència dels seus immobles, la impugnació només es podrà produir quan tingui efectes fiscals, i el valor de referència s'apliqui per a calcular la base imposable de l'impost sobre transmissions patrimonials i AJD, o sobre l'impost sobre successions i donacions.

D'aquesta forma, quan els obligats tributaris considerin que la determinació del valor de referència ha perjudicat els seus interessos legítims, podran:

- En cas de liquidacions practicades per l'Administració tributària, interposar recurs potestatiu de reposició i/o reclamació economicoadministrativa.
- En cas d'autoliquidacions practicades pel propi obligat tributari, instant la pròpia rectificació de l'autoliquidació presentada.

A tal efecte, la Direcció General del Cadastre, emetrà informe vinculant en què ratifiqui el valor de referència quan ho sol·liciti l'Administració tributària encarregada de l'aplicació dels tributs, conseqüència de les al·legacions i proves aportades pels obligats tributaris.

És evident que quan els obligats tributaris declarin com a valor d'adquisició el valor de referència fixat per la Direcció General del Cadastre o un valor superior, l'Administració tributària no podrà comprovar aquesta valoració.

Aquest valor de referència que determinarà amb caràcter anual la Direcció General del Cadastre és diferent al valor cadastral, que és el que s'utilitza per a la liquidació de l'IBI o de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, sense perjudici de la incidència que podria tenir per a la liquidació d'aquest últim el valor de referència després de l'adaptació que s'ha fet de la Llei reguladora de les hisendes locals a través del Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, respecte la inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal tal com estava configurada.

A títol recordatori dels nous criteris de la plusvàlua municipal: ja no estarà subjecte a la plusvàlua les transmissions en què es constati la inexistència d'un augment en el valor del terreny agafant com a valors d'adquisició i transmissió el que consti el títol que es documenti l'operació o el comprovat per l'Administració tributària, o bé quan a instància de l'obligat al pagament d'aquest impost es constati que l'increment de valor és inferior al que resulti de l'aplicació de les regles d'aquest impost, i s'agafarà tanmateix com a base imposable l'import de l'increment de valor efectiu que hagi experimentat el terreny.

Així mateix el valor de referència desplegarà la seva eficàcia en aquells sectors de l'ordenament tributari que resulti d'aplicació l'ITP, com per exemple succeeix amb l'article 314 de la Llei del mercat de valors, que declara que no s'aplicarà l'exempció d'aquell impost a la transmissió de valors en determinats supòsits que poden encobrir una cessió immobiliària (per ex.: quan l'actiu de la societat està integrat per més del 50% per immobles radicats a Espanya que no estiguin afectes a activitats econòmiques, o quan es tingui el control d'una entitat en què en el seu actiu s'incloguin valors que li permetin exercir el control d'una altra entitat que el seu actiu estigui integrat almenys en un 50% d'immobles no afectes a una activitat econòmica).

LA INCIDÈNCIA DEL VALOR DE REFERÈNCIA EN EL CÁLCUL DELS GUANYS PATRIMONIALS EN L'IRPF

Quan es produeix un canvi tan rellevant com el d'instaurar aquest nou criteri de valor de mercat, cal determinar l'afectació pels càlculs dels guanys patrimonials en l'IRPF del transmetent d'un immoble pel qual l'adquirent està subjecte a l'ITP i AJD i declara com a base imposable d'aquests impostos, el valor de referència.

En el cas d'una transmissió onerosa, l'adquirent haurà de declarar el valor de referència en l'ITP i AJD i el transmetent l'import real obtingut a efectes de l'IRPF. És a dir que amb anterioritat a 1 de gener de 2022, quan el valor comprovat era el valor real de l'immoble, el valor comprovat als efectes de l'ITP i AJD de l'adquirent podia tenir eficàcia en el valor de transmissió del guany patrimonial de l'IRPF del transmetent. Per tant, en transmissions oneroses d'immobles la conclusió és que el valor de referència declarat en l'ITP i AJD no tindrà incidència pel cedent, a l'efecte de calcular la plusvàlua en l'IRPF que es posi de manifest amb ocasió de la transmissió.

En el cas d'una transmissió lucrativa subjecte a l'impost sobre successions i donacions (normalment hereus o donataris), hauran de declarar el valor de referència de l'immoble.

En aquests casos els valors de transmissió als efectes dels guanys patrimonials en l'IRPF pels donants coincidirà amb el que resulti de l'aplicació de les regles de l'impost sobre successions i donacions (art. 36 LIRPF), amb la qual cosa hi haurà coincidència amb el valor de referència. Aquí podem concloure que el valor de referència declarat pels donataris en l'impost sobre successions i donacions serà també aplicable al donant en l'IRPF.

Com a conclusió, i a tall de contradicció, voldria esmentar que estem a les portes d'una propera reforma fiscal dels impostos directes i de creació de noves figures impositives i/o de reformulació de les ja existents. Aquesta reforma també pretén "harmonitzar" bàsicament l'impost sobre el patrimoni, entre d'altres, impostos cedits i gestionats per les comunitats autònomes.

Per tant, instaurar aquest valor de referència en transmissió d'immobles i que estén aquests efectes, com hem vist a l'IRPF i també a l'impost sobre el patrimoni, determina més complexitat en l'atribució dels valors corresponents, així com també a l'hora de provar el valor de mercat en cas de disconformitat, si el contribuent creu que el valor de mercat de l'immoble no es correspondria amb el valor de referència determinat per la Direcció General de Cadastre. Suposa de facto una revisió ja legalitzada amb efectes impositius concrets d'acord als nous valors de referència en transmissió d'immobles afectats pels impostos esmentats. I una darrera consideració, esmentar que la pròpia

pàgina web de la Generalitat de Catalunya ja determina els nous criteris aplicables en la transmissió dels immobles en el cas que estiguin determinats els valors de referència, i en aquells que no el disposin, continuarien amb el criteri del valor cadastral i els coeficients ponderats en funció de la naturalesa de l'immoble i la seva ubicació.



Visualitza aquest article al Blog de l'Auditor



7
d'octubre
de 2022

Deducibilidad de la retribución de administradores: la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de febrero de 2022 marca un nuevo hito en favor del contribuyente



Juan Arroyo
Socio de Kreston Iberaudit

La deducibilidad del gasto de las retribuciones a los administradores en el Impuesto sobre Sociedades (IS, en adelante) es una cuestión altamente controvertida y ha generado una alta litigiosidad desde que en 1988 el Tribunal Supremo sentara en el ámbito laboral la doctrina del doble vínculo con la conocida sentencia como Caso Huarte; y posteriormente, en Sentencia de 13 de noviembre de 2008 (en adelante, Caso Mahou) se calificase como liberalidades las retribuciones por funciones de dirección de un administrador cuando en los estatutos sociales se establecía que dicho cargo era gratuito. Ahora, una nueva Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de febrero de 2022, da la razón al contribuyente y considera que los gastos de retribución de administradores son deducibles, pese a no estar aprobados en Estatutos.

Antecedentes: 2008-2021

Los efectos de calificar como liberalidad la retribución de los administradores suponía la no deducibilidad del gasto, y por lo tanto la necesidad de hacer una corrección en la base imponible del impuesto que se traducía en una mayor tributación, que no podía recuperarse en el tiempo.

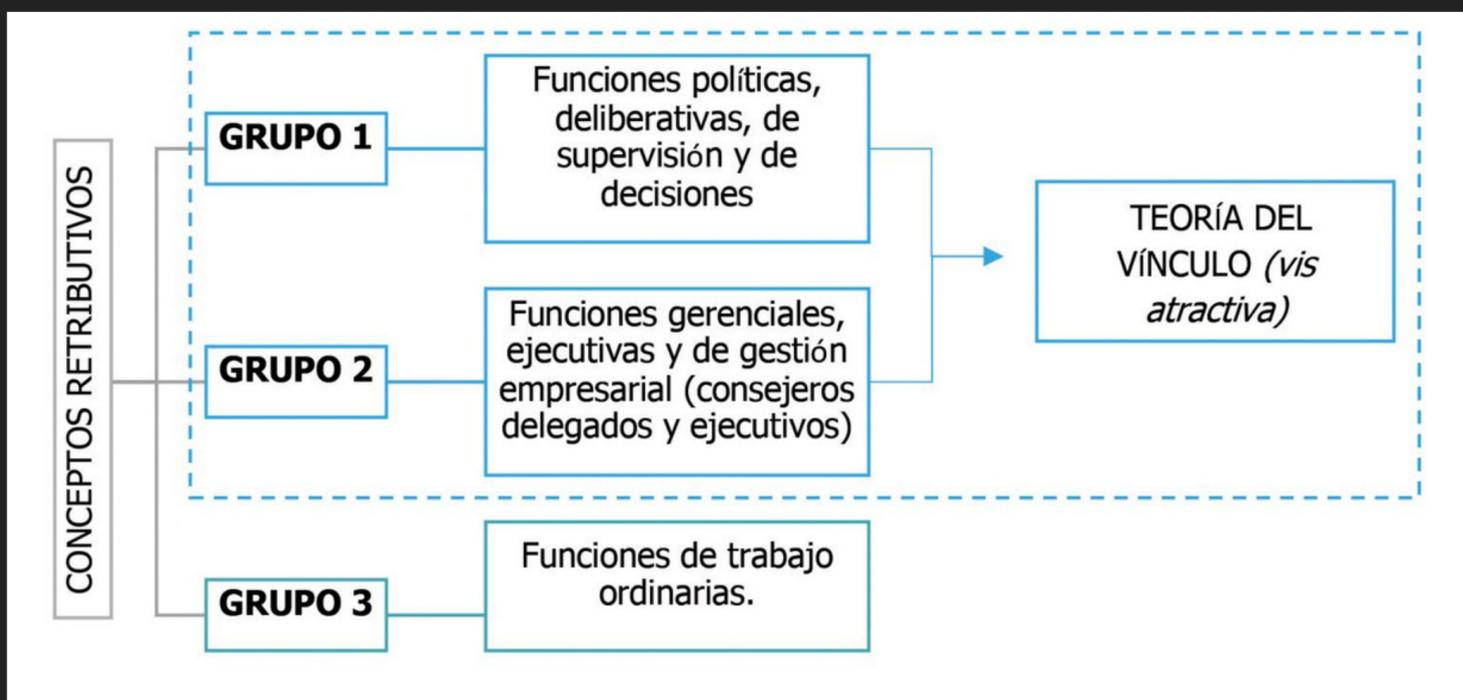
Ante la litigiosidad que se derivaba de dicha interpretación, la Dirección General de Tributos emitió un Informe de 12 de marzo de 2009, en el que se concluía que la retribución de los administradores era un gasto deducible, si esta estaba contemplada en los estatutos aun cuando no se cumpliera de forma escrupulosa con todos los requisitos establecidos en la normativa mercantil.

Entretanto, entró en vigor el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC, en adelante); que establece la presunción de gratuidad del cargo (salvo en entidades cotizadas) o, en su caso, tras contemplarse la retribución en estatutos, la obligatoriedad de aprobación en Junta General de Socios del importe máximo y el acuerdo, en su caso, del Consejo de Administración aprobando el reparto de los fondos previamente dotados en Junta General.

Asimismo, mediante la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, se modificó aquella y se previó de forma explícita que la retribución de los administradores no podría considerarse como liberalidad. Ante tal modificación, que a juicio de la mayor parte de la doctrina únicamente podía interpretarse como la voluntad del legislador de que las retribuciones de administradores fueran consideradas como gastos deducibles, la Agencia Tributaria pasó a considerarlas gasto ilícito si no se cumplía con todos los requisitos contemplados en la LSC, también considerado como no deducible y con exactamente los mismos inconvenientes y efectos prácticos.

En sentido similar, si bien distinguiendo las funciones gerenciales de las ordinarias de una relación laboral, el Tribunal Económico Administrativo Central sentaba doctrina vinculante para los órganos de la Administración Tributaria en Resoluciones de 17 de julio de 2019 y 8 de octubre de 2020, al establecer que:

- Para que la retribución de administradores, tanto por funciones propias del cargo de administrador, como por funciones de alta dirección sea gasto deducible, se debe cumplir escrupulosamente la legislación mercantil.
- En el caso de relaciones laborales ordinarias, no es necesario que estén contemplados en Estatutos dichas retribuciones, siendo un gasto deducible.



Las funciones de los grupos 1 y 2 quedarían subsumidas a la relación mercantil, salvo prueba en contrario, que corresponderá al contribuyente, puesto que la frontera entre unas y otras resulta extremadamente difusa, en la práctica, la actividad probatoria se demuestra imposible. Por lo que, Las funciones de los grupos 1 y 2 quedarían subsumidas a la relación mercantil, salvo prueba en contrario, que corresponderá al contribuyente, puesto que la frontera entre unas y otras resulta extremadamente difusa, en la práctica, la actividad probatoria se demuestra imposible. Por lo que, por aplicación de la teoría del vínculo, para que dichas retribuciones resulten deducibles, debe establecerse previsión estatutaria y acuerdo de la Junta General según lo detallado en la legislación mercantil (LSC).

El nuevo criterio sentado por la Audiencia Nacional

Ahora, la Sala Segunda de la Audiencia Nacional en Sentencia de 16 de febrero de 2022 (rec. 703/2018), considera la deducibilidad de los gastos de los administradores aun cuando no se prevea que dicho cargo será remunerado en los estatutos, pero este haya sido aprobado por la Junta General de Socios y no se haya impugnado en el plazo de un año (plazo de caducidad de la acción de impugnación) por parte de los socios minoritarios.

En el supuesto planteado, los socios mayoritarios de una sociedad aprueban una retribución en favor de los administradores de aquella para los ejercicios 2011, 2012 y 2013, que son a su vez sociedades participadas por ellos, cuando los estatutos prevén la gratuidad del cargo. Los socios minoritarios acuden a la jurisdicción mercantil, alegando un conflicto de intereses de aquellos y el contenido de los estatutos, puesto que al no preverse la retribución del cargo y no tratarse de sociedades cotizadas, estos se deben entender como gratuitos; resultando que los tribunales mercantiles fallan a favor de los socios minoritarios y declaran el acuerdo de 2011 impugnado, pero no los demás, puesto que no lo habían sido.

Llegado el procedimiento de Inspección tributaria ante los órganos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, esta los considera, como venía haciendo, un gasto no deducible y procede al ajuste en la Base Imponible del impuesto y, además, lo extrapola a los ejercicios 2012 y 2013, en los que considera que se produce identidad de hechos, considerándose por parte de dichos órganos que si la retribución de 2011 era nula, también lo debe ser la de los demás ejercicios.

Sin embargo, la Audiencia Nacional establece varias precisiones al respecto, y considera que, si bien los acuerdos de 2011 efectivamente son nulos y, aunque la sociedad no los haya reclamado a los administradores por vagancia o mala fe, es correcta la regularización y el ajuste en la Base Imponible del Impuesto. Sin embargo, no sucede así con respecto a los acuerdos adoptados en 2012 y 2013, acuerdos que fueron adoptados en Junta pero que, sin embargo, no fueron impugnados por parte de los socios minoritarios, y con ello se ha "convalidado" la legalidad de los acuerdos, en palabras del propio órgano jurisdiccional:

"En suma, creemos que la Administración puede prejudicialmente y a efectos fiscales la nulidad del acuerdo adoptado en Junta General si el mismo es contrario al orden público; pero fuera de tales casos no puede sostener la nulidad del acuerdo supliendo la inactividad de los legitimados para la impugnación, pues en tales casos, la inactividad de estos subsana o convalida el acuerdo.

No constando que se hubiesen impugnado los acuerdos de 2012 y 2013, su posible ilegalidad quedaría convalidada o subsanada, por lo que debe entenderse que estamos ante un gasto deducible. Repárese en que, por lo demás, la AEAT no niega la realidad de la actividad de los administradores."

Al no haberse impugnado por los socios minoritarios en el plazo, únicamente procedería dicha recalificación cuando se tratase de gastos contrarios al orden público, categoría que tal y como ya se ha declarado por el Tribunal Supremo y recuerda la Audiencia Nacional "el concepto de "contrario al orden público", debe aplicarse de forma restrictiva "y no se puede calificar de contrarios al orden público todos los acuerdos que resulten contrarios a una norma legal prohibitiva imperativa[...]" por lo tanto, la categoría de actos contrarios al orden público "[...] quedaría reservado a los supuestos en los que la adopción del acuerdo hubiera conllevado una vulneración de derechos reconocidos en la Constitución que se proyectan en el ámbito societario; a los casos en que los acuerdos sean constitutivos de delito; y los que contradigan los principios esenciales y configuradores del derecho societario. Lo que no ocurre en el caso de autos".



En este sentido resulta crucial la distinción entre nulidad absoluta o de pleno derecho y anulabilidad a la que los órganos de la Administración Tributaria han desoído, siendo que, en los casos de anulabilidad, esta debe ser declarada por los órganos competentes, en este caso la jurisdicción mercantil en un plazo determinado; deviniendo válidos por la inacción como se si se hubieran sancionado por las propias partes. Por lo contrario, en los casos en los que sean contrarios al orden público, como por ejemplo cabría categorizar el pago de un soborno, nos encontraríamos ante actos nulos de pleno derecho que, en todo caso, pueden ser considerados ilícitos por la administración tributaria.

Efectos de la Sentencia de la Audiencia Nacional

Si bien lo anterior es un importante logro en favor del contribuyente, debe resaltarse que las sentencias de la Audiencia Nacional no son constitutivas de Jurisprudencia en el sentido formal del término -vinculante u obligatorio, como complemento del ordenamiento-, pues, a tenor de lo dispuesto en el art. 1.6 del Código Civil, únicamente procede dicha calificación cuando existan dos o más sentencias en un mismo sentido y ante supuestos similares por parte del Tribunal Supremo, siendo en este caso la Audiencia Nacional el órgano juzgador, no resulta vinculante para la Administración Tributaria.

Sin embargo, entendemos que esta resolución judicial abre la puerta a seguir luchando por la deducibilidad de los gastos ante determinados supuestos en los que si bien no se ha seguido “de forma escrupulosa” con la legislación mercantil como decía la Dirección General de Tributos todavía en consulta V2399-21 de 12 de agosto de 2021, dicho acuerdo no ha perjudicado a las minorías, a veces, como en el caso de las sociedades unipersonales, inexistentes.

Sin embargo, para evitar litigiosidad, lo recomendable sigue siendo cumplir de forma escrupulosa con la legislación mercantil, regulando la retribución en los Estatutos de la sociedad, aprobando la misma y su importe exacto en la Junta General y haciendo mención expresa a la misma en la memoria anual.



Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor



2 de
diciembre
de 2022

Cesión de vehículos a empleados: cambio de criterio en IVA imputable al trabajador

Andres Grau

Socio de Kreston Iberaudit en la oficina de Baleares



La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de 22 de noviembre de 2017 (00/02789/2014/00/00), estableció como criterio vinculante que la cesión de vehículos a empleados por parte de empresas como parte de su paquete retributivo da lugar a la existencia de operaciones sujetas al IVA como prestaciones de servicios onerosas. El IVA soportado por las empresas que así proceden es deducible conforme a los parámetros generales de deducción de las empresas cedentes.

De acuerdo con dicha resolución, la empresa podía deducirse el 100% del IVA soportado en la adquisición del vehículo y debía repercutir el IVA que proporcionalmente se correspondiera con la disponibilidad que tuviera del vehículo para su uso privativo, y no en función de sus horas de uso efectivo, y ello porque se trataba, a juicio de la inspección de una prestación de servicios.

Pensemos en un comercial cuya empresa pone a disposición un vehículo cuya cesión, a valor de mercado, es de 1.000 euros al mes (IVA 21%); el comercial trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, y al finalizar la jornada el vehículo queda a su disposición, esto es, el empleado lo lleva a su casa.

De acuerdo con el criterio fijado por el TEAC, dado que el día tiene 24 horas y la semana 7 días:

Por lo tanto, de un total de 168 horas a la semana, el vehículo estaría a disposición 108, un 76% del tiempo.

De esta forma, en total, la empresa debía repercutir el 76% del IVA (210,00 euros) al trabajador.

Sin embargo, el 22 de febrero de 2022, el mismo TEAC en su resolución 00/03161/2019/00/00, tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-288/19) y lo

establecido por la Audiencia Nacional en sus Sentencias de 27 y 19 de diciembre (Rec. 235/2017 y 234/2017, respectivamente), exige el estudio sobre la onerosidad de la cesión, debiéndose cumplir los siguientes requisitos:

Entra dentro la práctica habitual de las empresas que estas adquieran vehículos para que sus empleados los utilicen en su actividad profesional y que, sin embargo, están a su disposición también fuera de su jornada laboral para destinarlo a otros usos.

- Debe existir relación directa entre la entrega del bien y la prestación del servicio efectuada por el empleado.
- La contrapartida ha de tener un valor subjetivo cuantificable en dinero.
- No basta con que, a efectos de IRPF, tenga la consideración de retribución en especie.

Y establece que "la falta de acreditación de la onerosidad en la que se fundamenta la liquidación contra la que se reclama, impide que la misma pueda ser confirmada (STS de 26 de octubre de 2021, recurso n.º 8146/2019)" y que "Extrapolando los criterios fijados por el TJUE a los que hemos hecho referencia en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución al caso presente, este TEAC debe concluir que la Inspección, según resulta del contenido del acuerdo de liquidación, no ha probado que por la cesión de vehículos a determinados empleados y a un consejero de la entidad, la reclamante obtenga efectivamente una contraprestación valuable económicamente ni, por tanto, la existencia de onerosidad. [...] En consecuencia, la regularización practicada que tiene como fundamento la existencia de una prestación de servicios de carácter oneroso respecto de la que existe incertidumbre sobre la concurrencia de contraprestación, no se ajusta a Derecho debiendo anular la liquidación en este punto."

De este modo, por ejemplo, procedería repercutir el IVA:

- Cuando el trabajador pague un precio por el uso total o parcial del vehículo.
- Cuando se renuncie a una parte de la retribución dineraria a cambio del disfrute del vehículo.

En resumen, para el TEAC, siguiendo la línea que estableció en diciembre de 2021 la Audiencia Nacional, es necesario hacer un estudio de si las prestaciones de servicios son onerosas o no según los criterios marcados por el TJUE antes expuestos, y si no concurren estos, al no poder calificarse la operación de onerosa, nos encontramos ante un supuesto de no sujeción y por lo tanto no procede que la Administración Tributaria exija un IVA devengado por el uso privativo de vehículos de forma generalizada, al tratarse, en determinados casos, de cesiones no sujetas, y qué, por lo tanto, no se integran en el cálculo de la regla de prorrata.

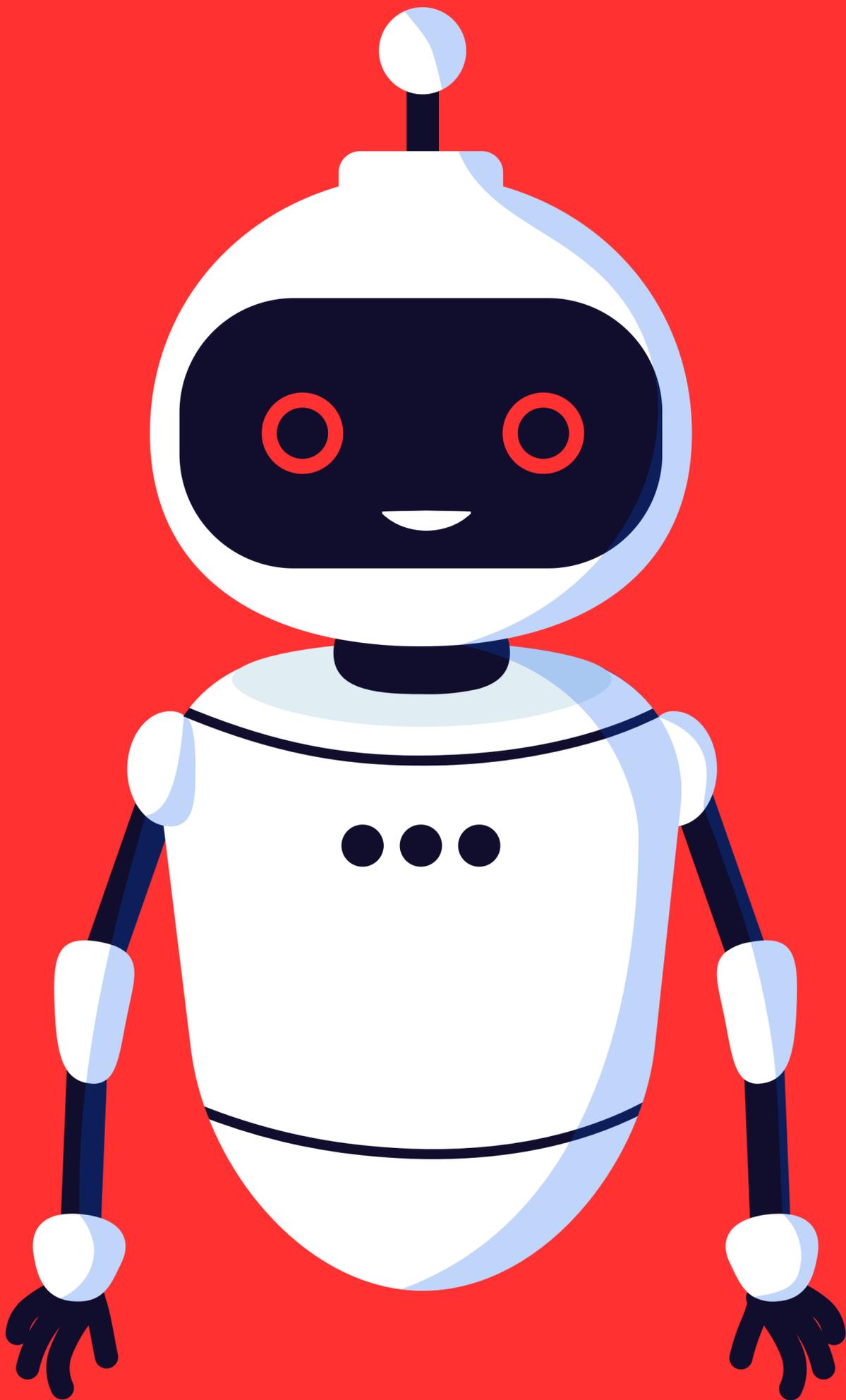
Por su parte, de cara al empresario/empleador, puesto que no podrá justificar la afectación a su actividad de la totalidad del IVA soportado en la adquisición de un vehículo, la empresa no podrá deducirse la totalidad del IVA soportado en la adquisición, sino únicamente la parte directamente afecta.

En este sentido, cabe mencionar que subsiste la presunción de afectación del 50%, es decir en aquellos casos en los que no repercutamos el IVA al trabajador, podremos seguir aplicando la deducción del 50% de IVA, debiendo demostrar cualquier cifra superior o inferior a dicho porcentaje, y regularizando, cuando procediera, como un bien de inversión la cuota de la deducción en los años posteriores.

Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor



Tecnologia





23 de
març
de 2022

Perspectiva de regulación de activos digitales a partir de iniciativas europeas



Luz Parrondo
UPF Barcelona School of Management

Lejos de ser un fenómeno pasajero, los criptoactivos están consolidándose en el mundo empresarial más allá del sector financiero y de la inversión. Están cada vez más presentes en el día a día de empresas y proyectos criptonativos emergentes y probablemente en unos años seremos testigos de su adopción masiva como medios de intercambio, creación y transmisión de valor. Para que esta adopción masiva sea una realidad, la criptotecnología ha de superar uno de sus mayores retos, la regulación. En Europa, el proceso regulatorio se inició en septiembre de 2021 cuando se presentó en el Parlamento Europeo la Propuesta de Reglamento en Mercados de Criptoactivos (en adelante MiCA). Esta propuesta de reglamento está consolidándose como el punto de referencia para la mayoría de los órganos reguladores de los países miembros. Fuera de este ámbito, encontramos otros referentes regulatorios como la Proposición de ley de la representación digital de activos mediante el uso de la criptografía y de la tecnología de libro registro distribuido y blockchain, del Principado de Andorra. El análisis de ambas propuestas nos ayudará a entender el futuro regulatorio de los criptoactivos en nuestro país.

Propuesta de Reglamento en Mercado de Criptoactivos (MiCA)

MiCA define los criptoactivos como una “representación digital de valor o derechos que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente, utilizando tecnología de contabilidad distribuida o tecnología similar”. Asimismo, enmarca dentro de su ámbito de aplicación a tres de los cuatro tipos de criptoactivos fungibles reconocidos. Los tres tipos afectados por MiCA son los E-money tokens, los Tokens referenciados por activos y los Tokens de utilidad y quedan fuera de su perímetro los Security Tokens al tratarse de activos financieros.

- E-money Token (Token de dinero electrónico) se define como “un criptoactivo cuyo propósito principal es ser utilizado como medio de intercambio y que pretende mantener un valor estable al referirse al valor de una moneda fiduciaria que es de curso legal”.

- **Token respaldado por activos (Asset-referenced Token)** que se define como “un criptoactivo que pretende mantener un valor estable al referirse al valor de varias monedas fiduciarias que son de curso legal, una o varias commodities, o uno o varios criptoactivos, o una combinación de dichos activos”.
- **Token de utilidad (Utility token)** que se define como “un criptoactivo destinado a proporcionar acceso digital a un bien o servicio, disponible en una DLT y que solo es aceptado por el emisor de ese token”.
- **Security Tokens (Token valor)** que se definen indirectamente como instrumentos financieros que están expresamente excluidos de la aplicación de MiCA y que siguen la regulación financiera. En consecuencia, MiCA propone modificar la MIFID II para incluir los instrumentos financieros emitidos y gestionados por la DLT en su marco legislativo.

De acuerdo con MiCA, los emisores de criptoactivos están obligados a presentar un documento técnico (White Paper) a las autoridades de supervisión con una evaluación o una opinión legal sobre si los tokens descritos en el documento técnico constituyen un instrumento financiero o dinero electrónico (que no sea un token de dinero electrónico), depósitos, depósitos estructurados o titulizaciones.

Requisitos MiCA (en revisión) para los emisores de Tokens referenciados a activos:

Los requisitos de licencia para los emisores de tokens referenciados a activos incluyen:

- Ser una entidad jurídica establecida en la Unión Europea.
- Poseer fondos por un importe superior a 350.000 euros o el 2% de la media de los activos de reserva (u otro importe exigido por el regulador pertinente).
- Presentar y publicar un documento técnico:
 - Con requisitos mínimos de divulgación similares a los requisitos de divulgación aplicables a un folleto.
 - La reserva debe mantenerse en todo momento, y el número de tokens y las reservas deben coincidir. (Nota: esta condición es altamente controvertida, especialmente tras la auditoría realizada a Tether en la que se evidenció que la reserva de dólares no se corresponde con el número de tokens en circulación.)
 - Los activos de reserva deben estar separados de los activos propios del emisor y deben mantenerse en custodia con un proveedor de servicios de criptoactivos o con una institución de crédito.
 - El documento técnico (White Paper) debe ser aprobado por la autoridad nacional competente pertinente (“ANC”) antes de su publicación. Dicha aprobación es parte del proceso de licencia para el emisor del token referenciado a activos.
 - Todos los emisores de tokens referenciados a activos deben enviar y publicar un documento técnico (incluso si están exentos de los requisitos de licencia).

Estarán exentos de estos requisitos los emisores de ofertas a pequeña escala: hasta 5 millones de euros en un plazo de 12 meses y los emisores de ofertas a inversores cualificados.

Requisitos MiCA (en revisión) para los emisores de Tokens de dinero electrónico:

- Ser una entidad jurídica establecida en la Unión Europea y autorizada como entidad de crédito en virtud de la CRD o como entidad de dinero electrónico en virtud de la Directiva sobre dinero electrónico.
- Cumplir con los requisitos operativos de la Directiva sobre dinero electrónico.
- Presentar y publicar un documento técnico:
 - Con requisitos mínimos de divulgación similares a los requisitos de divulgación aplicables a un folleto.
 - El documento técnico (White Paper) debe describir los derechos de reembolso de los titulares de tokens y las condiciones para ejercer dichos derechos:
 - El token de dinero electrónico debe constituir un reclamo directo de los titulares de tokens contra el emisor, y el emisor debe canjear el token de dinero electrónico en cualquier momento a su valor nominal.
 - El canje debe realizarse “en efectivo o transferencia de crédito”. Sin embargo, la regulación MiCA no especifica si en moneda fiduciaria o en criptoactivos.
 - No es necesario que el documento técnico sea aprobado previamente por la ANC pertinente.
 - Los emisores de tokens de dinero electrónico deben enviar y publicar un documento técnico, incluso si están exentos de los requisitos de licencia para ofertas u ofertas a pequeña escala a inversores calificados.

- No se requerirá ninguna licencia en virtud de la CRD o la Directiva de dinero electrónico para las ofertas de los emisores de hasta 5 millones de euros en un plazo de 12 meses, u ofertas a inversores cualificados.

Requisitos MiCA (en revisión) para los emisores de Tokens de utilidad:

- Ser una entidad jurídica, pero puede estar establecida fuera de la Unión Europea.
- Para cumplir con ciertos requisitos de gobernanza y conducta empresarial, que se indican en un documento técnico:
 - Requisitos mínimos de divulgación similares a los requisitos de divulgación aplicables a un folleto.
 - No es necesario que el documento técnico sea aprobado previamente por la ANC pertinente.
 - Los emisores de tokens de utilidad no estarán obligados a enviar y publicar un documento técnico (White Paper) si la oferta se relaciona con:
 - criptoactivos emitidos de forma gratuita
 - criptoactivos creados a través de la minería como pago de la tarifa/precio del gas
 - activos criptográficos únicos y no fungibles (es decir NFT)
 - ofertas a pequeña escala, es decir, hasta 150 personas por Estado miembro o hasta un importe total de 1 millón de euros en un plazo de 12 meses
 - ofertas solo a inversores cualificados.

Proposición de ley de la representación digital de activos digitales, Principado de Andorra

La categorización de las representaciones digitales es competencia exclusiva de la Autoridad Financiera Andorrana (AFA) y se hará de acuerdo con el procedimiento administrativo correspondiente y teniendo en cuenta sus características, su naturaleza jurídica y su funcionalidad, en función del propósito económico y en función de su estructura y otras características tecnológicas y de riesgo de la emisión que considere relevantes. La proposición establece la siguiente categorización:

- Dinero digital emitido por una autoridad gubernamental competente o un banco central. Dinero Soberano programable
 - Dinero digital soberano depositario (DDSD)
 - Dinero digital soberano e-pago (DDSEP)
- Tokens emitidos por entidades privadas identificadas o identificables
 - Criptomonedas
 - Criptomonedas tradicionales sin subyacente o criptocoins o tokens de pago
 - Stablecoins o Stabletokens
 - Stablecoins de fondos monetarios o fondos tokenizados o fiat-backed stablecoins
 - Electronic money stablecoins o e-money tokens
 - Fiat-backed stablecoins
 - Hybrid money stablecoin
 - Stablecoins de activos colateralizados
 - Off-chain stablecoins colateralizadas
 - On-chain stablecoins colateralizadas
 - Stablecoins algorítmicas
 - Tokens privados
 - Security tokens o Instrumentos financieros digitales
 - Tokens de utilidad o consumo
 - Tokens emitidos por entidades privadas no identificadas o identificables
 - Tokens híbridos o tokens duales

Esta clasificación pone de manifiesto la complejidad y diversidad de los activos digitales y evidencia el error que cometemos al referirnos a ellos de forma genérica como criptomonedas en lugar de criptoactivos. También nos ayuda a entender las múltiples funcionalidades, más allá de la inversión especulativa, y el poder transformador que presentan de cara a un futuro que cada día está más presente.

Es importante advertir que, a diferencia de MiCA, la proposición de ley andorrana distingue en un primer nivel los tokens públicos, es decir aquellos emitidos por una autoridad gubernamental, de los tokens privados. Esta es una distinción que ya nos advierte de la llegada de los CBDC, es decir, la moneda digital emitida por los bancos centrales. Posteriormente, y en línea con MiCA, los tokens privados se dividen en (1) criptomonedas (tanto volátiles y como estables) y (2) tokens privados a los que subdivide en cuatro tipos: financieros, de utilidad, híbridos y aquellos emitidos por entidades

privadas no identificadas o identificables. Posiblemente esta categorización resulte insuficiente para un adecuado tratamiento legal, especialmente si los requisitos que en muchos casos son similares a los de MiCA no se establecen en función del tipo de token. La proposición de ley establece requisitos mucho más generales que MiCA y, en mi opinión, poco estructurados.

Como conclusión al análisis de ambos documentos extraemos que las autoridades reguladoras se enfrentan principalmente al reto de definir y diferenciar unos tokens que cada vez son más híbridos, en un entorno cada vez más descentralizado y globalizado. Clasificar a los activos y demarcarlos territorialmente son misiones cada vez más complejas. Nos enfrenamos a un futuro en el que imperan conceptos como globalización, tokenización y descentralización; aparentemente ninguno de ellos fácil de regular. Pero si de algo hemos de estar seguros es de que el ser humano necesita vivir con seguridad y certidumbre, así que inevitablemente encontraremos la forma de conciliar la innovación con la regulación, y de esta forma estar preparados para buscar nuevos retos.



Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor

Comissió de Joves





11 de
març
de 2022

El teletrabajo que vino para quedarse. Reflexiones de la Comissió de Joves del Col·legi

Comissió de Joves del Col·legi

COVID-19, declaración de Estado de Alarma, cierre de bares y restaurantes, 9 de marzo, confinamiento. En menos de un mes, el mundo entero se vio forzado a parar de golpe, ¿quién lo podía prever?

En los años previos a la pandemia, todas las firmas de auditoría en menor o mayor medida habíamos iniciado un proceso de digitalización de dos pilares básicos en nuestra profesión; cómo interactuábamos como equipo y con nuestros clientes y cómo gestionábamos el tratamiento de los datos de nuestros clientes. Dichos aspectos, debido a nuestra manera de trabajar previa a la pandemia, en la que la casi totalidad de nuestros equipos trabajaban en las oficinas del cliente, ya se habían vuelto claves para un correcto desarrollo de nuestros trabajos y una adecuada gestión de nuestro negocio.

El día que se declaró el Estado de Alarma por primera vez las empresas de todo tipo se vieron forzadas a implementar el teletrabajo, poniendo a prueba la capacidad técnica, flexibilidad de los equipos y nuestra resiliencia económica. Pasados casi dos años, desde la Comissió de Joves del Col·legi hemos querido poner en común la experiencia que ha representado para cada uno de nosotros y lo que esta crisis ha supuesto en las diferentes firmas donde trabajamos. Nuestra intención es compartir nuestra visión sobre si la digitalización puede incorporarse en nuestra profesión para ser más eficientes, más flexibles y productivos y para hacerlo, hemos querido analizar cómo ha afectado la introducción del teletrabajo desde tres aspectos fundamentales:

- 1. Capacidad de reacción de las firmas de auditoría**
- 2. Coordinación e interacción con los clientes**
- 3. Capacidad de adaptación de los trabajadores**

1. CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LAS FIRMAS DE AUDITORÍA

A pesar de que existen diferencias en cuanto a estructura entre las diferentes firmas de auditoría, los miembros de la comisión coincidimos en que los esfuerzos realizados previamente por las diferentes firmas en digitalizar el modelo de ejecución y entrega de nuestros servicios nos facilitó disponer de los instrumentos necesarios para dar el salto al teletrabajo. Si bien es verdad que en algunos casos supuso un esfuerzo en cuanto a logística para permitir que todos los empleados tuviéramos acceso a una conexión segura desde nuestra casa, que nos permitiera seguir tratando los datos con la misma seguridad que nos ofrece, por ejemplo, estar conectados desde la oficina. No obstante, el hecho de que nuestro trabajo tenga que desarrollarse, de manera habitual, en las oficinas del cliente ha permitido que la adaptación al teletrabajo haya sido más sencilla, pues por lo general, la totalidad de las firmas ya disponían de medios como ordenadores portátiles o VPN instaladas, así como disponibilidad de dispositivos para acceder a internet y trabajar en la nube y en sharepoints. Sin embargo, no todo fue tan fácil, y las firmas tuvieron que hacer el mismo esfuerzo que muchos de nuestros clientes, proveyendo los equipos e infraestructuras necesarias al personal de los departamentos de soporte y administrativo, que habitualmente ejecutaban su trabajo desde un puesto fijo en las oficinas de nuestras firmas. Este fue un aspecto muy relevante y foco de todas las firmas, al ser el personal de apoyo una pieza clave del engranaje de nuestras firmas, gestionando desde la propia contabilidad, facturación y nóminas. Con todas las palancas que ya disponíamos y con las que se tuvieron que ponerse en funcionamiento, todos reaccionamos coordinadamente y conseguimos que el impacto de nada menos que una pandemia mundial, no mermara la producción y la calidad de nuestro trabajo.

El hecho de que nuestro trabajo tenga que desarrollarse, de manera habitual, en las oficinas del cliente ha permitido que la adaptación al teletrabajo haya sido más sencilla, pues por lo general, la totalidad de las firmas ya disponían de medios como ordenadores portátiles o VPN instaladas

Sin embargo, el hecho de estar tecnológicamente más preparados para el teletrabajo que otros sectores, esto no ha significado, que los últimos dos años, todo haya sido un camino fácil, ni que no hayan aparecido muchos obstáculos y problemas que hayan tenido que abordarse de uno u otra manera. La auditoría es una profesión, que más allá de los aspectos técnicos se basa en la conexión con los equipos y nuestros clientes, siendo el factor humano un aspecto clave de nuestra profesión. A pesar de todas las herramientas que disponíamos para estar conectados, todos echamos de menos el contacto con nuestros equipos. El impacto que tuvo el confinamiento, en la forma de relacionarnos, por ende, en la forma de trabajar en equipo fue más inesperado y estábamos los profesionales y las firmas menos preparados para gestionarlo que la parte técnica.

Una vez resueltos los problemas técnicos y logísticos, las firmas y nosotros como profesionales, tuvimos que reinventarnos para trabajar en equipo, coordinados y conectados en unas circunstancias totalmente desfavorables. Cada uno, en su categoría y con sus responsabilidades, tuvo que reinventarse para planificar, ejecutar y revisar las auditorías, así como gestionar la relación con los clientes, en un momento en que muchos de ellos lo estaban pasando mal. Sin duda alguna, este fue, y de alguna manera, continúa siendo el reto más importante, mantener a los equipos conectados con las firmas y los proyectos manteniendo los niveles de calidad esperados de nuestra profesión. Durante los meses más duros del confinamiento, los esfuerzos para estar cerca de los equipos, dando instrucciones claras de cómo seguir trabajando, ya sea revisando aspectos rutinarios como analizando aspectos de la auditoría surgidos a raíz de la pandemia, esto supuso una dedicación y un esfuerzo de todos extraordinario a costa de horas de sueño, nuestra impresión es que nunca todo el mundo había dedicado tanto tiempo al trabajo, poniendo todo lo que podía de su parte para que la "máquina" funcionase.

Hay que considerar que no es lo mismo el teletrabajo previamente entendido que el mismo en situación de confinamiento, siendo, éste último, muy distinto según las circunstancias personales de cada trabajador. Entendemos la auditoría como un trabajo de equipo y en equipo. De hecho, probablemente, sin la relación que se crea en muchos equipos sería complicado superar con éxito ciertos hitos y puntas de trabajo. El mantener este espíritu desde la distancia ha sido un reto muy significativo y habría que ver si se ha logrado alcanzar en todos los casos. En cualquier caso, creemos que debemos estar orgullosos de la capacidad de adaptación y superación que hemos demostrado. No obstante, después de dos años trabajando en remoto, se han puesto de manifiesto nuevos retos a los que las firmas van a tener que dar alguna solución, como son garantizar la formación de los profesionales, principalmente a las nuevas incorporaciones y aumentar el compromiso y el vínculo de los profesionales con las firmas, así como la retención del talento.

Nos preguntamos si merecería la pena utilizar lo aprendido para incorporarlo de manera definitiva a la organización cotidiana de nuestro trabajo, ¿ha venido el teletrabajo para quedarse? Desde la

Comissió de Joves del Col·legi coincidimos en que lo ideal sería un sistema mixto entre el teletrabajo y la presencialidad en cliente y en nuestras oficinas. Este sistema supone un mayor esfuerzo en organización y coordinación con el cliente para realizar las visitas al cliente cuando realmente sean necesarias para recabar información o documentación concreta, pero conlleva ventajas tanto para el empleado como para la firma. Por un lado, dado que ya no es tan necesario trabajar presencialmente en las oficinas, las auditoras podrían pensar en una optimización de los espacios. Por otro lado, dado que las reuniones deberán estar mucho más planificadas pues se dispone de un tiempo y espacio limitado, tanto si se realizan de manera presencial como virtual, nos veremos obligados a planificarlas y estructurarlas adecuadamente siendo más eficientes en la gestión del tiempo que empleamos en comunicarnos con el equipo y el cliente. Por último, la flexibilidad que nos permite tener nuestra profesión para combinar el teletrabajo con la presencialidad ha de ser utilizada para atraer y retener a profesionales.

Si bien es cierto que el teletrabajo tiene un hueco en nuestra profesión y creemos que puede aportarnos importantes ventajas, creemos que la presencialidad sigue siendo necesaria, pues en nuestra profesión el contacto directo con el cliente y el equipo es fundamental. Por lo tanto, debemos implementar el teletrabajo para ser más flexibles, adaptarnos a las necesidades del cliente y hacer que la estructura del equipo sea más versátil, pero utilizando fórmulas mixtas que incluyan presencialidad para garantizar la formación de nuestros equipos, y seguir dando un servicio de calidad a nuestros clientes.

2. COORDINACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES

Como cualquier empresa, las firmas de auditoría, mantener y reforzar las relaciones con nuestros clientes durante estos dos últimos años en las actuales circunstancias ha sido uno de los principales objetivos. Mantener los niveles de comunicación y contacto con nuestros clientes ha sido otro de los aspectos más desarrollados y que han resultado de mayor importancia. De nuevo debemos analizar este aspecto desde dos puntos de vista. Por un lado, debemos tener en cuenta los aspectos técnicos, es decir, el nivel de digitalización del cliente. Muchos de nuestros clientes, han invertido durante los años previos a la pandemia en sistemas operativos que permitiesen una gestión más rápida y flexible de la información, y esto pasaba sin lugar a duda, por la digitalización. Las facturas, albaranes, contratos, etc. ya no se envían por correo ordinario sino por email, lo que permite un almacenamiento digital, y sustituir los archivadores por la nube. Esto permite tener acceso a la información desde cualquier dispositivo con acceso a internet, probablemente sin esta tecnología hubiese sido imposible desarrollar nuestro trabajo durante el confinamiento.

El teletrabajo tiene un hueco en nuestra profesión y creemos que puede aportarnos importantes ventajas, creemos que la presencialidad sigue siendo necesaria, pues en nuestra profesión el contacto directo con el cliente y el equipo es fundamental

Sin embargo, y a pesar de tener las bases para la digitalización, hemos comprobado como muchos de nuestros clientes han tenido problemas similares a los de nuestros departamentos de administración señalados anteriormente. En su mayoría, los trabajadores utilizan ordenadores fijos, y los sistemas de seguridad y tratamiento de datos debieron ser adaptados para trabajar desde casa durante el confinamiento. Algunos estaban preparados para adaptarse y lo hicieron con agilidad y otros se vieron obligados a parar, además de la actividad, la parte administrativa de su negocio.

No nos cabe duda de que este hecho ha servido para poner de manifiesto la necesidad de acelerar la digitalización del ecosistema empresarial, desde tres puntos de vista:

- Mejorar la conectividad digital, lo que implica la utilización de la nube y de sharepoints, que por un lado nos lleva a digitalizar toda la información empresarial y, en consecuencia, mejora el acceso de los usuarios a dicha información.
- La digitalización desde un punto de vista de la importancia del dato. Es decir, los sistemas de gestión, ERP y demás aplicativos utilizados por las empresas han de evolucionar de cara a proporcionar información de mayor valor.
- La digitalización vista como una oportunidad para que el que el teletrabajo sea valorado y sea visto como un factor diferencial a la hora de escoger un trabajo.

Este proceso de digitalización es imparable, además permite una trazabilidad de la información de forma mucho más inmediata y este hecho nos facilita la realización de nuestros procesos de auditoría. De hecho, la digitalización ha cambiado y aún cambiará más la manera como auditamos, si ya es evidente que este proceso nos ha hecho cambiar la manera de relacionarnos con nuestros clientes, en el futuro supondrá que nuestras auditorías evolucionarán a la auditoría del dato, mediante la irrupción de nuevas tecnologías, como el blockchain, el process mining, etc.

Por otro lado, el trabajo en remoto ha supuesto, en muchos casos que los plazos de finalización se amplíen. En este sentido, parte de esta ampliación de los periodos de auditoría se ha debido a la falta de adaptación tanto por nuestra parte como parte del cliente a la nueva situación, hecho reconocido por los organismos reguladores al ampliar los plazos para el depósito de cuentas, por ejemplo. Desde luego, la reducción de nuestra presencia física en las oficinas de los clientes ha sido vista en la mayoría de los casos como algo positivo para ellos, pero una vez adaptados, e instalados en nuestras nuevas posiciones, estamos viendo cómo han cambiado las reglas del juego, y nos está resultando mucho más difícil planificar el trabajo por semanas y por cliente, como estamos acostumbrados. Esta pequeña máxima de que "el auditor está en el cliente para hacer presión para que nos faciliten la información", por desgracia a veces es cierta, y esta forma de trabajar dota al cliente de la capacidad para dedicar a la auditoría el tiempo que necesite sin tener al auditor llamando a la puerta o preguntando cosas en momentos en los que al cliente no le vaya bien. La flexibilidad es por tanto un arma de doble filo que puede llevar a una dilación injustificada en los plazos y que nos obliga a estar mucho más tiempo disponible para el cliente, incurriendo muy probablemente en la situación de que todos los clientes se acumulen en el mismo periodo de tiempo y nos resulte mucho más difícil planificar con ellos la temporada y cumplir con los plazos.

Lo que está claro es que la auditoría tiene aún más valor, si cabe, en una situación como la actual y lo importante, sea en modalidad presencial, remota o mixta, es que se consiga una evidencia de auditoría adecuada y suficiente para soportar las opiniones que se han emitido y se emitan en una coyuntura tan complicada como la que nos está tocando vivir. Es un nuevo reto y estamos preparados para arremangarnos y aprovechar las ventajas que esta situación ofrece para poder utilizarlas a nuestro favor y que la auditoría aporte cada vez más valor a los usuarios de la información.

3. CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

En los últimos años se ha venido observando una tendencia a la baja de los jóvenes que quieren especializarse en el sector de la auditoría de cuentas de forma definitiva. Si bien, sí que encontramos un gran número de jóvenes con ganas de aprender durante los primeros años de su vida profesional dedicándolos a la auditoría, la falta de conciliación entre la vida profesional y la vida personal dificulta la continuidad laboral en este sector. Es por esto por lo que nos preguntamos: ¿Puede el COVID-19 haber sido un punto de inflexión para invertir esta tendencia? Antoine de Saint-Exupéry decía: "el hombre se descubre cuando se mide a un obstáculo", estamos a punto de superar uno muy grande, veamos dónde quedamos después.

Para poder llevar a cabo el teletrabajo de forma efectiva los trabajadores también han tenido que adaptarse tanto en el espacio y los utensilios, como en la gestión emocional, social y familiar. La situación ha obligado a tener que adaptar un espacio en casa donde se pueda trabajar de forma productiva y eficiente. Así mismo, en muchos casos ha habido la necesidad de pactar con los convivientes unos horarios y/o zonas, para poder adaptarse a esta nueva situación que se ha presentado y así poder continuar con nuestras labores profesionales de forma productiva y eficiente tal y como se venía haciendo hasta la fecha.

Si bien es cierto que, como ya se ha mencionado, consideramos parte esencial de la auditoría el trabajo en equipo de forma presencial y valorando el hecho de que, en determinadas reuniones es muy complicado que la tecnología pueda suplir en todos los aspectos un cara a cara, también hay momentos de nuestro trabajo que requieren concentración, silencio y trabajo individual. Si somos capaces de organizarnos bien y sabiendo que la tecnología puede dar ese soporte puntual en caso de ser necesario. Una modalidad mixta podría conseguir que ciertos días a la semana exista un ahorro de tiempo, como, por ejemplo, en desplazamientos. Este hecho puede conllevar a una mejor conciliación personal-profesional y dar respuesta a lo que se viene buscando desde hace tiempo, sin olvidar la necesaria interacción física en los equipos para afianzar lazos y garantizar que los equipos tengan la formación y compromiso con la profesión necesarios. Estamos convencidos que, de ser así, se conseguiría darle más atractivo a la profesión para las futuras generaciones de auditores.

CONCLUSIÓN

Charles Darwin decía, *"no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio"*. Citándole, creemos que se habría sorprendido de la capacidad de adaptación que ha mostrado la auditoría a la situación derivada de la pandemia.

Una vez ya transcurrido un tiempo des de la vuelta del confinamiento total, parece que este cambio no será temporal, la tendencia será probablemente que a partir de ahora se realizará más trabajo desde casa, combinándolo con visitas a clientes y con presencia puntual en la oficina. Esto supone un gran reto para las empresas de auditoría, en lo que se refiere a la formación de los equipos y sobre

todo de las nuevas incorporaciones, ya que hasta antes del confinamiento la formación se realizaba en el día a día mientras se realizaban las pruebas de auditoría, y esta nueva tendencia supone reorganizar la forma de trabajar y ser capaces de dar la formación adecuada a los nuevos equipos para que puedan seguir progresando durante su carrera profesional tal y como lo venían haciendo hasta la fecha.

En conclusión, la estructura de las firmas estaba más preparada de lo que esperaba a la situación sobrevenida dado que, entre otros aspectos, la mayor parte de la plantilla ya disponía de recursos para poder trabajar en remoto y contaba con equipos (y clientes) que, en ocasiones, no estaban juntos durante todo el proyecto y, por tanto, se relacionaban ya, en parte, a distancia. Estos recursos, pensados inicialmente para trabajar desde el cliente, han servido para poder, de un día para otro, tener los equipos listos para poder trabajar desde casa de una forma efectiva y eficiente.

Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor



Sector públic





22 de
febrero
de 2022

Las auditorías obligatorias de las entidades dependientes del Sector Público Local. Algunas reflexiones en el primer año de su aplicación

Pere Ruiz Espinós

Economista, censor jurado de cuentas, socio de Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L. y presidente de la Comisión de Sector Público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España



La aprobación del RD 424/2017 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, ha supuesto diversas novedades en el ejercicio de la función interventora del sector local en los últimos ejercicios. Entre ellas, podemos destacar la implantación de las auditorías obligatorias que la Intervención debe realizar sobre las entidades dependientes del ente local y, también como novedad significativa, se prevé de forma expresa la posibilidad de realizar estas auditorías en colaboración con firmas privadas de auditoría. Esta regulación ha supuesto un giro radical en el ámbito del control financiero del sector local, si bien se han generado determinadas cuestiones que merecen algunas reflexiones.

Las auditorías de cuentas obligatorias en las entidades dependientes, previstas en el RD 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

Después de un laborioso proceso de gestación, con diversos borradores que estuvieron circulando previamente a su aprobación, en el BOE núm. 113 de 12 de mayo de 2017, finalmente vio la luz esta normativa, largamente esperada por los órganos de control interno del sector público local, aunque su plena vigencia aún se demoró unos meses más, hasta el 1 de julio de 2018.

Muchos son los aspectos que regula el RD, que han incidido de manera muy substancial en las formas de ejercicio del control interno local, actualizando y adaptando a los nuevos entornos de control, una función interventora que había quedado claramente obsoleta y un paso atrás respecto el régimen de control ya aplicado por otras Administraciones, especialmente la Administración General del Estado. No entraremos a analizar las ingentes novedades sobre las formas de control que se han derivado de la aplicación del RD 424/2017, todas ellas relevantes, sino que queremos centrarnos en una cuestión específica que ha supuesto una cierta revolución en la forma que las Intervenciones Locales ejercen el control sobre sus entes dependientes, tal como es la realización de auditorías de cuentas anuales obligatorias sobre los mismos.

Si bien el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya preveía en su artículo 220, el ejercicio del control financiero para comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes y que dicho control financiero debía realizarse por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público; el desarrollo dado por el RD 424/2017 es mucho más completo y establece unas pautas remarcables.

En primer lugar, el RD 424/2017 en su artículo 29.A) establece la obligación para el interventor local de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de:

- Los organismos autónomos locales.
- Las entidades públicas empresariales locales.
- Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa específica.
- Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este Reglamento.
- Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.

Conforme establece la disposición transitoria única del mencionado RD, dichas auditorías se realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019. Por tanto, a pesar de que el RD se publicó en el 2017, y que su vigencia se demoró hasta el mes de julio de 2018, el propio RD estableció aún una transitoriedad mayor para estas auditorías, de manera que en la práctica las primeras cuentas de dichas entidades que fueron objeto de auditoría fueron las cerradas a 31 de diciembre de 2019. En condiciones normales, a la fecha de publicación de este artículo en otoño del 2020, deberían haber sido ya realizadas la inmensa mayoría de las auditorías de los ejercicios 2019 y 2020 y deberíamos estar ya planificando la realización de las auditorías correspondientes al ejercicio 2021. Sin embargo, las condiciones excepcionales derivadas de la situación de alerta sanitaria provocada por el COVID-19, han demorado más de lo deseable el cierre de las cuentas y de las auditorías, pero no por ello dejamos de tener ya una primera percepción de cuáles han sido las dificultades y contradicciones que se han puesto de manifiesto al llevar a la práctica estas auditorías.

Si no fuera suficiente con la nueva obligatoriedad en la realización de la auditoría de cuentas anuales obligatoria de los entes dependientes, reforzando y concretando el régimen de control financiero vigente hasta la fecha, derivado de una insípida regulación establecida por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; el RD 424/2017 ha venido también a regular un aspecto como la colaboración con auditores privados, que si bien no podemos ocultar que era ya una fórmula existente y utilizada por muchas Intervenciones Locales, nunca hasta ahora en la normativa de control financiero local española se había regulado ésta de manera expresa. En particular, en el artículo 34 del RD se establece la posibilidad que el órgano interventor pueda recabar la colaboración privada para la realización de las auditorías públicas y que la Entidad Local podrá contratar para colaborar con el órgano interventor a firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano interventor. Para el ejercicio de esta colaboración, se establecen algunas condiciones:

- Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del período de ocho.
- Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación con cada trabajo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.

La sujeción a las normas de auditoría de la IGAE de las auditorías realizadas en el Sector Público Local

En el RD 424/2017 se hace repetidas referencias a que las actuaciones de auditoría pública realizadas por el Órgano Interventor Local deberán sujetarse a las normas de auditoría aprobadas por la Intervención General del Estado (IGAE) vigentes en cada momento. Esta referencia a las normas de auditoría de la IGAE resulta lógica y comprensible, dada la disparidad de las intervenciones locales en cuanto a tamaño, volumen presupuestario, modelo de control o cantidad de entes dependientes y, por tanto, es razonable la remisión a un marco normativo de auditoría pública plenamente consolidado y desarrollado, como el que la IGAE tiene ya implantado en la Administración General del Estado, sin olvidar que el marco para la función interventora local regulado por el RD 424/2017 es, en definitiva, una adaptación y traslación de aquello que ya venía desarrollando la IGAE.

Sin embargo, pocos podíamos esperar que en el año 2019 se produjera una conjunción de novedades normativas que han impactado de pleno en el desarrollo de las auditorías de cuentas en el sector local: por un lado, la obligatoriedad de la auditoría de las cuentas a 31/12/2019 a realizar por el interventor local y, por otro, la aprobación de las NIA-ES-SP mediante Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 25 de octubre de 2019, por la que se aprueba la adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría, que son de aplicación obligatoria en los trabajos de auditoría de cuentas referidas a las cuentas anuales que se inicien a partir del 1 de enero de 2019, es decir, otra vez a las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2019.

Por tanto, el interventor local se ha encontrado con la obligación de realizar, en muchas ocasiones por primera vez la auditoría de sus entes dependientes y que además estas auditorías las ha debido realizar en base a unas normas de reciente aprobación y que eran, en general, totalmente desconocidas por los interventores locales.

Algunas reflexiones sobre la aplicación de las auditorías obligatorias en los entes dependientes del sector público local.

Una vez sintetizado el entorno en el cual han debido ser realizadas las auditorías de las cuentas anuales de los entes dependientes o, en algunos casos, se encuentran aún en curso por la situación de alerta sanitaria, podemos ya plantear algunas reflexiones en cuanto a las dificultades prácticas que éstas han conllevado y que podemos agrupar en diversos ámbitos:

- La definición del perímetro que debe ser objeto de auditoría por parte de la Intervención local.
- El proceso de contratación de auditores privados.
- La ejecución del trabajo en base a NIA-ES-SP.
- La emisión del informe.

La definición del perímetro objeto de auditoría.

Si bien el artículo 29.A) del RD 424/2017 pretende hacer una relación concreta de las entidades que deben ser objeto de auditoría, no es inusual que determinados entes locales tengan aún ciertas dificultades para establecer cuáles son las entidades que se encuentran bajo su ámbito de control. Suele ser fácil definir los organismos autónomos o entidades públicas empresariales adscritos al Ente Local; sin embargo, no ocurre lo mismo con determinadas fundaciones o consorcios, con participación en ocasiones de diversas entidades públicas y que se encuentran pendientes de ser sectorizadas por la IGAE, o que están en proceso de cambio de adscripción. Ante esta falta de definición, pueden existir consorcios o fundaciones del sector público local en que el órgano interventor no haya tenido clara su competencia para realizar la auditoría.

Si bien la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece un marco claro para definir el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (en sus artículos 82 y 83), se requiere un último esfuerzo para poder delimitar claramente las entidades adscritas a cada Administración, siguiendo las pautas que la propia Ley 40/2015 fija para los Consorcios (Capítulo VI) y las Fundaciones (Capítulo VII).

Al margen de esta problemática existente en algunos casos para determinar la adscripción a un ente local, afortunadamente cada vez en un número más reducido de casos, el RD 424/2017 plantea otras incoherencias que en un futuro deberían ser objeto de análisis y solución:

- **La auditoría a realizar por el interventor de las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa específica. La inclusión de estas fundaciones en el ámbito de la auditoría obligatoria a realizar por el interventor plantea una incoherencia de partida: si una fundación se encuentra obligada a auditarse por su normativa específica, significa que ya venía siendo auditada previamente, y que esta auditoría la realizaba un auditor privado en el marco de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas y de las normas de auditoría publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en particular las NIA-ES. Con la aplicación estricta del RD 424/2017, estas auditorías pasarían de realizarse en un marco de auditoría "privada" a un marco de auditoría "pública", habiendo de presentar los informes de auditoría emitidos por la Intervención al Protectorado correspondiente, lo que presenta una incoherencia que, cuando menos, debería ser clarificada.**
- **Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías. En este caso queda claro, a diferencia de lo que ocurre con las fundaciones obligadas a auditarse por su normativa específica, que estas auditorías quedan excluidas de aquello que hemos denominado "auditoría privada". Pero, ¿qué ocurre con las fundaciones y sociedades no incluidas en el plan anual de auditorías de la Intervención?, ¿no son auditadas o pueden serlo de manera voluntaria por decisión de los propios órganos de gobierno, Patronato o Junta General? Resulta evidente que si el interventor, en base a su análisis preliminar de riesgos, ha decidido no incluir en un determinado ejercicio la auditoría de una fundación o sociedad no obligada a auditarse, nada impide que esta auditoría pueda ser realizada de manera voluntaria. En este caso, esta auditoría se enmarcaría en las auditorías voluntarias que la propia Ley de Auditoría prevé y, por tanto, se encontraría sujeta al marco normativo del ICAC. Sin embargo, el propio ICAC dejó esta cuestión en el aire en su respuesta a la consulta número 2 publicada en el BOICAC número 111 de septiembre de 2017. En dicha consulta, se pronuncia claramente en relación a la sujeción a normas de auditoría pública de las auditorías de sociedades no obligadas a auditarse, pero incluidas en el plan de auditorías de la Intervención y también con relación a la sujeción a normas de auditoría mercantil de las sociedades mercantiles públicas obligadas a auditarse.**
- **El sentido común nos hace pensar que una auditoría voluntaria no incluida en el Plan anual de la Intervención debe sujetarse a normas de auditoría del ICAC, pero en mi opinión, requeriría algún pronunciamiento expreso del ICAC o de la IGAE. Además, se da la paradoja que una misma sociedad sea un año objeto de auditoría por un auditor privado en base a normas ICAC y al siguiente por el interventor, en base a normas públicas.**

El proceso de contratación de auditores privados.

Desde mi perspectiva de auditor privado y reproduciendo la opinión repetidamente expresada en múltiples foros por el propio Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, la colaboración de auditores privados en el campo de la auditoría pública, es necesaria y positiva desde muchos puntos de vista; pero especialmente para complementar unos recursos habitualmente escasos en los órganos de control públicos en aras de una mayor transparencia y control de los fondos públicos y también para aportar al sector público una metodología, conocimiento y profesionalidad ampliamente contrastadas de los auditores privados.

Por todo ello, debemos celebrar que el RD 424/2017 establezca de forma expresa la posibilidad de contratación de auditores privados en la realización de las auditorías del sector público local. Sin embargo, la regulación de esta contratación deja algunas lagunas, especialmente en el campo de la independencia o incompatibilidad del auditor privado, haciendo una referencia muy genérica a que "no podrán ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe". Sería necesario desarrollar estos aspectos, concretando qué tipo de trabajos o materias; si son referidas a la propia entidad local, a la que va a ser auditada o a otra entidad dependiente del mismo ente local.

Por otra parte, la experiencia de estos últimos ejercicios en la contratación de auditores privados ha puesto de manifiesto otras dificultades, seguramente atribuibles a la falta de experiencia de algunos órganos interventores en el momento de definir los pliegos de prescripciones técnicas que deben regular esa contratación:

- **Determinadas incoherencias en cuanto a la normativa de auditoría a aplicar, haciendo referencia a normativa ICAC o modelos de informe en base a NIA-ES emitidos por el propio auditor privado, que obviamente no resultan de aplicación en trabajos de auditoría pública.**

- **Inclusión en el propio objeto de contratación de trabajos complementarios a la propia auditoría de cuentas, que, aunque el RD 424/2017 no los mencione expresamente, podrían dar lugar a una clara incompatibilidad; tales como, por ejemplo, la realización de planes de viabilidad o saneamiento para la entidad objeto de auditoría.**
- **Inadecuado dimensionamiento de las horas necesarias para la realización de un trabajo de auditoría de cuentas, lo que da lugar a unos presupuestos base de licitación claramente insuficientes para la realización de una auditoría en base a las normas vigentes.**

Sería necesario que los interventores locales tuvieran en cuenta de forma adecuada los requerimientos técnicos de una auditoría de cuentas en base a normas de auditoría pública, para diseñar unos pliegos que resulten adecuados y coherentes, superando esas deficiencias que hemos apuntado. En este campo, sin duda ha resultado muy útil la labor de unificación y coordinación derivada de la aplicación de acuerdos marco, que facilitan enormemente este proceso de contratación, como por ejemplo el acuerdo marco impulsado por la Associació Catalana de Municipis.

La ejecución del trabajo en base a NIA-ES-SP.

Tal como hemos apuntado anteriormente, la aplicación de las NIA-ES-SP ha sido una dificultad añadida a la realización de las auditorías de los entes dependientes del sector local. La novedad de estas normas, tanto para los interventores locales, como para los propios auditores privados, ha supuesto un esfuerzo de adaptación mutuo, aunque los auditores privados jugamos ya con la ventaja de conocer desde hace años las NIA-ES, en las cuales están básicamente inspiradas las NIA-ES-SP. Sin embargo, sí podemos destacar algunos aspectos que están suponiendo dificultades prácticas que muy probablemente, con el paso de tiempo, sabremos mejor como afrontar. Entre otras:

- **La planificación del trabajo, incluyendo el análisis de riesgos, que en el contexto de entidades del sector público, reviste de unas particularidades concretas.**
- **El proceso de comunicación con los órganos de gobierno, no siempre fácil, al ser estos de carácter fundamentalmente político.**
- **El proceso de supervisión que debe realizar el interventor local del trabajo del auditor privado, en el marco de la Norma Técnica de la IGAE de 11 de abril de 2007 sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas. En muchas ocasiones, la escasa formación y experiencia hasta ahora de los interventores locales en el proceso y metodología de una auditoría en base a NIA-ES-SP, dificulta enormemente el proceso de supervisión.**
- **La determinación de la materialidad en unos parámetros diferentes a los aplicables a la auditoría privada, al seguir siendo vigente la norma de la IGAE al respecto, preexistente a las NIA-ES-SP (Norma Técnica sobre evaluación de importancia relativa en las auditorías de cuentas realizadas por la IGAE, de 11 de abril de 2007).**
- **La cada vez mayor implantación de la administración electrónica, lo que comporta por un lado diseñar procedimientos de auditoría adaptados a la digitalización y tratamiento masivo de datos y, por otra parte, el diseño de pruebas de control específicas sobre los procesos informatizados.**

La emisión del informe.

En el marco de las normas de auditoría pública, el sujeto auditor es el órgano de control público y, por tanto, la competencia para la emisión de los informes de auditoría regulados por el RD 424/2017 corresponde siempre a la Intervención Local.

Esta afirmación, que no reviste dudas en el marco de las vigentes normas de auditoría públicas, supone aún en ocasiones una dificultad práctica, al haber sido anteriormente habitual que auditores privados emitieran informes de auditoría pública, ante una falta de definición y regulación normativa clara. El cambio en la firma del informe requiere de una pedagogía tanto para los propios órganos interventores, como para los destinatarios de los informes.

Obviamente, el auditor privado que colabora con la intervención debe expresar por escrito las conclusiones de su trabajo, los principales hallazgos y las limitaciones o salvedades que haya observado. Pero ello debe ser plasmado no en su informe de auditoría, sino en forma de un memorándum de conclusiones (que puede incluir una propuesta de informe) dirigido a la Intervención Local, la cual, en base a dicho memorándum, a la propuesta de informe que contenga y al propio proceso de supervisión realizado del auditor privado, emitirá su informe.

Muy probablemente, el conocimiento que estamos acumulando tanto interventores locales como

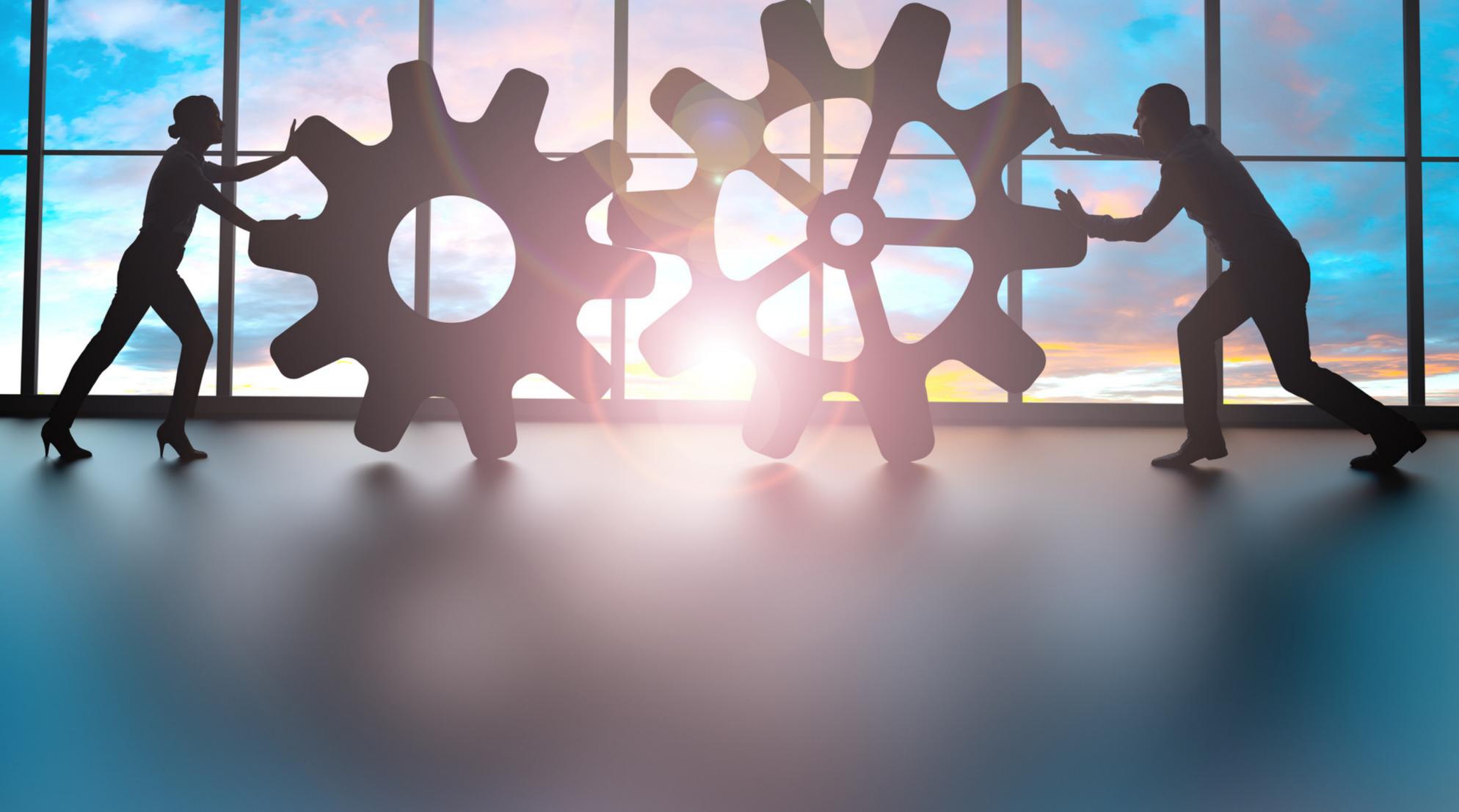
auditores privados, junto con algún desarrollo normativo posterior, permitirá superar estas dificultades que nos hemos encontrado pero que, en la inmensa mayoría de ocasiones, han sido salvadas con la voluntad y profesionalidad de todos los actores que participamos. La experiencia ha sido muy positiva y vamos a hacerlo cada vez mejor, de eso no me cabe ninguna duda.



Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor

Prensa





Pimes, auditoria i competitivitat

Article d'opinió del Sr. Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, publicat al Diari El 9 Nou el 14 de març de 2022

La crisi econòmica resultant de la llarga pandèmia de la covid-19 ha repercutit de forma ben negativa en el teixit empresarial i en l'evolució de l'ocupació, d'igual forma com ara està per veure la incidència (segurament no menor) que tindrà el conflicte bèl·lic a Ucraïna en l'economia global. Sigui com sigui, en aquest context bé resulta d'interès una reflexió en relació amb la superació d'anteriors crisis de les empreses auditades respecte de les no auditades. En termes generals, les pimes que duen a terme l'auditoria dels seus comptes anuals són més resilients i competitives que les que no ho fan en aspectes com la capacitat de vendes, la generació de llocs de treball, la rendibilitat i l'endeutament, entre d'altres, en conjuntures econòmiques adverses. Si més no, això és el que es desprèn de l'estudi L'Auditoria de Comptes en les empreses, de l'ICJCE i la Universitat d'Alcalá de Henares, amb la col·laboració del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya pel que fa a les xifres de Catalunya.

Per a l'àmbit català i en el segment de les pimes, s'han analitzat prop de 16.000 empreses que, entre el 2008 i el 2018, van satisfer les condicions de micro, petites i mitjanes empreses establertes per la Comissió Europea: volum de negoci inferior a 50 milions d'euros, balanç general inferior a 43 milions d'euros i plantilla inferior a 250 persones. D'aquestes, gairebé 16.000 pimes (totes actives en l'actualitat i amb uns ingressos d'explotació superiors a 500.000 euros en els anys 2008 a 2018), un 29,4%, audita els comptes anuals i un 70,6% no els audita.

En concret, les pimes catalanes que van auditar els seus comptes van fer créixer l'import net de la xifra de vendes entre 2008 i 2018 el 15,7%, davant el 6,5% de les no auditades en aquest mateix període, el que suposa una diferència de més de deu punts percentuals en les pimes auditades. Encara més, el resultat mitjà va ser 3,9 cops superior en les auditades el 2008, una diferència que es va incrementar a 4,7 vegades el 2018, també a favor de les que auditen els seus comptes. Si ens centrem en aquest guarisme veiem que les no auditades van augmentar-lo en els deu anys el 38% i les auditades van propulsar-lo amb més robustesa, fins a un 64,9%.

Les empreses que auditen els seus comptes anuals són més resilients i competitives

Les dades posen en evidència els avantatges de l'auditoria de comptes en matèria de transparència per a l'economia en el seu conjunt i com a factor diferencial que enforteix la competitivitat de les pimes i n'impulsa el creixement en contextos d'adversitat econòmica. Auditar els comptes reforça la confiança en elles per part del sector financer, clients, proveïdors i empleats, el que promou un desenvolupament més eficient dels negocis.

Un altre fet que s'albira és el comportament diferencial que presenten les dues tipologies de pimes en la contractació de treballadors. En el lapse comprès entre 2008 i 2018, les auditades van augmentar un 9,9% el nombre de treballadors mitjà, per davant del més ínfim creixement percentual (2,7%) en les no auditades.

De les dades obtingudes també es conclou que la rendibilitat de les pimes auditades va ser superior sempre (en cadascun dels anys de 2008 a 2018) i que la tendència va ser més acusada (a favor de les auditades) entre 2010 i 2018. En el punt àlgid de la crisi, l'any 2012, la rendibilitat va marcar el seu nivell més baix: 2,2% (auditades) i 1,6% (no auditades). Sigui com sigui, les auditades van superar molt millor les crisis i al final del període analitzat la seva rendibilitat mitjana era major que la que tenien el 2008 (5,8% vs. 5,5%), en oposició a les no auditades, que no havien pogut recuperar el nivell del 2008 (4,9% vs. 5,4%).

Per últim, l'endeutament mitjà és menor en les pimes catalanes auditades que en les no auditades. La diferència es xifrava en 3,13 punts el 2008 i en 0,41 punts el 2018. Això sí, les no auditades –a causa del seu major endeutament en cadascun dels anys tractats– van avantatjar les auditades en la seva reducció: 10,9 punts i 8,2 punts transcorreguts els deu anys, respectivament.

Ho hem vist, l'auditoria promou la transparència i la confiança, però també facilita instruments fiables per a la gestió d'empreses en general i pimes en particular.



Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor



El reestructurador en España, clave para preservar la industria

Article d'opinió del Sr. Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, publicat a Cinco Días Fin de semana 15 al 17 de abril de 2022

El proyecto de la futura Ley Concursal define esta figura especializada y que es nueva en el ordenamiento español

El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados publicó el pasado 14 de enero el proyecto de Ley Concursal como paso previo a su correspondiente tramitación en las Cortes Generales, y que da respuesta a la necesaria transposición a la normativa española de la directiva comunitaria sobre la materia.

Se trata de una regulación muy importante por sus efectos para nuestra estructura económica. En el año 2021, los concursos de acreedores aumentaron un 34% respecto del ejercicio 2020, y un 30% por encima de los niveles prepandemia, alcanzando las 5.862 compañías. Se espera que, como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia, un número muy significativo de empresas acudan a los juzgados impulsadas por sus dificultades financieras.

El 95% de los procesos concursales presentados bajo la legislación vigente acaban con la liquidación de las empresas y, casi siempre, con la dispersión y pérdida de sus activos productivos y la desaparición del empleo relacionado con la actividad económica que realizaban.

La situación es especialmente grave en relación con el sector industrial. Además de una cifra habitualmente significativa de inversiones, el desarrollo de una empresa industrial requiere la articulación de equipos humanos formados en la fabricación, distribución y mantenimiento de los productos, en definitiva, una organización compleja formada por elementos materiales y humanos. La desaparición de una industria supone casi siempre una pérdida irreparable.

La industria es un sector de una importancia capital para la economía del país. Tiene un factor multiplicador muy significativo sobre una parte destacada del sector servicios y mantiene un empleo de una cualificación mayor y mejor retribuido que muchos otros sectores económicos.

Salvar el tejido empresarial es un objetivo muy importante de la reforma concursal. Así lo entiende la propia directiva europea sobre reestructuración e insolvencia que, de acuerdo con su considerando 1, pretende garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad.

El diseño que ha hecho el legislador, dentro de los diferentes modelos que permite la directiva, es próximo al del mediador

El proyecto de Ley Concursal incorpora un libro II (del derecho preconcursal) que desarrolla el concepto nuevo de la reestructuración. Se trata de abrir negociaciones o de la homologación de un plan de reestructuración cuando el deudor se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual.

Es clave que en la reestructuración se informe sobre la viabilidad de la empresa y, en definitiva, sobre si el valor de la empresa en continuidad es superior al de la empresa en liquidación, para lo que se debe poder informar a los acreedores sobre si el plan del deudor permite una obtención de flujos de caja suficientes para pagar la deuda total o un porcentaje mayor que el que se obtendría en un proceso de liquidación.

En este contexto y en una serie de supuestos contemplados por la ley, el papel de un experto en reestructuraciones es clave. De su adecuado desarrollo e implantación dependerá en buena medida que la presente reforma logre finalmente los objetivos pretendidos por todas las regulaciones anteriores: facilitar la continuidad de las empresas viables.

El proyecto de Ley Concursal se ocupa de esa figura nueva en el derecho español: el experto en la reestructuración. Se define su estatuto, sus funciones, deberes y régimen de responsabilidad. El diseño que ha hecho la ley de esta figura, dentro de los diferentes modelos que permite la directiva, es próximo a la figura de un mediador que facilite la negociación entre las partes.

Entre otras cuestiones tiene la responsabilidad de elaborar un informe sobre el valor de funcionamiento de la empresa. A diferencia de la conocida figura del administrador concursal, el papel del reestructurador es fundamental para la confianza en el proceso de reestructuración y no es la intervención ni supervisión de los poderes de administración y disposición patrimonial del deudor.

Pensamos que los auditores de cuentas –profesionales independientes, sujetos a un código de ética y con la formación y experiencia para considerar de forma adecuada los aspectos que intervienen en un plan de reestructuración– podemos jugar un papel clave en este nuevo entorno y contamos con todos los requisitos que establece el proyecto de ley.

Son muchas las situaciones en las que en el ejercicio de nuestra función de revisión de las cuentas de las compañías hemos de valorar la razonabilidad de los planes de viabilidad. Así por ejemplo, cuando consideramos la gestión continuada de las compañías o para potenciales depreciaciones de inversiones y, también, cuando actuamos como expertos, en tanto que peritos judiciales o en procesos de due diligence.

La presente reforma concursal es una oportunidad magnífica para afrontar nuestro problema endémico que deriva en la desaparición de muchas empresas potencialmente viables, cuando se ven sometidas a dificultades para afrontar sus compromisos de pago. Por ello, de la adecuada regulación de la figura del reestructurador dependerá, a la postre, que se preserve buena parte del tejido industrial de nuestro país.

Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor





España se sitúa a la cola entre los países de la UE en auditoría de cuentas de los Ayuntamientos

Article publicat a la web [El Economista.es](https://www.elEconomista.es)
el 28 d'abril de 2022

Grecia y Portugal han avanzado notablemente en el control de las cuentas municipales

España se encuentra en el grupo de cola de los países de la Unión Europea por nivel de implantación de la auditoría en el sector de la Administración local, puesto que ni en las entidades Administrativas ni en las dependientes se lleva a cabo una auditoría anual de la información financiera, ni tampoco una auditoría de legalidad.

Según las conclusiones del estudio *La auditoría de los entes locales en la Unión Europea*, elaborado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, esta situación de falta de auditoría es contraria a la Directiva 2011/85/UE, que exige la auditoría independiente de todas las entidades del sector público de forma anual.

El estudio demuestra que economías teóricamente menos relevantes que la española, como la griega o la portuguesa, han avanzado notablemente en el control de las cuentas de los ayuntamientos y superan a España. En la mayoría de los países europeos se realizan auditorías todos los años, con diferentes modalidades, de las cuentas de las entidades locales en las grandes ciudades.

Diferentes sistemas

En el 48,15% de los países analizados, los auditores privados realizan, ya sea directa o indirectamente, la auditoría externa del sector local, ya sea de forma exclusiva o a través de modelos en los que coexiste la auditoría privada y la de los Órganos de Control Externo (30,77% de los casos).

En ocasiones, la participación de los profesionales externos se realiza a través de los propios Órganos de Control Externo, que mantienen la competencia de la auditoría del sector local pero de forma normalizada se recurre a profesionales expertos para que lleven a cabo la misma.

Por ejemplo, en Malta, donde el Órgano de Control Externo contrata a auditores privados que llevan a cabo la auditoría. España no está incluida en dicha opción porque aunque en algunas Comunidades Autónomas sí se contrata auditores privados, prácticamente se trata de situaciones puntuales y no generalizadas, mientras en Malta es esta la forma utilizada de manera habitual.

En Dinamarca, Estonia, Finlandia, Italia y Luxemburgo la totalidad de entidades incluidas en el sector local (tanto el ente principal como las entidades dependientes) quedan sometidas a una auditoría financiera y legal de forma anual, además de al control interno.

En el caso de España, el estudio constata que está entre los países donde la auditoría tiene menor alcance y deberían establecerse medidas que permitan mejorar la situación, dado que incluso en las grandes ciudades no existen auditorías anuales, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de países europeos.

En algunos de estos países existe un registro específico de auditores externos que pueden actuar en el ámbito de sector público, o incluso del sector municipal. Es el caso de Finlandia, Italia o Suecia.

En Finlandia la auditoría financiera externa es realizada por auditores de finanzas públicas certificados (Certified Public Finance Auditor-CPFA).

Sin embargo, en la mayor parte de estos países no existe diferencia entre los auditores que intervienen en el sector privado y público, si bien en ocasiones se establece algún requisito adicional que deben cumplir para intervenir en el sector público.

Este es el caso por ejemplo de Dinamarca, donde existe un registro específico de auditores del sector público y se accede a través de la formación específica en ese ámbito.

También en Francia se está valorando el paso a un modelo de este tipo, y se ha iniciado con un experimento en el que participan 25 municipios en los que los profesionales de la auditoría externos al sector público llevan a cabo la auditoría de los gobiernos locales, bajo la coordinación del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo Regionales (OCER). Dado el interés de este modelo y su reciente implantación, será objeto de análisis en un epígrafe específico.

Y en Italia existe un doble control por parte de órganos públicos y privados, dado que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo el control de los entes locales pero también es obligatorio contar con un auditor profesional o Comité de auditoría, (formado por tres auditores) cuando el municipio tiene más de 15.000 habitantes.

Actuaciones preventivas

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Ferrán Rodríguez, junto con el presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), Antoni Gómez, ha resentado este estudio durante la 13ª Jornada de Auditoría del Sector Público que se ha celebrado en formato mixto en la sede del Col·legi.

Ferrán Rodríguez ha explicado que "2020 debería de haber sido un punto de inflexión en esta situación, ya que fue el ejercicio en el que se comenzó a aplicar el Real Decreto 424/2017 que regula el control interno en las entidades del Sector Público Local. Aunque no lo decía literalmente, por las medidas que contiene y las responsabilidades que establece, en la práctica este Real Decreto exige que a partir de ese año la mayoría de las cuentas de las entidades que dependen de los Ayuntamientos de cierta dimensión sean objeto de auditorías independientes".

Para Antoni Gómez, "la auditoría externa anual cumple un objetivo esencial preventivo, no solo respecto de potenciales irregularidades sino sobre todo para asegurar que las cuentas reflejen adecuadamente la situación. Esta función debe estar desvinculada de la responsabilidad última de formulación de las cuentas, para evitar ser juez y parte. La escasa auditoría externa practicada en las cuentas de los ayuntamientos españoles -muy inferior al del sector privado también penaliza el control en lo relativo a la gestión y asignación con criterios de eficiencia de los Fondos Next Generation de la Unión Europea".

El Covid y la Guerra de Ucrania

El Covid, la guerra en Ucrania y el proceso inflacionista que han generado están requiriendo la adopción por parte de las administraciones públicas de medidas de impacto inmediato.

“La acción política ante estas coyunturas requiere agilidad, pero en procesos en los que deben prevalecer las máximas garantías, como son los de las administraciones públicas, la agilidad a menudo implica mayores riesgos y el acceso a recursos que, por requerirse de forma puntual, no están disponibles en las administraciones. Desde el inicio de la crisis sanitaria desde el Instituto trasladamos a todas las instituciones nuestra preocupación por este hecho y la necesidad de que se contase con nosotros para reducir estos riesgos” ha afirmado Ferrán Rodríguez.

Desde el ICJCE se valora positivamente el hecho de que a nivel autonómico y estatal las administraciones estén contando con la colaboración de los auditores para un mejor control de los procesos de concesión de ayudas urgentes por efectos del Covid o de la invasión de Ucrania.

A pesar de ello, el presidente del ICJCE ha concluido que “existe aún un amplio margen de mejora en la colaboración público-privada en el control externo de las Administraciones Públicas”.

Tradicionalmente, En España se ha diferenciado entre control interno y externo, teniendo en cuenta el órgano que lleva a cabo el mismo. Así, el control interno se caracteriza porque se ejerce por órganos de la propia administración con el objetivo de aportar fiabilidad y verificar el cumplimiento de la legalidad vigente y la gestión eficiente de los recursos.

En contraposición, el control externo es llevado a cabo por órganos e instituciones ajenos a la entidad auditada. Sin embargo hay que señalar que en ocasiones, la diferenciación entre ambos tipos de control no tiene lugar y son los propios auditores externos los que llevan a cabo la verificación de los procedimientos administrativos y presupuestarios.



Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor



L'EINF en les empreses lleidatanes

Article publicat a la web Segre.com
de 9 de setembre de 2022

La publicació de la nova directiva sobre l'Estat d'Informació No Financera (EINF) de la Unió Europea (UE) implicarà, en el moment en què es faci efectiva, l'emissió d'un informe hereu de l'actual, amb la denominació d'Informació de Sostenibilitat Corporativa. La nova normativa substituirà la vigent del 2014, obligarà a verificar les informacions publicades per part de professionals independents i, al mateix temps, contempla l'extensió de l'obligatorietat de l'informe sobre sostenibilitat per a empreses de més de 250 treballadors, un requisit aquest que ja resulta d'aplicació a nivell espanyol a partir d'aquest mateix 2022. En el cas concret de Catalunya (el mateix s'esdevé però per al conjunt d'Espanya) les empreses de més de 500 treballadors han de publicar, des del 2018, un EINF sobre qüestions mediambientals, socials i de personal, de respecte dels drets humans, de lluita contra la corrupció i el suborn i l'impacte en la societat.

És en tal context que sorgeix l'estudi sobre les característiques dels EINF emesos per empreses cotitzades (en mercat continu i Ibex-35) de la borsa de valors. Es tracta d'una iniciativa del Col·legi i la Càtedra Mango d'ESCI-UPF que pot orientar les empreses lleidatanes de més de 250 empleats que també l'hagin de realitzar d'ara endavant. Vegem quines són algunes de les principals conclusions que se'n poden extreure: 91 empreses (d'una mostra que formen un total de 129 companyies) van presentar l'informe el 2020, mentre que 31 restaven excloses de l'obligació per ser de menys de 500 treballadors i tres representants de l'Ibex el publiquen tot i no estar sotmeses a l'exigència. En un altre ordre de coses, un 60% de les empreses exhibeix el document de forma separada de l'Informe de Gestió o com a document annex, en contraposició al 40% que l'integra en l'informe.

I un 95% contracta firmes d'auditoria financera per a la verificació externa de l'EINF, ja que la legislació d'abast estatal exigeix la comprovació externa per un expert independent. En aquest punt, és oportú significar que l'Estat d'Informació No Financera contribueix de forma substancial a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU per al 2030 (per cert: el 78% de les empreses estudiades cita algun dels ODS). La idea a compartir amb vostè, lectora i lector, és que es produiran progressos ben notoris en aquest terreny durant els propers anys, atesos els desafiaments de la societat en matèria de sostenibilitat ambiental i social. Precisament, és des d'aquesta constatació que el sector financer aposta per canalitzar les seves inversions cap a projectes sostenibles (s'estima que més del 50% de les inversions financeres en la UE seran sostenibles el 2025) i que la Unió planeja instaurar estímuls amb el propòsit d'afavorir la inversió sostenible, mitjançant una nova taxonomia financera que faciliti i premii aquesta tipologia d'inversions.

Seguirem amatents a les novetats que es puguin produir.

Visualiza este artículo en el Blog de l'Auditor



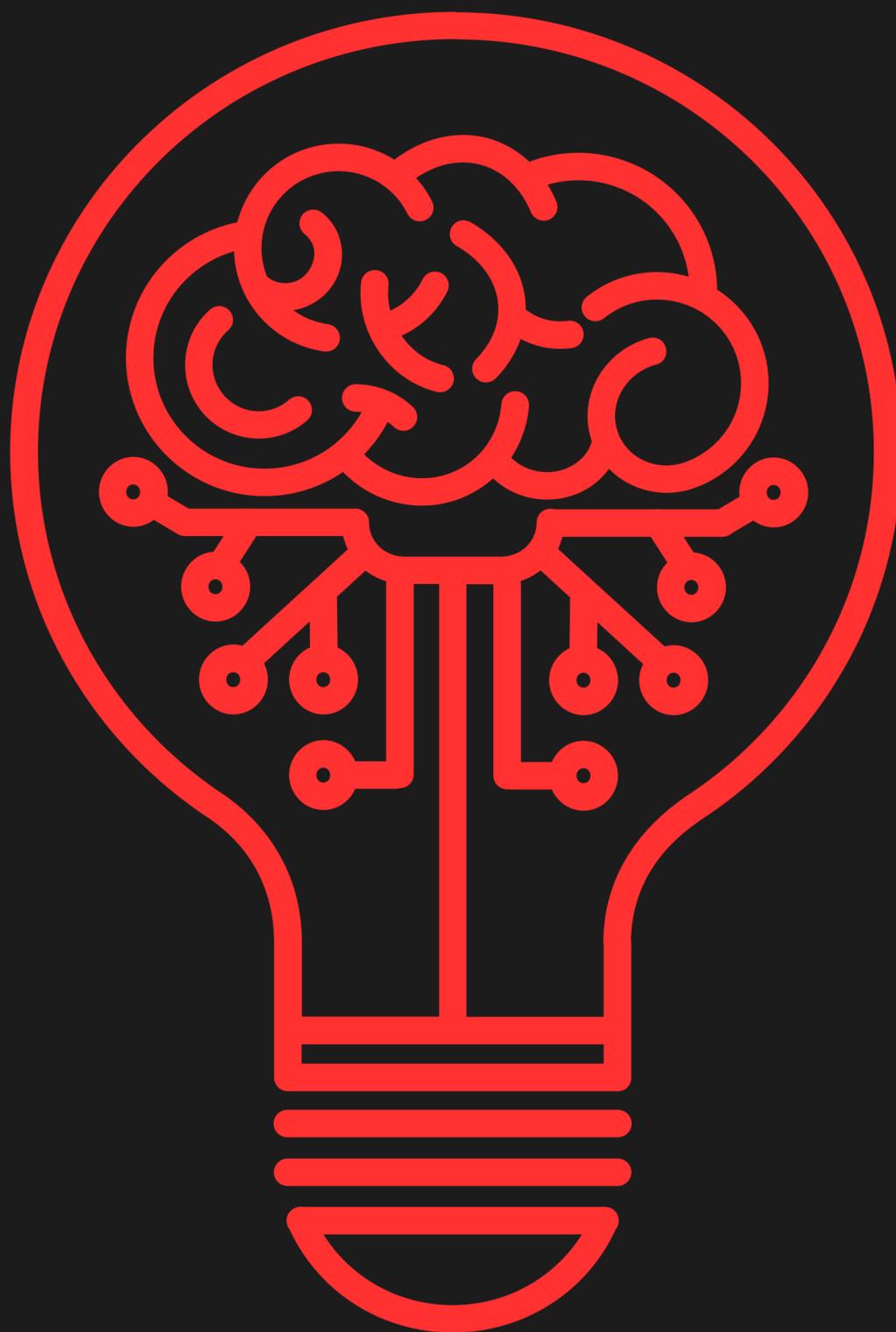
Col·legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya



EL CØL·L3G1

Sor Eulàlia d'Anzizu, 41
08034 Barcelona
Tel. 93 280 31 00
col.legi@auditorsensors.com
www.auditorsensors.com

Sor Eulàlia d'Anzizu, 41
08034 Barcelona
Tel. 93 280 31 00
col.legi@auditorsensors.com
www.auditorsensors.com



Col·legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

EL CØL·L361